
GUSTAVO PETRO
Y LA LÓGICA
FASCISTIZANTE

*Populismo plebiscitario, cesarismo
y autocratización en Colombia*

LUIS ARTURO LIZCANO GIL

CRÉDITOS Y DATOS EDITORIALES

© 2026 Luis Arturo Lizcano Gil.

Edición digital distribuida bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Primera edición. Bogotá, Colombia, 2026.

ISBN: 978-628-02-5868-3 (edición digital, PDF).

DOI de esta edición: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21896002>.

Título: Gustavo Petro y la lógica fascistizante.

Subtítulo: Populismo plebiscitario, cesarismo y autocratización en Colombia.

Autor: Luis Arturo Lizcano Gil.

Este libro es un ensayo de análisis político, histórico e institucional. Distingue hechos verificables, interpretaciones razonables e hipótesis mayores. No atribuye responsabilidad penal sin evidencia competente ni convierte una fuente auténtica en prueba automática de la interpretación propuesta.

Cierre documental sustantivo: 14 de julio de 2026. Las referencias a investigaciones, procesos judiciales y actuaciones administrativas corresponden al estado conocido a esa fecha.

Actualizaciones excepcionales posteriores al cierre: esta primera edición incorpora únicamente hechos del 20 de julio, 4 de agosto y 7 de agosto de 2026 cuando someten de forma directa a prueba criterios de alternancia, movilización, coerción, falsación y contención democrática definidos antes de esos hechos. El 7 de agosto de 2026 constituye el cierre definitivo de contenido de esta edición.

Aparato documental: las fuentes principales se encuentran enlazadas en el cuerpo y en la bibliografía. El suplemento documental digital reúne la bibliografía ampliada, las fichas de verificación y el aparato probatorio complementario. DOI general del suplemento:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21798944>. DOI de la versión utilizada en esta edición:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21856094>.

CONTENIDO

NOTA DEL AUTOR. POR QUÉ ESCRIBÍ ESTE LIBRO.....4

NOTA METODOLÓGICA.....5

GLOSARIO MÍNIMO PARA LA LECTURA.....10

INTRODUCCIÓN. LA PREGUNTA INEVITABLE.....11

PARTE I. FASCISMO SIN CARICATURAS.....17

 CAPÍTULO 1. LA PALABRA QUE EXPULSA.....18

 CAPÍTULO 2. FASCISMO HISTÓRICO, LÓGICA FASCISTA Y FASCISTIZACIÓN.....21

 CAPÍTULO 3. EL TERRENO COLOMBIANO.....26

 CAPÍTULO 4. HIPÓTESIS Y HERRAMIENTAS PARA EXAMINAR EL PODER.....30

PARTE II. OCHO EXPEDIENTES SOBRE EL PODER.....39

 CAPÍTULO 5. CUANDO EL ADVERSARIO SE CONVIERTE EN ENEMIGO.....40

 CAPÍTULO 6. CUANDO EL LÍMITE SE CONVIERTE EN CONSPIRACIÓN.....45

 CAPÍTULO 7. CUANDO LA CALLE PRETENDE HABLAR POR TODO EL PUEBLO.....54

 CAPÍTULO 8. CUANDO EL MÉRITO DEBE OBEDECER.....62

 CAPÍTULO 9. CUANDO EL DATO DEBE CONFIRMAR EL RELATO.....67

 CAPÍTULO 10. CUANDO LA CORRUPCIÓN SIEMPRE PERTENECE AL OTRO.....74

 CAPÍTULO 11. CUANDO EL MANDATO PRETENDE ESTAR POR ENCIMA DE LA REGLA.....82

 CAPÍTULO 12. CUANDO EL ESPEJO VENEZOLANO DEJA DE SER UNA EXAGERACIÓN.....91

PARTE III. DEL CASO A LA CLASIFICACIÓN.....100

 CAPÍTULO 13. LA CONVERGENCIA.....101

 CAPÍTULO 14. CÓMO LLAMAR AL FENÓMENO.....112

 CAPÍTULO 15. LA MEJOR DEFENSA Y LAS OBJECIONES DECISIVAS.....128

 CAPÍTULO 16. LA MEJOR CRÍTICA POSIBLE.....140

 CAPÍTULO 17. PRUEBA DE FALSACIÓN Y CONTRAPRUEBA DEMOCRÁTICA.....148

PARTE IV. LA PRUEBA PRESIDENCIAL.....159

 CAPÍTULO 18. ELECCIONES DE 2026 Y LEGITIMIDAD DEL VENCEDOR.....160

 CAPÍTULO 19. VEREDICTO.....174

NOTA FINAL. LA ESCENA FINAL: LO QUE CONFIRMÓ Y LO QUE NO BORRÓ.....188

APÉNDICES DE VERIFICACIÓN.....189

 APÉNDICE I. AUDITORÍA ADVERSARIAL INTEGRAL.....190

 APÉNDICE II. MAPA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS ETAPAS Y LOS CASOS COLOMBIANOS.....194

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y FUENTES PRINCIPALES.....195

NOTA DEL AUTOR

Por qué escribí este libro

No soy politólogo. Soy médico genetista. Durante décadas he trabajado con problemas en los que una primera impresión rara vez basta: hay que reunir signos dispersos, comparar explicaciones posibles, buscar lo que contradice la hipótesis inicial y decidir hasta dónde permite llegar la evidencia.

Desde niño he vivido rodeado de libros, y hay temas que, de vez en cuando, se me instalan en la cabeza y producen una especie de prurito intelectual. Leer ayuda, pero no siempre es suficiente. Necesito ordenar el problema, contrastarlo y escribirlo. Escribir termina siendo una manera de rascar esa inquietud hasta comprender qué hay realmente detrás de ella.

Este libro nació así. Durante el gobierno de Gustavo Petro empecé a reconocer discursos, conductas y mecanismos que me recordaban fenómenos descritos en la literatura sobre fascismo. Mi primera pregunta no fue si Petro era fascista. Fue más incómoda: ¿estaba viendo realmente algo de fascismo o estaba forzando una comparación por razones políticas, emocionales o históricas?

Decidí entonces tratar la pregunta como trataría un problema diagnóstico: comenzar por explicaciones más sencillas, definir qué hallazgos permitirían distinguir unas categorías de otras, construir deliberadamente la mejor explicación alternativa y establecer por anticipado qué hechos podrían obligarme a modificar o abandonar la hipótesis. De allí surgió la arquitectura de este ensayo: populismo plebiscitario, cesarismo, autocratización y mecanismos fascistizantes no aparecen como etiquetas intercambiables ni como escalones automáticos hacia un destino inevitable. Son hipótesis que deben competir entre sí.

Por eso este libro no intenta demostrar que Gustavo Petro sea un fascista histórico ni que Colombia haya vivido bajo un régimen fascista. Intenta responder una pregunta más limitada y, quizá por eso, más difícil: cuánto de la lógica fascistizante puede estar presente en un liderazgo democrático antes de que resulte metodológicamente correcto —o incorrecto— llamarlo fascismo.

Escribirlo alivió el prurito. Publicarlo tiene otra finalidad: permitir que otros examinen el razonamiento, encuentren sus errores y decidan si la conclusión resiste.

NOTA METODOLÓGICA

Este libro parte de una pregunta de investigación, no de una conclusión previamente establecida: ¿qué categoría permite describir con mayor precisión el liderazgo político de Gustavo Petro y su manera de comprender, ejercer y legitimar el poder?

La investigación no pretende determinar si el gobierno colombiano reprodujo íntegramente los regímenes fascistas del siglo XX. Una equiparación de esa naturaleza sería histórica y conceptualmente insostenible. El propósito es diferente: examinar si, dentro de un proyecto de izquierda y de un sistema que conservó elecciones, oposición y controles institucionales, aparecieron de manera reiterada mecanismos que la literatura política permite describir, secundaria y restrictivamente, como fascistizantes.

Categorías y jerarquía explicativa

Para evitar el uso indiscriminado de etiquetas políticas, el análisis distingue cuatro niveles conceptuales. El populismo plebiscitario de izquierda constituye la base explicativa; el cesarismo describe la forma de liderazgo; la autocratización identifica la dirección institucional; y la fascistización designa un conjunto más restringido de mecanismos que solo puede afirmarse cuando se supera un mínimo discriminante previamente definido.

Esta jerarquía impide que la palabra fascismo funcione como insulto, sinónimo general de autoritarismo o conclusión automática ante cualquier confrontación con las instituciones.

Unidad de análisis y lógica acumulativa

La investigación se organiza alrededor de ocho expedientes temáticos y una matriz de catorce componentes agrupados en cinco dimensiones: refundacional-redentora, moral-excluyente, plebiscitaria-personalista, institucional-excepcional y epistemológica-geopolítica.

Ningún discurso, conflicto o decisión aislada determina la clasificación. Un presidente puede emplear lenguaje agresivo, cuestionar una institución o movilizar a sus seguidores sin que ello permita hablar de fascistización. La conclusión solo adquiere fuerza cuando distintos comportamientos reaparecen, se refuerzan mutuamente y revelan una concepción coherente de la legitimidad, el adversario, el pueblo y los límites del poder.

El método es, por tanto, acumulativo: cada expediente aporta evidencia parcial y la clasificación resulta de su convergencia, no de la magnificación de un episodio singular.

Fuentes y niveles de afirmación

El análisis se apoya prioritariamente en fuentes primarias y verificables: discursos, entrevistas y publicaciones del presidente; documentos oficiales; decisiones judiciales y administrativas; actuaciones de organismos de control; registros electorales y demás documentos públicos. Estas fuentes se complementan con bibliografía académica, análisis especializados y periodismo profesional cuando son necesarios para reconstruir el contexto.

A lo largo del libro se procura diferenciar cuatro niveles:

- el hecho documentalmente acreditado;
- la interpretación razonable derivada de ese hecho;
- la hipótesis que todavía requiere evidencia adicional;
- aquello que la información disponible no permite afirmar.

Esta distinción resulta especialmente importante en procesos judiciales, investigaciones administrativas y conductas atribuidas a familiares, funcionarios o aliados. La responsabilidad política puede ser examinada sin convertirse automáticamente en responsabilidad penal, y la cercanía personal o institucional no autoriza a transferir culpabilidades.

Controles contra el sesgo de confirmación

La hipótesis inicial podía inducir a seleccionar o valorar con mayor intensidad los hechos compatibles con ella. Para identificar, controlar y reducir ese riesgo, la investigación incorporó varios procedimientos adversariales. Estos controles no pretenden afirmar que el sesgo pueda eliminarse por completo —algo imposible en una investigación interpretativa—, sino obligar a que la hipótesis enfrente la evidencia contraria, las explicaciones alternativas y las condiciones bajo las cuales debería ser modificada o abandonada.

En primer lugar, se construyó la mejor defensa posible del liderazgo de Petro. Esto implicó considerar sus explicaciones, los antecedentes que favorecen su posición, los límites que efectivamente respetó y las interpretaciones alternativas de sus actuaciones. No se utilizó una defensa artificialmente débil para facilitar su refutación.

En segundo lugar, se formuló la crítica más fuerte contra la propia tesis. Se examinó si los comportamientos observados podían explicarse suficientemente mediante categorías menos intensas, como polarización, populismo, radicalización discursiva, personalismo o conflicto institucional ordinario.

En tercer lugar, se incorporaron contrapruebas democráticas: hechos que limitan la clasificación y que habrían podido debilitarla de manera sustancial. Entre ellos se encuentran la continuidad de la competencia electoral, la existencia de oposición, la actuación independiente de tribunales y organismos de control, la ausencia de partido-milicia, la inexistencia de un partido-Estado y la preservación formal de la alternancia.

Estos controles no eliminan por completo la posibilidad de sesgo —ninguna investigación interpretativa puede garantizarlo—, pero obligan a que la hipótesis sobreviva al examen de la evidencia que la contradice y no únicamente a la acumulación de evidencia favorable.

Falsación

Una tesis seria no solo debe explicar qué hechos la respaldan; también debe indicar qué hechos podrían refutarla o hacer necesaria su revisión.

La hipótesis fascistizante habría debido debilitarse si los comportamientos analizados fueran episódicos, si pudieran explicarse enteramente mediante el conflicto político convencional, si Petro aceptara consistentemente la legitimidad de sus adversarios y de los límites institucionales, o si las cinco dimensiones definidas no aparecieran de manera reiterada y articulada.

Del mismo modo, la presencia de alternancia electoral, controles efectivos y libertades públicas impide clasificar el periodo como dictadura o régimen fascista consolidado. Tales contrapruebas no se ocultan ni se consideran anomalías irrelevantes: forman parte de los límites constitutivos de la conclusión.

Alcance del veredicto

La clasificación final es deliberadamente anidada y restrictiva. El libro no concluye que Petro encarne una reproducción completa del fascismo histórico ni que Colombia se haya convertido en un régimen fascista. Concluye que su liderazgo se comprende principalmente como populismo plebiscitario de izquierda, adopta una forma cesarista, manifiesta una dirección autocratizante y contiene una presencia extensa de mecanismos fascistizantes.

La última categoría no sustituye a las anteriores. Las complementa allí donde populismo, personalismo o autocratización no explican por sí solos la combinación entre redención política, exclusión moral del adversario, identificación plebiscitaria con el pueblo, excepcionalismo institucional y alteración estratégica de los criterios de verdad y legitimidad.

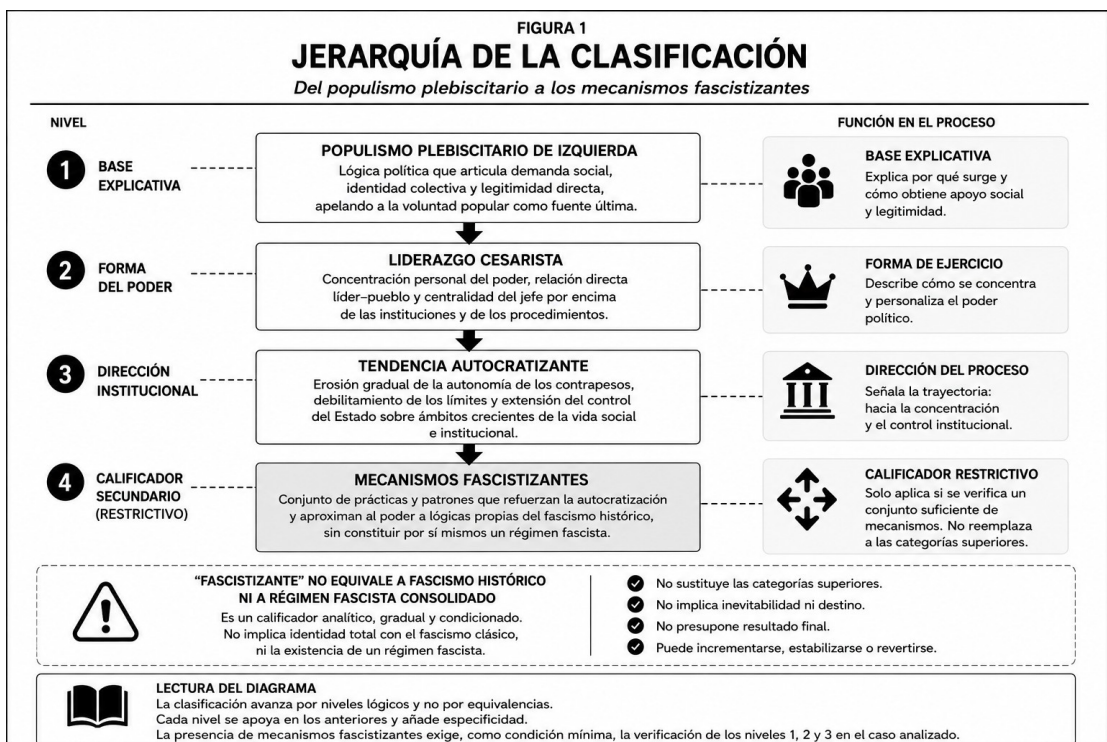


Figura 1. Jerarquía de la clasificación. Elaboración propia.

Transparencia documental

Las fuentes centrales se encuentran identificadas en el cuerpo del libro. Un suplemento documental digital conserva la bibliografía ampliada, los estados de verificación y el aparato probatorio detallado, de manera que el lector pueda examinar la correspondencia entre las fuentes, las afirmaciones y los límites atribuidos a cada evidencia. DOI general del suplemento:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21798944>. DOI de la versión utilizada en esta edición: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21856094>.

El propósito de este método no es revestir de neutralidad una posición política. Es hacerla examinable: permitir que el lector sepa cómo se construyó la conclusión, cuáles son sus fundamentos, qué objeciones enfrentó y bajo qué condiciones debería ser modificada o abandonada.

GLOSARIO MÍNIMO PARA LA LECTURA

El libro define estos conceptos en el curso del argumento. Se reúnen aquí, en lenguaje directo, para que ninguna palabra técnica se convierta en una barrera innecesaria para la lectura.

Autocratización / autocratizante. Proceso gradual mediante el cual un gobierno elegido reduce la autonomía de los contrapesos, el pluralismo o la competencia, sin necesidad de abolirlos de una sola vez. Autocratizante indica una dirección o tendencia, no una dictadura ya consolidada.

Cesarismo / liderazgo cesarista. Forma personalista de poder en la que el dirigente presenta una relación directa y superior con el pueblo, concentra en su figura el sentido del mandato y tiende a considerar las intermediaciones institucionales como obstáculos. No es sinónimo automático de dictadura.

Fascismo histórico. Movimientos y regímenes concretos del siglo XX, especialmente los de Mussolini y Hitler, caracterizados por ultranacionalismo, liderazgo absoluto, movilización de masas, violencia organizada y destrucción del pluralismo.

Fascistización / fascistizante. Fascistización es la acumulación de prácticas y lenguajes que acercan el ejercicio del poder a una lógica fascista. Fascistizante califica mecanismos funcionales semejantes sin afirmar que exista un fascismo histórico completo ni un régimen fascista consolidado.

Mínimo discriminante. Umbral de evidencia exigido por este libro para usar el calificativo fascistizante. No basta un rasgo aislado: deben converger varias dimensiones y las categorías más simples —polarización, populismo o autocratización— deben resultar insuficientes por sí solas.

Palingenesia / palingenésico. Idea de renacimiento o regeneración colectiva después de una supuesta decadencia. En los estudios sobre fascismo suele referirse a la promesa de que la nación renacerá mediante una ruptura histórica.

Populismo plebiscitario. Forma de liderazgo que divide la sociedad entre un pueblo auténtico y unas élites o enemigos, y que busca legitimar directamente al dirigente mediante el voto, la movilización o la apelación a la voluntad popular por encima de las mediaciones ordinarias.

Soberanía paralela. Pretensión de que la calle, el pueblo movilizado o un poder constituyente poseen una legitimidad superior a las instituciones cuando estas producen un resultado contrario al proyecto del líder.

Falsación / contraprueba. Falsación es la identificación anticipada de hechos que podrían debilitar o refutar una hipótesis. Una contraprueba es una evidencia real que limita la conclusión, como la autonomía efectiva de una corte, la derrota de una medida o la supervivencia de la alternancia.

INTRODUCCIÓN. LA PREGUNTA INEVITABLE

Cómo estudiar los componentes fascistizantes de un gobierno de izquierda sin convertir la historia en insulto ni la prudencia en ceguera

En Colombia, fascista se ha convertido a la vez en una de las acusaciones más graves y en una de las palabras menos precisas del debate político. Se aplica al empresario, al conservador, al periodista crítico, al defensor de la propiedad privada, al técnico que objeta una reforma o, sencillamente, a quien queda fuera del campo moral del cambio. El término conserva la carga de los regímenes más destructivos del siglo XX, pero a menudo pierde su contenido histórico. Usado de ese modo, no refuta al adversario: lo expulsa simbólicamente de la comunidad democrática.

Ese abuso produce dos errores opuestos. El primero trivializa el fascismo al convertirlo en sinónimo de toda posición desagradable. El segundo supone que, como el fascismo histórico perteneció a la extrema derecha europea, ninguno de sus mecanismos podría reaparecer bajo símbolos, causas o lenguajes de izquierda. Entre la banalización y la negación queda una pregunta más difícil: ¿puede cambiar la forma exterior mientras sobreviven operaciones profundas de construcción y concentración del poder?

1. La pregunta de este libro

Este libro no pregunta si Gustavo Petro es idéntico a Adolf Hitler o Benito Mussolini, ni sostiene que Colombia haya vivido una experiencia equivalente en violencia, represión o desenlace institucional. Pregunta algo más específico: si un dirigente proveniente de la izquierda puede reproducir una lógica fascistizante aunque su programa económico, su genealogía política y los valores con los que legitima su proyecto sean distintos de los del fascismo europeo.

La respuesta es deliberadamente doble y no permite que una mitad borre la otra. Gustavo Petro no es un fascista histórico en sentido pleno, y su gobierno no convirtió a Colombia en una dictadura ni en un régimen fascista consolidado. Pero tampoco puede comprenderse adecuadamente como un simple populista democrático de izquierda: en su liderazgo, su discurso y varias de sus respuestas frente a los límites aparece una presencia extensa —no marginal— de mecanismos fascistizantes.

Dicho sin esconder el hallazgo detrás de una cautela vacía: Petro tiene muchas cosas de fascismo.

La expresión designa aquí mecanismos funcionales históricamente centrales en las dinámicas fascistas, no la reproducción completa de su ideología. Esos mecanismos aparecen en la crisis presentada como agotamiento moral del orden; en la división entre un pueblo auténtico y enemigos degradados; en la transformación del adversario en amenaza histórica; en la identificación del líder con el pueblo; en la superioridad atribuida a la calle o al mandato sobre la mediación institucional; en la deslegitimación selectiva de los contrapesos; en la búsqueda de vías extraordinarias cuando el procedimiento ordinario frustra el propósito; en la subordinación potencial de la autonomía técnica a la lealtad; y en la administración asimétrica de la realidad, la responsabilidad y la culpa.

La conclusión, por tanto, no es que Petro esconda bajo otro nombre una copia de los regímenes de entreguerras. Es que representa un populismo plebiscitario de izquierda, de liderazgo cesarista y dirección autocratizante, dentro del cual convergen mecanismos amplios de lógica fascistizante. Su consolidación fue contenida por instituciones democráticas que conservaron capacidad real de resistencia.

2. Cuatro niveles que no deben confundirse

Para sostener esa afirmación sin desfigurar la historia, el libro distingue cuatro niveles. El fascismo histórico designa movimientos y regímenes concretos del siglo XX, caracterizados por partido-movimiento, ultranacionalismo, jerarquía, militarización, violencia organizada y destrucción del pluralismo. La lógica fascista designa una concepción del poder: pueblo homogéneo, líder redentor, enemigo interno, movilización emocional, desprecio por la intermediación y subordinación de las instituciones a una misión histórica.

La fascistización describe una trayectoria: la acumulación de prácticas, lenguajes y decisiones que desplazan gradualmente una democracia hacia esa lógica. El régimen fascista consolidado es el desenlace institucional: captura general del Estado, coerción organizada, eliminación efectiva de la oposición y clausura de la alternancia. Un gobierno puede exhibir mecanismos funcionalmente fascistizantes sin reunir el núcleo ideológico completo del fascismo histórico. En Petro no se acreditaron, como doctrina o método dominante, el ultranacionalismo palingenético, la comunidad nacional-racial orgánica, el partido-milicia ni la violencia política organizada. Estas ausencias expresan diferencias de naturaleza, no solo de intensidad, y limitan estrictamente la clasificación.

Esta distinción constituye el núcleo del argumento. Que Colombia no se haya convertido en un régimen fascista no demuestra que los componentes fascistizantes fueran imaginarios. Demuestra que la

trayectoria no se consolidó, encontró resistencias y careció de instrumentos esenciales del fascismo histórico.

2A. El mínimo discriminante: cuándo el conjunto puede llamarse fascistizante

La literatura comparada impone una advertencia decisiva: pueblo homogéneo, élite corrupta, liderazgo personalista y antipluralismo pertenecen también al repertorio del populismo. La erosión gradual de controles bajo una fachada legal pertenece al campo de la autocratización. Ninguno de esos rasgos, tomado por separado, autoriza a introducir el fascismo. Roger Griffin subraya el mito de renacimiento ultranacional como núcleo del fascismo histórico; Robert Paxton propone observar pasiones movilizadoras, alianzas, etapas y conducta efectiva, no una lista de palabras sueltas. Fuentes conceptuales: [Mudde, "The Populist Zeitgeist"](#) · [Paxton, "The Five Stages of Fascism"](#) · [Griffin, The Nature of Fascism \(1991\)](#).

Por ello, este libro utiliza fascistizante únicamente cuando convergen cinco dimensiones: una misión refundacional o redentora; una división moral que convierte al adversario en enemigo; la fusión plebiscitaria entre líder y pueblo; la movilización y la excepcionalidad como vías para superar el límite; y una dirección antipluralista que subordina reglas, árbitros o hechos a la misión histórica. Si esa convergencia no existe, la explicación debe permanecer en categorías más parsimoniosas: polarización, populismo, patronazgo, abuso retórico o autocratización.

Los catorce componentes examinados al final no son catorce votos independientes. Varios son manifestaciones distintas de una misma dimensión y producirían doble conteo si se sumaran mecánicamente. Su valor reside en la convergencia entre ámbitos, la persistencia temporal, el escalamiento frente a los límites y la capacidad de las explicaciones rivales para explicar el patrón completo.

Regla adversarial: la clasificación de base es populismo plebiscitario con tendencia autocratizante. "Fascistizante" funciona como calificador secundario y restringido para el agrupamiento de mecanismos que exceden el populismo ordinario; no reemplaza la genealogía histórica ni afirma identidad taxonómica plena.

3. Qué debe probar una acusación de esta gravedad

Una semejanza aislada no basta. Casi cualquier gobernante puede pronunciar una frase intolerante, atacar a un periodista, preferir aliados o exagerar un logro. La hipótesis solo adquiere peso cuando los mecanismos se repiten, convergen en ámbitos distintos, persisten en el tiempo, escalan frente a la resistencia y apuntan en una misma dirección. Convergencia no significa sumar episodios correlacionados: exige distinguir hechos independientes de manifestaciones de una

misma conducta y preguntar qué explicación rival integra el conjunto con menor costo conceptual.

Cada afirmación conserva tres niveles separados: hecho verificable, interpretación razonable e hipótesis mayor. Una decisión judicial, un discurso o una cifra pueden estar documentados; su función política requiere interpretación, y la clasificación del conjunto exige una inferencia adicional. Confundir esos planos convertiría la investigación en un expediente de confirmación.

El método obliga además a construir la mejor defensa posible de Petro, la mejor crítica, las contrapruebas democráticas y criterios de falsación definidos antes del desenlace. Los abusos reales del orden anterior, la desigualdad, la exclusión, la corrupción, el bloqueo político y los sesgos de algunas instituciones no son excusas que deban ignorarse: forman parte de la explicación causal. Del mismo modo, las derrotas del Gobierno ante cortes, Congreso, prensa, gobiernos territoriales y árbitros electorales no son ruido, sino evidencia de que la democracia mantuvo defensas efectivas.

4. Los ocho expedientes y la prueba acumulativa

La investigación se organiza alrededor de ocho capítulos probatorios. Examina el etiquetamiento moral y la construcción del enemigo; la transformación del límite institucional en conspiración; la pretensión de que la movilización oficialista hable por todo el pueblo; la tensión entre inclusión, mérito y autonomía técnica; la selección política de datos y causalidades; la administración asimétrica de la corrupción y la culpa; la apelación al mandato, la excepción y el poder constituyente; y, finalmente, Venezuela como espejo de una trayectoria regional de erosión democrática.

Ningún expediente decide por sí solo la clasificación. Su fuerza surge al cruzarlos en una matriz común, compararlos con populismo, cesarismo, democracia iliberal, autocratización y fascismo, y someter el resultado a defensa, crítica y falsación. El orden es deliberado: primero se pregunta si el populismo antipluralista explica el caso; después, si existe una dirección autocratizante; solo al final se examina si la convergencia refundacional, enemistadora, plebiscitaria y excepcional justifica el calificador fascistizante.

5. Lo que este libro no afirma

La contundencia del hallazgo exige igual contundencia en sus límites. No se demostró un ultranacionalismo palingenético —centrado en la promesa de renacimiento nacional— como doctrina dominante, una comunidad nacional-racial orgánica, un partido-milicia, violencia oficialista organizada como método central,

cierre general de medios, encarcelamiento sistemático de opositores, partido-Estado, captura total de cortes y Congreso, fraude electoral probado, prolongación del mandato ni eliminación material de la alternancia. Tampoco se atribuye responsabilidad penal a partir de investigaciones abiertas ni se convierte la cercanía política en culpabilidad.

Esos límites impiden clasificar el gobierno de Petro como fascista consolidado y también tratarlo como un fascismo histórico incompleto al que solo le faltó tiempo. Algunas diferencias son cuantitativas; otras, constitutivas. El argumento se limita a afirmar una convergencia amplia de mecanismos fascistizantes dentro de un fenómeno cuya clasificación principal sigue siendo populista y autocratizante.

6. La democracia colombiana como variable explicativa

El desenlace colombiano no depende únicamente de las intenciones del gobernante. Depende también de la fortaleza relativa del sistema que lo contiene. Congreso, cortes, organismos de control, prensa, oposición, gobiernos territoriales, burocracias técnicas y árbitros electorales conservaron márgenes de autonomía. Algunas decisiones del Ejecutivo fueron anuladas, otras modificadas, varias reformas debieron negociarse y la oposición mantuvo capacidad electoral.

Por eso la supervivencia democrática no debe utilizarse retrospectivamente para absolver toda la trayectoria. Es, en buena medida, el resultado de la resistencia institucional. La afirmación de que el mismo liderazgo habría avanzado más en un sistema débil es un contrafactual plausible, no una prueba empírica del caso colombiano; se utiliza como advertencia comparativa y nunca como sustituto de evidencia.

7. Guía de lectura: cuatro funciones distintas

El libro conserva cuatro funciones que no deben confundirse. La arquitectura conceptual formula las preguntas y los mecanismos posibles; los capítulos probatorios contrastan esas hipótesis con casos delimitados; la matriz y la comparación conceptual evalúan la convergencia y la categoría más parsimoniosa; la defensa, la crítica, la falsación y las conclusiones determinan qué explicación sobrevive al conjunto.

Cuando una idea reaparece, no cumple necesariamente la misma función: primero puede presentarse como posibilidad teórica, después como hallazgo empírico y finalmente como criterio de clasificación. La reiteración solo se justifica cuando permite seguir ese cambio de nivel y reconocer la trazabilidad del argumento.

El lector no necesita aceptar de antemano la conclusión. Solo debe conceder que una palabra tan grave no puede ser monopolio de una identidad ideológica ni quedar congelada en su uniforme histórico. El desafío consiste en decidir si la evidencia muestra únicamente retórica populista intensa o una configuración más

profunda. Este libro sostiene lo segundo, pero expone también las pruebas que limitan esa afirmación y las condiciones capaces de debilitarla.

PARTE I. FASCISMO SIN CARICATURAS

CAPÍTULO 1. LA PALABRA QUE EXPULSA: DE CATEGORÍA HISTÓRICA A CONDENA MORAL

1.1. De categoría histórica a condena moral instantánea

En la conversación cotidiana, fascista suele funcionar como una palabra contenedora. Dentro de ella caben el conservador, el empresario, el banquero, el periodista crítico, el ciudadano en una situación económica favorable o quien defiende instituciones que limitan al Gobierno. El término deja de describir una estructura política y pasa a clasificar moralmente.

Ese ensanchamiento semántico permite una operación eficaz: transformar diferencias de ingreso, educación, propiedad o visión política en culpabilidad. Quien ha progresado deja de ser una persona que pudo haber trabajado, heredado, recibido mejores oportunidades, acertado o incluso obtenido ventajas injustas; se convierte en responsable directo de que otros no hayan progresado. La desigualdad real y la frustración legítima dejan de dirigirse contra mecanismos concretos y se concentran en grupos humanos presentados como esencialmente abusivos.

No toda crítica a las élites nace de la envidia ni toda desigualdad es imaginaria. Colombia tiene barreras de movilidad, corrupción, concentración de oportunidades y privilegios injustificados. El problema aparece cuando el gobernante sustituye el análisis institucional por una moralización total: los ricos, los medios, los bancos, los técnicos o los opositores dejan de ser actores diversos y pasan a integrar una categoría colectiva de ilegitimidad.

En ese contexto, el uso reiterado de fascista puede cumplir una doble función. Hacia afuera, degrada al contradictor hasta hacerlo indigno de escucha. Hacia adentro, refuerza la pertenencia: quien acompaña el proyecto ya no es solo alguien que prefiere ciertas políticas, sino quien ocupa el campo correcto de la historia.

1.2. Fascismo histórico y lógica fascista

La clasificación histórica predominante sitúa el fascismo europeo en la extrema derecha: ultranacionalista, antidemocrático, jerárquico, militarista, antimarxista y organizado alrededor de un líder y un partido-movimiento. Negar esa genealogía volvería vulnerable el argumento. Aceptarla, sin embargo, no obliga a reducir el fascismo a una pieza de museo incapaz de transformarse.

Conviene distinguir cuatro conceptos. El fascismo histórico designa los movimientos y regímenes concretos del siglo XX. La lógica fascista describe una concepción del poder: líder redentor, pueblo homogéneo, enemigo interno,

movilización emocional, desprecio del pluralismo y subordinación de instituciones. La fascistización es el proceso de acumulación de esos mecanismos. El régimen fascista consolidado es el resultado en el que la alternancia, la oposición y los contrapesos han sido neutralizados.

Bajo esta distinción, un movimiento puede conservar contenidos económicos de izquierda, invocar la igualdad, defender minorías y emplear un lenguaje progresista mientras adopta métodos totalizantes. De manera simétrica, un movimiento de derecha puede defender el mercado y la propiedad mientras reproduce los mismos mecanismos de exclusión y concentración.

La tesis no afirma que comunismo, socialismo, marxismo y fascismo sean idénticos; tampoco que toda intervención estatal sea socialista ni que toda derecha sea fascista. Sostiene que ciertos métodos de dominación pueden atravesar genealogías ideológicas distintas. El eje izquierda-derecha no agota la pregunta por la relación de un movimiento con el pluralismo, la ley y la alternancia.

1.3. Hitler, Mussolini y el aprendizaje del método

Mussolini llegó primero. El fascismo italiano mostró que un movimiento podía aprovechar crisis, miedo y frustración; combinar movilización de masas con intimidación; revestir al líder de teatralidad; acceder al poder mediante mecanismos formalmente legales y desmontar después la democracia desde dentro. La dictadura no apareció completa el día de la Marcha sobre Roma. Se consolidó gradualmente.

Hitler observó ese precedente. La expresión alumno aventajado debe entenderse como metáfora histórica, no como una relación escolar formal. Tras fracasar en su intento insurreccional, adaptó la estrategia: elecciones, propaganda, alianzas, utilización de la legalidad y posterior demolición de la legalidad. El itinerario muestra que los métodos autoritarios se estudian, se copian, se corrigen y se radicalizan.

Fascismo italiano y nazismo no fueron idénticos. El racismo biológico, el antisemitismo exterminador y el expansionismo fueron mucho más centrales en el nazismo. Pero la divergencia doctrinal no elimina el aprendizaje de estructuras políticas: movimiento, líder, masas, enemigo, crisis, acceso legal, excepción y concentración.

La lección histórica incómoda es que el fascismo no comienza con su desenlace. Comienza cuando la sociedad todavía cree contemplar únicamente discursos encendidos, promesas de reparación, movilizaciones, choques ordinarios con instituciones y llamados a superar una crisis. Definirlo solo por sus crímenes finales impediría reconocer una trayectoria mientras aún puede ser contenida.

1.4. Hitler y la palabra socialismo

El nombre Partido Nationalsocialista Obrero Alemán no permite concluir sin más que Hitler fue socialista en el sentido marxista, socialdemócrata o igualitario. El nazismo fue violentamente antimarxista, persiguió comunistas y socialdemócratas, rechazó el internacionalismo y subordinó la lucha de clases a una comunidad nacional racial y jerárquica.

Tampoco fue liberalismo económico clásico. Permitió propiedad privada, pero supeditada a los objetivos del Estado, la guerra y la nación. La palabra socialismo cumplió una función nacionalizadora y totalizante: integrar al trabajador en una comunidad orgánica dirigida por el Führer, no emanciparlo mediante igualdad de clases.

Esta precisión fortalece, no debilita, la hipótesis: muestra cómo los movimientos totalitarios toman palabras de distintas tradiciones, las vacían o redefinen y las ponen al servicio de una nueva legitimidad.

El capítulo 1 despejó el terreno semántico e histórico. El siguiente expone la secuencia de mecanismos que permite distinguir un exabrupto aislado, un populismo antipluralista y una trayectoria de fascistización.

CAPÍTULO 2. FASCISMO HISTÓRICO, LÓGICA FASCISTA Y FASCISTIZACIÓN

2.1. Crisis, miedo, frustración y sensación de decadencia

Los movimientos totalizantes no inventan necesariamente los dolores sociales. Trabajan con experiencias auténticas: pobreza, humillación, corrupción, violencia, desigualdad, exclusión, desempleo, inseguridad o pérdida de confianza. Su eficacia nace precisamente de que el punto de partida no es imaginario.

El paso político consiste en integrar sufrimientos distintos en una explicación única. La complejidad se simplifica, el sistema entero aparece capturado y se identifica un grupo responsable. El malestar real se transforma en culpable colectivo; el culpable colectivo exige un líder reparador; el líder reparador solicita movilización y permiso para romper límites.

El esquema puede resumirse así: malestar real, explicación moral simplificada, enemigo, líder, movilización y excepcionalidad. Fue central en el nazismo, puede reconocerse en la deriva venezolana y será contrastado con el discurso y la conducta de Petro sin asumir equivalencias automáticas.

2.2. División moral de la sociedad

La sociedad plural se reduce a dos campos: el pueblo auténtico y quienes lo explotan, traicionan o sabotean. Las diferencias programáticas se vuelven diferencias morales. El adversario ya no representa intereses, errores o concepciones distintas; encarna un obstáculo histórico.

Cuando el líder reclama representar al verdadero pueblo, una parte de la ciudadanía es expulsada de la definición misma de pueblo. Puede conservar derechos formales, pero pierde legitimidad simbólica. Así se prepara una ciudadanía de dos niveles: quienes pertenecen a la historia y quienes se interponen en su camino.

2.3. Construcción del enemigo

Los problemas complejos necesitan rostros simples. Dependiendo del contexto, el enemigo puede ser el rico, el banquero, el empresario, el medio, el técnico, el juez, el policía, el militar, el congresista, la oligarquía, el imperialismo o el fascista. La construcción no exige que todos esos actores sean inocentes. Exige borrar sus diferencias internas y convertir conductas concretas en atributos esenciales.

La acusación fascista es particularmente útil porque no describe solo un error. Sugiere que el adversario es peligroso, antidemocrático y moralmente

despreciable. Una vez aceptada esa clasificación, limitar sus derechos o ignorar sus argumentos puede parecer una defensa de la democracia.

2.4. El líder redentor

El dirigente deja de presentarse como administrador temporal y pasa a encarnar una misión histórica. Su biografía, su sufrimiento, su lucha y su lectura del país se funden con el destino colectivo. El programa deja de ser una opción entre varias y se transforma en la ruta necesaria de emancipación.

La identificación líder-pueblo produce una consecuencia decisiva: controlar al líder puede narrarse como controlar al pueblo; investigarlo, como perseguir al pueblo; derrocarlo, como interrumpir la historia. La crítica personal y la crítica institucional se confunden.

2.5. Movilización emocional permanente

El movimiento necesita que la política no vuelva a la normalidad. Debe existir siempre una batalla, una amenaza, un golpe, una oligarquía que regresa, un fascismo que avanza o una emergencia que no permite pausa. La indignación permanente disciplina a los seguidores, reduce la autocrítica y convierte la moderación en sospecha.

La movilización puede ser perfectamente democrática. Las marchas, protestas y consultas son instrumentos legítimos. El problema aparece cuando la calle es utilizada como fuente superior de soberanía para presionar o invalidar instituciones elegidas y cuando solo la movilización propia es definida como expresión auténtica del pueblo.

2.6. Deslegitimación del adversario y fractura cognitiva

La polarización afectiva comienza cuando ya no se rechaza solo una idea, sino a quien la sostiene. El adversario se vuelve bruto, ignorante, estúpido, fascista, paraco, esclavo que defiende al amo o enemigo del cambio. El insulto explica el desacuerdo atribuyéndolo a una deficiencia moral o cognitiva.

La secuencia psicológica es reconocible: agravio, explicación totalizante, pertenencia emocional, sensación de conciencia superior, desprecio del contrario y disminución de su legitimidad política. El movimiento no necesita demostrar que posee razón en cada asunto; le basta con enseñar que estar con el proyecto es prueba de lucidez.

No obstante, denunciar esta jerarquización obliga a no reproducirla al revés. No todos los seguidores de Petro son ignorantes ni todos sus opositores son analíticos. Personas educadas pueden racionalizar identidades políticas con gran sofisticación.

La pasión puede obnubilar la razón en todas las ideologías. La diferencia relevante no es entre grupos naturalmente inteligentes e incapaces, sino entre quienes someten sus creencias a contraste y quienes las vuelven inmunes a la evidencia.

La responsabilidad del liderazgo no depende de haber inventado cada insulto. Depende de si proporciona categorías de desprecio, comparte ataques, premia la humillación, aplica condenas asimétricas o presenta a sus contradictores como moralmente degradados.

2.7. Legalidad combinada con presión extrainstitucional

Los movimientos autoritarios contemporáneos no necesariamente rechazan la legalidad desde el comienzo. Pueden utilizar elecciones, decretos, consultas, movilización, asambleas y recursos judiciales. La cuestión es cómo reaccionan cuando esos procedimientos no producen el resultado esperado.

La fórmula problemática conserva las instituciones cuando coinciden con el proyecto y construye una legitimidad paralela cuando lo frenan. Así aparece una soberanía duplicada: el Congreso formal frente al pueblo movilizado; la decisión judicial frente al mandato histórico; la regla frente a la justicia definida por el líder.

2.8. Ataque a los contrapesos

Una democracia constitucional está diseñada para que ganar la Presidencia no equivalga a gobernar sin límites. El Congreso puede rechazar reformas; las cortes invalidar actos; los órganos electorales investigar campañas; la prensa revelar irregularidades; los bancos centrales resistir presiones.

La crítica a esas instituciones es legítima. La pregunta es si existe un patrón según el cual cada límite desfavorable se presenta como bloqueo, golpe, sabotaje o defensa de privilegios. Cuando el líder encarna al pueblo, el contrapeso deja de parecer democrático y se vuelve sospechoso.

2.9. Modificación de reglas y colonización institucional

Antes de capturar una institución puede resultar útil desacreditarla. Cuando la ciudadanía cree que una carrera, un cuerpo técnico, una corte o una fuerza pública carecen de legitimidad, su intervención puede presentarse como democratización en lugar de captura.

La colonización no requiere abolición inmediata. Puede avanzar mediante cambios de requisitos, nombramientos de confianza, creación de burocracias paralelas, debilitamiento de carreras, reemplazo de técnicos y subordinación de recursos al proyecto. El criterio decisivo es si se fortalecen reglas impersonales o si se aumenta la dependencia de personas y organizaciones respecto del líder.

2.10. Debilitamiento de la alternancia

La prueba más reveladora de un liderazgo democrático no es cómo gobierna cuando gana, sino cómo acepta perder. Un presidente temporal admite que su sucesor puede revertir políticas, que el electorado puede equivocarse según su criterio y que aun así conserva el derecho de elegir.

Una lógica totalizante concibe la alternancia como retorno del mal. Si el proyecto encarna la justicia histórica, su derrota no puede ser un resultado ordinario; debe explicarse por fraude, manipulación, miedo o conspiración. La continuidad deja de ser preferencia y se convierte en obligación moral.

2.11. Consolidación coercitiva

Colombia no llegó a una dictadura fascista consolidada. Persistieron elecciones competitivas, oposición, prensa, Congreso, cortes y Fuerza Pública institucional. Esta constatación es indispensable.

Pero esa constatación no resuelve toda la pregunta. La ausencia del desenlace puede deberse a falta de intención, límites del proyecto, incompetencia, fragmentación política o resistencia de los contrapesos. El análisis debe establecer qué explicación se ajusta mejor, sin usar el fracaso como prueba automática de inocencia ni la sospecha como prueba automática de intención.



Figura 2. Secuencia funcional de la lógica fascistizante. Elaboración propia.

CAPÍTULO 3. EL TERRENO COLOMBIANO: AGRAVIO, AUTORIDAD MORAL Y ESTADO PROFESIONAL

Este capítulo sitúa el caso presidencial en un terreno político y cultural anterior a 2022. Identifica procesos que requieren contraste, pero no atribuye coordinación centralizada ni convierte la convergencia de lenguajes y actores en prueba de una estrategia común.

3.1. Un proyecto anterior a la Presidencia

La elección de Petro en 2022 no constituye necesariamente el comienzo del fenómeno, sino la llegada al Ejecutivo de una corriente político-cultural desarrollada durante años. Petro no creó todas las organizaciones, denuncias, movilizaciones ni inconformidades. Su papel pudo ser el de un gran sintetizador: reunir agravios dispersos, proporcionarles un vocabulario, identificar adversarios comunes y convertirlos en identidad electoral.

Hablar de un proyecto anterior no implica afirmar una conspiración centralizada. Los procesos culturales pueden surgir de activistas, académicos, movimientos, organizaciones sociales, jueces, medios alternativos y dirigentes que convergen sin obedecer a una dirección única. Lo relevante es establecer si existe continuidad verificable de lenguajes, actores, redes, objetivos y estrategias.

La narrativa habría presentado al orden colombiano como esencialmente controlado por élites corruptas; a las instituciones tradicionales como moralmente sospechosas; a la Fuerza Pública primordialmente como aparato represivo; a sectores empresariales como beneficiarios estructurales de la violencia; y a los movimientos sociales como expresión más auténtica del pueblo.

Parte de este diagnóstico se apoyaba en realidades atroces. Colombia padeció parapolítica, corrupción, violencia guerrillera y paramilitar, exclusión, abusos policiales y asesinatos de civiles presentados como bajas en combate. El punto no es negar esos hechos, sino estudiar si fueron integrados en una explicación totalizante que borró la diferencia entre reformar el Estado y deslegitimarlo.

3.2. De la denuncia legítima a la deslegitimación totalizante

Una democracia no fortalece sus instituciones ocultando sus crímenes. Los falsos positivos exigían verdad, responsabilidad, reparación y reforma. La institución que investiga y sanciona recupera legitimidad; la que encubre la pierde.

Sin embargo, puede ocurrir un desplazamiento. Se parte de un crimen real, se difumina la diferencia entre perpetradores, mandos, unidades y totalidad institucional, y se convierte la defensa de la función constitucional en complicidad

con el abuso. El policía o militar aparece sospechoso por pertenencia, no por conducta.

Reformar una institución significa exigirle que cumpla mejor su misión. Deslegitimarla significa persuadir a la sociedad de que esa misión es en sí misma opresión. El resultado puede ser un desmantelamiento moral: la estructura material permanece, pero pierde autoridad, confianza y posición social.

Esa erosión previa facilita intervenciones posteriores. Una institución presentada durante años como indigna de defensa puede ser sometida con menor resistencia, porque parte de la ciudadanía interpreta su debilitamiento como reparación histórica.

3.3. La Primera Línea y la inversión selectiva de legitimidades

El estallido social de 2021 fue heterogéneo. Incluyó protesta pacífica, reclamos legítimos, jóvenes que protegían manifestantes, resistencia civil, bloqueos, vandalismo, agresiones y conductas investigadas como delitos. También existieron denuncias graves y documentadas de uso desproporcionado de la fuerza por agentes estatales.

El Estado debe soportar un estándar superior porque porta armas y ejerce autoridad. Pero ese estándar no convierte toda violencia particular en legítima. La asimetría problemática aparece cuando la violencia estatal se generaliza como esencia de todo el orden y la violencia afín se explica exclusivamente por sus agravios.

Al funcionario se le juzga por su conducta y se extiende su culpa a la institución. Al actor afín se le juzga por su sufrimiento y se reduce el peso de su conducta. Se produce una distribución ideológica de inocencia y culpabilidad.

La Primera Línea pudo adquirir además valor simbólico como sujeto histórico juvenil: barrera defensiva del pueblo frente al aparato represivo. Esa construcción transfiere autoridad moral desde la institución hacia la resistencia extrainstitucional. No prueba por sí sola fascismo, pero encaja como herramienta de movilización emocional, creación de héroes, tolerancia selectiva de la violencia y duplicación de la soberanía.

3.4. La construcción de una nueva autoridad moral

Todo proyecto refundacional debe responder quién merece gobernar y quién posee autoridad para definir el bien común. En una democracia pluralista, ninguna parte encarna por sí sola al pueblo. El estudiante, el policía, el empresario, el campesino, el sindicalista, el juez, el trabajador y el opositor conservan legitimidad política.

La narrativa populista altera esa simetría. El pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se redefine como la fracción moralmente privilegiada que acompaña el proyecto. Los movimientos sociales, jóvenes movilizados, minorías y excluidos reciben una presunción de virtud; instituciones tradicionales, técnicos, empresarios, medios y opositores, una presunción de sospecha.

La inclusión histórica de sectores marginados es legítima. El riesgo aparece cuando la exclusión pasada produce superioridad moral automática y cuando la identidad del actor determina el juicio antes que su conducta. Una protesta aún es justa antes de evaluar sus métodos; una actuación policial es represiva antes de conocer el caso; una decisión favorable es independiente y una adversa, bloqueo.

La autoridad deja de provenir de reglas comunes y se deriva de la ubicación dentro del relato. Así se prepara la idea de que las instituciones que no obedecen al movimiento son antidemocráticas precisamente porque limitan a quien dice representar al pueblo.

3.5. La fractura cognitiva y moral de la ciudadanía

La nueva jerarquía no es solo moral. También puede ser cognitiva. Los seguidores aparecen como quienes despertaron, comprendieron la historia y adquirieron conciencia. Los contradictores serían personas engañadas por los medios, incapaces de entender sus intereses o intelectualmente deficientes.

Expresiones como burros, brutos, ignorantes, fachos, paracos o esclavos que defienden al amo no discuten ideas. Convierten el desacuerdo en prueba de inferioridad. El adversario deja de merecer persuasión porque su oposición confirma su incapacidad.

Esta fractura puede operar en personas muy formadas. El razonamiento motivado permite utilizar conocimiento e inteligencia para proteger una identidad. Por eso el desconocimiento histórico facilita la manipulación, pero no la explica por completo. También intervienen pertenencia, miedo a abandonar el grupo, costos sociales, esperanza, resentimiento y necesidad de coherencia.

La fórmula la pasión obnubila la razón es válida si se aplica universalmente. Sería contradictorio denunciar la superioridad petrista para reemplazarla por una superioridad opositora. El ensayo debe defender una ciudadanía de iguales, evaluada por argumentos y conductas, no por afiliación.

3.6. Inclusión, mérito y Estado profesional: la falsa disyuntiva entre inclusión y competencia

La discusión se desplaza ahora hacia el Estado profesional. La cuestión no es oponer inclusión y mérito, sino distinguir diversidad legítima, confianza gubernamental, patronazgo verificable y reducción de la autonomía técnica.

La inclusión de personas pobres, afrocolombianas, indígenas, jóvenes, mujeres, campesinos y personas LGBT es un objetivo democrático. El origen social no puede convertirse en barrera automática.

Pero de allí no se sigue que formación, experiencia e idoneidad sean privilegios fascistas. La falsa disyuntiva afirma que o gobiernan los privilegiados preparados o se permite gobernar a los excluidos sin credenciales. La alternativa democrática es ampliar la formación y el acceso, sosteniendo requisitos relacionados con la complejidad del cargo.

Un hijo de obrero puede ser embajador. Democratizar la diplomacia significa que pueda aprender idiomas, formarse, competir y acceder a una carrera abierta; no necesariamente disminuir la preparación exigida. La defensa del mérito no debe usarse para cerrar el Estado, pero la inclusión tampoco debe funcionar como cobertura para sustituir competencia por lealtad.

3.7. Desprofesionalización y colonización simbólica

La operación discursiva más eficaz no anuncia que se rebajarán requisitos para acomodar aliados. Se presenta como reparación: durante siglos las élites cerraron el Estado y ahora el pueblo recupera su lugar.

El funcionario insuficientemente preparado puede transformarse en símbolo del joven, el pobre o la minoría que por fin derrota a las élites. La objeción técnica queda expuesta a ser reinterpretada como clasismo, racismo, homofobia o resistencia al cambio.

La desprofesionalización puede producir cuerpos técnicos más débiles, funcionarios dependientes del patrocinador, pérdida de memoria institucional y menor capacidad para resistir órdenes inconvenientes. Un Estado basado en confianza personal y gratitud es más fácil de controlar que uno sostenido por carreras y procedimientos.

Los casos deben evaluarse individualmente. Juliana Guerrero permite examinar cómo una persona con cuestionamientos sobre formación y verificación llegó cerca de un cargo relevante. En cambio, no sería riguroso afirmar que un ministro fue designado únicamente por ser gay sin revisar su trayectoria: la orientación sexual no demuestra capacidad ni incapacidad.

CAPÍTULO 4. HIPÓTESIS Y HERRAMIENTAS PARA EXAMINAR EL PODER

4.1. Del decreto constitucional a la decisión plebiscitaria

No todo gobierno por decreto es autoritario. Los presidentes deben reglamentar leyes, organizar la administración y actuar dentro de competencias constitucionales. El problema surge cuando el decreto pretende obtener por vía ejecutiva lo que no se consiguió mediante el procedimiento que correspondía.

La narrativa decisiva es que el Congreso no expresa un desacuerdo legítimo, sino que impide reformas que por definición benefician al pueblo. En ese marco, negociar, modificar o aceptar una derrota parece menos democrático que recurrir a consulta, movilización, decreto o poder constituyente.

El decreto de convocatoria de la consulta popular de 2025 constituye un expediente decisivo. Su importancia no depende solamente de su legalidad final, sino de la concepción del poder que reveló: la posibilidad de desplazar una decisión legislativa adversa porque el Ejecutivo se atribuye una legitimidad popular superior.

Este episodio puede encajar simultáneamente en la división moral, la construcción del enemigo, la soberanía duplicada, el contrapeso convertido en bloqueo, la democracia condicionada al resultado, la legalidad acompañada de presión extrainstitucional y el gobierno mediante emergencia moral.

La pregunta no es si la reforma era conveniente. Puede haber argumentos sociales sólidos a favor. La pregunta institucional es si un gobernante puede declarar que su propuesta representa al pueblo y concluir que el Congreso pierde legitimidad al rechazarla.

4.2. Del contrapeso al bloqueo o al golpe

Congreso, cortes, Fiscalía, Procuraduría, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral, Banco de la República y prensa cumplen funciones distintas. Todos pueden equivocarse, sesgarse o abusar. Criticarlos no es antidemocrático.

Lo que debe examinarse es la repetición de una fórmula: cuando una institución avala al Gobierno, confirma la democracia; cuando lo limita, participa en una conspiración, golpe o bloqueo. La voluntad popular deja de estar mediada por reglas y se identifica con la agenda presidencial.

El poder constituyente puede ser democrático. La Constitución de 1991 surgió de un proceso constituyente. El riesgo aparece cuando se invoca como respuesta a la

falta de votos para un programa ordinario, presentando las intermediaciones constitucionales como ataduras ilegítimas.

La disputa por el poder no ocurre únicamente en el terreno jurídico. También se libra sobre la definición de la realidad, la atribución de responsabilidades y la autoridad concedida a los datos. Los apartados siguientes completan el mapa de mecanismos que será contrastado en los ocho expedientes.

REALIDAD, RESPONSABILIDAD Y APRENDIZAJE

4.3. Cifras verdaderas, medias verdades y conclusiones que los datos no autorizan

Un proyecto populista necesita demostrar que la transformación prometida ya está ocurriendo. Para ello no siempre debe inventar cifras. Es más eficaz seleccionar un dato auténtico, aislarlo del contexto y ampliar su significado.

La manipulación estadística puede consistir en elegir el periodo conveniente, omitir indicadores contradictorios, atribuirse tendencias previas, confundir asociación con causalidad, comparar valores nominales, utilizar denominadores distintos o presentar recursos girados como resultados.

La cifra conserva el prestigio de la objetividad. El ciudadano escucha un número exacto y supone que también es exacta la interpretación política. La operación puede ser engañosa aun cuando el número sea verdadero.

4.4. Desempleo, formalidad y seguridad social

La reducción de la tasa de desempleo puede ser real dentro de la metodología del DANE y, al mismo tiempo, insuficiente para demostrar una mejora integral del mercado laboral. Desocupación, ocupación, informalidad, estabilidad, jornada, productividad y cotización a seguridad social son fenómenos relacionados, pero no idénticos.

Una persona puede aparecer como ocupada y trabajar sin aportes, pocas horas, de manera informal o con ingresos precarios. Por ello, la discordancia entre encuestas de hogares y registros de cotizantes no prueba fraude del DANE, pero sí obliga a evitar la conclusión simplista de que menor desempleo equivale automáticamente a empleo formal y de calidad.

El análisis exige comparar series, metodologías, rezagos, población económicamente activa, ocupación, informalidad, cotizantes únicos, PILA y calidad del empleo. También exige distinguir la afirmación descriptiva de la causal, por ejemplo cuando se atribuye una variación a una política salarial sin evidencia suficiente.

4.5. La deuda con el FMI

Pagar una obligación específica con el Fondo Monetario Internacional puede ser un hecho verdadero. No equivale a eliminar la deuda pública, reducir necesariamente el endeudamiento neto ni romper toda relación con el organismo.

Un crédito puede pagarse con recaudo, caja o nueva deuda frente a otros acreedores. Para evaluar el significado fiscal deben revisarse saldo total, composición, costo, plazos, relación deuda-PIB y fuente de los recursos.

La expansión retórica ocurre cuando la cancelación de una obligación particular se comunica de modo que el público interprete independencia financiera completa o desaparición de la deuda externa.

4.6. Indicadores de salud

La frase los indicadores de salud mejoraron es demasiado amplia. Mortalidad materna, infantil, desnutrición, vacunación, acceso, oportunidad, medicamentos, tutelas, aseguramiento, deuda hospitalaria y resultados territoriales pueden moverse en direcciones distintas.

Los datos de salud suelen tener rezagos. Un informe publicado durante un gobierno puede contener años previos y tendencias de largo plazo. La atribución causal exige preguntar qué indicador, qué periodo, qué numerador, qué denominador, qué cambio metodológico y qué política plausible explican la variación.

Como en clínica, no puede concluirse que el paciente mejoró porque descendió un solo valor mientras se omiten síntomas y desenlaces. El expediente sanitario debe evitar tanto propaganda gubernamental como selección opositora.

4.7. Monopolización del significado de los datos

La selección de cifras es común en gobiernos democráticos. Adquiere significado autoritario cuando se integra con la deslegitimación de árbitros independientes y produce un sistema cerrado: los buenos resultados prueban el éxito; los malos prueban herencia, sabotaje o medición hostil.

En ese sistema, ninguna evidencia puede cuestionar al proyecto. El dato deja de controlar al poder y el poder controla el significado del dato. Los técnicos que añaden contexto pueden ser presentados como defensores de intereses o enemigos del cambio.

CORRUPCIÓN, CÍRCULO CERCANO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CULPA

4.8. La contradicción del relato fundacional

La corrupción existe en democracias, dictaduras, gobiernos de izquierda y de derecha. Por sí sola no demuestra fascismo ni permite atribuir al presidente cada delito cometido por funcionarios o familiares.

Sin embargo, adquiere un significado político especial cuando el movimiento llegó al poder proclamando una superioridad moral frente a los corruptos de siempre. Los escándalos propios no solo comprometen personas; contradicen la premisa de que el nuevo bloque posee una naturaleza moral distinta.

4.9. UNGRD: corrupción y posible alteración del contrapeso legislativo

El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo constituye uno de los expedientes probatorios centrales. Su análisis debe reconstruir la secuencia de contratos, carrotaques, confesiones, imputaciones, acusaciones, decisiones judiciales y participación de funcionarios y congresistas.

Debe separarse cuidadosamente lo alegado, lo admitido, lo acusado y lo probado. Pero si llegara a establecerse que contratos o recursos públicos fueron utilizados para obtener apoyos legislativos, el asunto excedería la apropiación económica: la corrupción habría funcionado como instrumento para alterar el contrapeso que el discurso gubernamental describía como bloqueo.

La conexión conceptual es poderosa: por un lado, el Congreso es presentado como obstáculo de las reformas del pueblo; por otro, redes gubernamentales podrían haber buscado respaldo mediante recursos estatales. Una cronología judicial precisa es indispensable para sostener o descartar esa interpretación.

4.10. Ecopetrol y la protección del círculo de confianza

No debe hablarse genéricamente de corrupción en Ecopetrol sin especificar personas, conductas y estados procesales. El análisis se concentra en la permanencia y el respaldo de Ricardo Roa, antiguo gerente de campaña y presidente de la empresa, frente a cuestionamientos e investigaciones.

La pregunta no es anticipar culpabilidad penal. Es evaluar responsabilidad política y estándar institucional: si se aplicó a un aliado próximo el mismo nivel de exigencia que Petro reclamaba frente a gobiernos anteriores; si la protección personal prevaleció sobre la confianza pública; y cómo se respondió a las investigaciones.

4.11. Nicolás Petro, Verónica Alcocer y la elasticidad de la cercanía

Un padre no responde penalmente por los actos de un hijo adulto y una relación matrimonial pertenece también a la esfera privada. El ensayo no debe convertir parentesco en culpabilidad ni juzgar la vida íntima.

Sin embargo, las frases yo no lo crié y no es mi esposa o estamos separados pueden estudiarse como estrategias de distanciamiento cuando los cuestionamientos se acercan al núcleo familiar. La pregunta política es cómo eran presentadas esas personas antes del escándalo, qué funciones reales o simbólicas desempeñaban, qué acceso tenían al poder y cómo cambió la descripción después.

Puede existir una elasticidad de la cercanía: mientras la persona aporta campaña, representación, legitimidad o influencia, pertenece al proyecto; cuando genera costos, se enfatiza su autonomía. Cada caso puede tener explicaciones verdaderas, pero la repetición merece análisis.

4.12. Individualización selectiva de la culpa

El mecanismo general puede formularse así: los abusos del adversario prueban la corrupción estructural de su régimen; los propios son traiciones individuales. Los éxitos pertenecen al proyecto; los delitos, a personas autónomas.

La presunción de inocencia debe aplicarse a todos. Lo contradictorio es invocarla exclusivamente para aliados mientras se condena moralmente a los rivales antes de sentencia.

La responsabilidad penal es individual. La responsabilidad política incluye calidad de nombramientos, alertas conocidas, reacción, remoción, protección, colaboración con investigaciones y coherencia del estándar.

Un proyecto puede conservar así inocencia permanente: todo corrupto descubierto es infiltrado o traidor y nunca evidencia de fallas de selección, incentivos o cultura gubernamental.

VENEZUELA, MADURO Y APRENDIZAJE REGIONAL

La comparación con Venezuela se utiliza como contraste de trayectoria, no como equivalencia. El expediente correspondiente incorporará cronología, simetría democrática y contrapruebas, y mantendrá una prohibición expresa de equiparar la Colombia actual con la Venezuela autoritaria consolidada.

4.13. Venezuela como degradación gradual

La autocracia venezolana no apareció de un día para otro. Se construyó mediante polarización, relato refundacional, concentración de recursos, debilitamiento de

intermediaciones, constituyente, subordinación institucional, militarización, reducción de la competencia electoral y represión creciente.

El régimen de Maduro es inequívocamente autoritario. Bajo la definición metodológica propuesta, puede analizarse como adaptación izquierdista de varios mecanismos fascistas de dominación: líder y revolución identificados con el pueblo, enemigo interno y externo permanente, militarización, propaganda, subordinación institucional y neutralización de la alternancia.

Esto no convierte al madurismo en copia del fascismo italiano ni borra su genealogía socialista y bolivariana. Permite comparar formas de poder sin confundir doctrinas ni resultados históricos.

4.14. Colombia no es Venezuela

Colombia posee una arquitectura distinta: economía empresarial más diversificada, menor concentración de toda la renta en el Ejecutivo, Congreso fragmentado, cortes activas, descentralización territorial, prensa plural, organizaciones civiles y empresariales con capacidad de resistencia.

La relación entre la Fuerza Pública y un gobierno de izquierda también difiere de la alianza político-militar venezolana. Estas características pueden explicar que una estrategia semejante, si existiera, avance con mayor lentitud, retroceda o fracase.

Que Colombia no haya terminado como Venezuela no demuestra automáticamente ausencia de aprendizaje. Tampoco la similitud discursiva prueba coordinación. Deben distinguirse afinidad ideológica, cooperación política, intercambio estratégico, coordinación y subordinación.

La comparación útil no es Colombia ya es Venezuela. Es preguntar qué mecanismos venezolanos aparecen adaptados, cuáles no, cuáles fueron neutralizados y qué condiciones institucionales explican las diferencias.

HERRAMIENTAS TRANSVERSALES ADICIONALES

4.15. Duplicación de la soberanía

El proyecto puede conservar las instituciones constitucionales y construir al mismo tiempo una autoridad paralela que afirma representar más directamente al pueblo: calle, movimientos, asambleas, comités o poder constituyente.

Cuando ambas coinciden se invoca la legalidad. Cuando discrepan se afirma que la legitimidad popular está por encima. La institución formal conserva el edificio, pero pierde el monopolio de la autoridad.

4.16. Democracia condicionada al resultado

Cuando gana el movimiento, triunfa el pueblo; cuando pierde, triunfan élites, fraude, miedo o manipulación. Cuando el Gobierno moviliza, hay participación; cuando lo hace la oposición, puede haber desestabilización.

Las reglas dejan de ser democráticas por su imparcialidad y pasan a ser evaluadas según el resultado moralmente correcto. Esta asimetría debe estudiarse especialmente en la sucesión presidencial y en las acusaciones preventivas de fraude.

4.17. Gobierno mediante emergencia moral

La política se presenta como lucha existencial: fascismo, golpe, oligarquía, sabotaje, crisis climática terminal o guerra contra el pueblo. Algunas amenazas pueden ser reales. El riesgo es mantener a la sociedad en un estado emocional que justifique concentración, disciplina y tolerancia frente a errores.

En una batalla por la supervivencia, la deliberación parece lentitud, la oposición complicidad y el límite institucional una traición.

4.18. Desplazamiento de responsabilidad e irresponsabilidad epistemológica

Los éxitos se atribuyen al líder; los fracasos a la herencia, infiltrados, empresarios, técnicos, Congreso o sabotaje. El gobernante reclama autoridad para capitalizar resultados favorables y rechaza los mecanismos que le asignan responsabilidad por los negativos.

Así la hipótesis gubernamental se vuelve circular. Si mejora un indicador, el modelo funciona; si empeora, demuestra la fuerza de los enemigos. Nada puede refutar al proyecto.

4.19. Fusión entre líder, Gobierno, movimiento, pueblo y Estado

En democracia, presidente, Gobierno, partido y Estado son realidades distintas. El presidente es temporal; el Estado pertenece a todos.

La lógica totalizante los fusiona. Criticar al líder se vuelve atacar al Gobierno; atacar al Gobierno, atacar al pueblo; atacar al pueblo, atacar la democracia. Los canales institucionales empiezan a funcionar como medios de una causa histórica.

4.20. Clientelismo, dependencia material y conversión del derecho en favor

Los proyectos de concentración no se sostienen solo con convicciones. También crean redes de contratos, empleos, subsidios, organizaciones financiadas, intermediarios y burocracias.

Los programas sociales son necesarios. La diferencia está en si funcionan como derechos impersonales financiados por la sociedad o como favores asociados a la benevolencia del líder. Cuando el ciudadano teme perder el beneficio si cambia el Gobierno, la política social puede convertirse en dependencia.

4.21. Captura semántica

La batalla política también controla las palabras. Pueblo puede significar seguidores; élite, opositores; cambio, Gobierno; democracia, realización del programa; fascismo, resistencia; paz, adhesión a una política concreta.

Quien rechaza una medida deja de disentir sobre instrumentos y aparece como enemigo del valor moral que el movimiento se apropió. La captura semántica reduce lo pensable antes de reducir formalmente lo decible.

4.22. Estética del poder y percepción gestáltica

La comparación gestáltica entre Petro, Mussolini o Hitler puede surgir de tono, gestos, pausas, teatralidad, lenguaje épico y relación con la multitud. No debe descartarse como intuición absurda.

Pero tampoco es evidencia concluyente. La gestalt formula una pregunta y orienta la búsqueda. La prueba debe encontrarse en discursos completos, decisiones, patrones, relación con la ley y comportamiento frente a límites.

El análisis estético examina símbolos, escenografía, prosodia, rituales, masas, lenguaje de destino y sensación de acontecimiento histórico, sin convertir una fotografía o un movimiento corporal en diagnóstico.

4.23. Tolerancia selectiva frente a la violencia

La violencia contraria puede interpretarse literalmente y generalizarse; la propia, contextualizarse o redefinirse como resistencia. El lenguaje agresivo propio es indignación; el ajeno, odio. La presión propia es participación; la contraria, amenaza.

La prueba consiste en registrar qué violencia condena el liderazgo, cuál explica, cuál justifica y cuál omite. No es necesario demostrar que ordenó cada hecho para evaluar la función política de su respuesta.

4.24. Sucesión y continuidad

La salida del poder es una prueba central. Un líder democrático acepta que las instituciones serán administradas por quien lo sustituya y que sus políticas pueden revertirse.

El proyecto totalizante presenta la continuidad como misión histórica y la victoria opositora como restauración del mal. La Parte IV examina cómo Petro describe a su sucesor, una derrota electoral y la legitimidad de quienes podrían desmontar su legado.

La Parte I ha definido el vocabulario y el mapa de mecanismos. La Parte II abandona el terreno de la posibilidad y somete esas hipótesis a ocho expedientes delimitados, cada uno con hechos, explicaciones alternativas, contrapruebas y una conclusión graduada.

PARTE II. OCHO EXPEDIENTES SOBRE EL PODER

CAPÍTULO 5. CUANDO EL ADVERSARIO SE CONVIERTE EN ENEMIGO

Etiquetamiento moral, expansión semántica y construcción del enemigo

Este primer expediente traslada el argumento desde las categorías generales hacia un corpus delimitado de expresiones presidenciales. No pretende declarar falsa toda referencia de Gustavo Petro al fascismo. Examina cuándo una categoría histórica deja de describir movimientos autoritarios y pasa a sancionar moralmente al ciudadano, al técnico, al periodista o al adversario que contradice al poder.

5.1. El fascismo como palabra móvil

El corpus muestra que Petro no reserva las palabras fascismo y nazismo para movimientos históricamente fascistas o dirigentes con rasgos autoritarios plausibles. También las aplica a ciudadanos, periodistas, técnicos, científicos, profesionales y autoridades locales cuando contradicen una interpretación, una decisión o una causa defendida por él.

El hallazgo no consiste en afirmar que toda referencia presidencial al fascismo sea falsa. Algunos destinatarios —como dirigentes de extrema derecha o políticas abiertamente xenófobas— admiten una discusión sustantiva sobre autoritarismo, racismo o desprecio por la democracia. La fuerza del patrón aparece en los casos en que la distancia entre la conducta discutida y la etiqueta histórica es mucho mayor.

La palabra se vuelve móvil: puede designar a un gobernante acusado de prácticas autoritarias, pero también a una ciudadana que cuestiona la intervención de las EPS, a una economista que vota una tasa de interés, a un periodista que respalda a un candidato o a un alcalde que ordena cubrir un mural. Conserva la carga moral del término histórico mientras pierde especificidad.

5.2. De los autoritarios plausibles al ciudadano contradictor

La gradación es indispensable. Los señalamientos contra Jair Bolsonaro, ciertas políticas antimigratorias o dirigentes de derecha radical no tienen el mismo valor probatorio que los dirigidos contra una ciudadana o un integrante de una institución técnica. En los primeros casos puede existir un fundamento descriptivo discutible pero real. En los segundos, la etiqueta parece funcionar principalmente como sanción al desacuerdo.

El caso de Hannah Escobar es especialmente demostrativo. La destinataria no era jefa de un movimiento extremista, sino una ciudadana que cuestionaba la intervención gubernamental de las EPS y difundía perfiles de personas cercanas al

oficialismo. La respuesta presidencial la asoció con el nazismo y con episodios históricos de violencia masiva. El Consejo de Estado consideró que la publicación excedía los límites de la expresión presidencial y ordenó retirarla y ofrecer excusas. ([registro oficial de sala del Consejo de Estado, 31 ene. 2025](#); copia de consulta conservada en el archivo documental)

La defensa posterior de Petro fue todavía más reveladora: sostuvo que pueden existir actitudes nazis aunque la persona no sepa que es nazi y que utilizar la palabra no siempre equivale a acusarla de genocidio. Esa explicación reconoce, en la práctica, que la categoría puede separarse de una adhesión consciente a la ideología histórica y convertirse en una clasificación moral asignada desde el poder. ([respuesta presidencial en X, 14 feb. 2025](#))

5.3. El conocimiento técnico como sospecha

El caso del Banco de la República lleva el mismo mecanismo al terreno de la autonomía técnica. En abril de 2026, Petro afirmó que una mujer de la Junta que había sido más marxista que él ahora era fascista, en medio de una controversia sobre tasas de interés. La transcripción oficial conectó además la decisión monetaria con matar de hambre al pueblo y con el genocidio. (*Presidencia de la República, 13 abr. 2026*)

Una política monetaria puede ser correcta o equivocada, responder a modelos discutibles y producir costos sociales reales. Pero convertir el voto técnico de una codirectora en transformación ideológica hacia el fascismo desplaza la discusión desde inflación, tasas, empleo y riesgo hacia la identidad moral de quien decide. La fórmula resulta especialmente significativa porque la funcionaria había llegado a la Junta durante el propio Gobierno: la pertenencia al campo progresista parece revocable cuando el experto ejerce autonomía frente a la expectativa del líder.

Una dinámica comparable aparece en el debate sanitario. Las expresiones sobre expertos y personas de ciencia que se venden al mejor postor, así como las referencias a mercaderes o traficantes de la muerte, no son idénticas a llamar fascista a todo el gremio médico. Deben distinguirse médicos asistenciales, asociaciones científicas, EPS, administradores e intereses empresariales. Sin embargo, el vocabulario cumple una función relacionada: el experto que contradice al Gobierno deja de ser un interlocutor con otra lectura y pasa a ser alguien vendido, mercantilizado o moralmente asociado con la muerte. ([publicación presidencial original en X, 17 mar. 2025](#); respuesta institucional de la ACSC del 19 mar. 2025 conservada en el expediente documental)

5.4. Periodistas, alcaldes y adversarios electorales

La respuesta Heil Hitler a una columna de Felipe Zuleta representa una forma extrema de deslegitimación del pluralismo periodístico y electoral. No se discutió únicamente el argumento de la columna o la conveniencia del candidato respaldado: el periodista fue situado simbólicamente dentro del universo nazi. La explicación posterior de que se trató de una estupidez de comunicación reconoció el error expresivo, pero no eliminó la lógica clasificatoria de fondo. ([publicación original en X, 7 jun. 2026](#); [transcripción oficial de Presidencia, 10 jun. 2026](#))

Algo semejante ocurrió cuando Federico Gutiérrez fue llamado alcalde del fascio por la decisión municipal de cubrir un mural de Defensiva Antifa. La actuación administrativa podía cuestionarse como censura, torpeza o manejo indebido del espacio público. Elevarla inmediatamente a fascismo transformó un conflicto local en una confrontación histórica entre resistencia y opresión. ([publicación presidencial original en X, 6 jul. 2026](#))

Los casos internacionales —Milei como figura comparable con Hitler y luego nostálgico de Mussolini, o las referencias a Kast, Bolsonaro y Trump— muestran continuidad y una notable amplitud del repertorio histórico. Deben analizarse con matices porque algunos de esos dirigentes sí sostienen discursos o prácticas autoritarias. Su utilidad principal es mostrar cómo el fascismo se vuelve marco interpretativo general de la derecha adversaria. ([publicación original “Esto decía Hitler”, 29 ago. 2023](#); [entrevista original con La Pizarra/Diario Red, 22 mar. 2025](#))

5.5. Del desacuerdo a la inferioridad moral

El etiquetamiento no opera solo mediante fascista o nazi. Se integra con un vocabulario funcionalmente equivalente: vendidos al mejor postor, mercaderes, traficantes de la muerte, sectarios, golpistas, espectros de la muerte o actores que matan de hambre. El elemento común es la transformación del desacuerdo en falla moral, criminal o cognitiva.

La consecuencia democrática es profunda. Si el contradictor es fascista, nazi, vendido o traficante, ya no necesita ser refutado en sus propios términos. Su argumento queda explicado por su perversidad, su interés oculto o su incapacidad para pensar. La controversia deja de organizarse alrededor de evidencias y se convierte en juicio sobre la calidad humana del adversario.

Esta operación contribuye a la fractura cognitiva y moral de la ciudadanía. El campo propio puede presentarse como consciente, sensible y del lado correcto de la historia; el otro, como irracional, corrupto o peligroso. La etiqueta funciona así como permiso psicológico para despreciar y como mecanismo para reducir la legitimidad política del discrepante.

5.6. La asimetría del poder presidencial

No toda expresión dura de un presidente constituye autoritarismo. Los mandatarios participan del debate y pueden denunciar conductas extremas. Sin embargo, su voz no posee el mismo alcance que la de un ciudadano común. La investidura amplifica la acusación, moviliza seguidores y puede desencadenar hostigamiento, estigmatización o costos reputacionales difíciles de revertir.

El caso Hannah Escobar muestra esta asimetría de manera particularmente clara: una disputa en redes fue elevada por la cuenta presidencial a una imputación histórica extrema, y el control judicial tuvo que restablecer límites. El fenómeno debe evaluarse no solo por la intención subjetiva del gobernante, sino por el poder real de su señalamiento. copia de consulta conservada en el archivo documental

La persistencia del lenguaje después de controversias, órdenes de retractación o llamados a moderarlo resulta relevante. No prueba por sí sola un proyecto fascista, pero puede mostrar una concepción de la comunicación en la que la movilización moral del propio campo pesa más que la protección del pluralismo y de la dignidad del contradictor.

5.7. La explicación democrática más fuerte y sus límites

La explicación alternativa más fuerte sostiene que Petro utiliza fascismo como advertencia antifascista en un momento global de crecimiento de derechas radicales, xenofobia, negacionismo y ataques a la democracia. Desde esta perspectiva, las comparaciones históricas serían hipérboles políticas, no herramientas de exclusión.

Esa explicación es razonable para una parte del corpus y debe conservarse. También es cierto que los gobiernos de todas las tendencias emplean etiquetas, moralizan conflictos y exageran a sus adversarios. La evidencia no permite concluir que cada exabrupto responda a una estrategia centralizada ni que el Gobierno sea fascista por el uso de estas palabras.

Pero la explicación alternativa pierde fuerza en los casos de ciudadanos, técnicos o profesionales cuyo acto principal fue disentir. Allí la palabra no parece describir una estructura autoritaria, sino convertir la oposición en identidad moral degradada. La recurrencia, diversidad de destinatarios y movilidad del concepto permiten hablar de patrón, aunque no de prueba suficiente del diagnóstico general.

5.8. Conclusión graduada: etiquetamiento moral y construcción del enemigo

La evidencia reunida permite sostener una conclusión más precisa que la consigna según la cual Petro llama fascista a todo el que no piensa como él. Emplea fascismo, nazismo y un vocabulario moral equivalente con una amplitud que

supera la identificación de movimientos históricamente fascistas. En casos de alta fuerza probatoria, esas categorías alcanzan a ciudadanos, técnicos, periodistas y autoridades locales cuando cuestionan decisiones o narrativas presidenciales.

La operación recurrente consiste en desplazar la discusión desde la calidad de un argumento hacia la identidad moral del contradictor. El economista autónomo se vuelve fascista o genocida; el experto crítico, vendido; el actor sanitario, mercader de la muerte; la ciudadana opositora, nazi; el periodista, destinatario de un saludo hitleriano; el alcalde, representante del fascio.

Por sí solo, este patrón no demuestra que el proyecto político de Petro sea fascista. Sí documenta una dimensión moral-excluyente: expansión semántica de categorías históricas, etiquetamiento moral y construcción del enemigo. Su peso clasificatorio surge únicamente cuando converge con deslegitimación de contrapesos, movilización plebiscitaria, excepcionalidad institucional y administración política de la realidad.

5.9. Síntesis de casos y fuerza probatoria

Caso	Expresión	Contexto	Fuerza	Lectura al corte
Hannah Escobar	Nazi / actitudes nazis	Ciudadana crítica de intervención a EPS	Muy alta	Orden de retiro y excusas; muestra asimetría de poder y expansión semántica.
Junta del Banco / Laura Moisés	Ahora es fascista; hambre y genocidio	Decisión monetaria autónoma	Muy alta	Fuente oficial; desacuerdo técnico convertido en identidad moral.
Felipe Zuleta	Heil Hitler	Columna favorable a candidato opositor	Muy alta	Deslegitimación extrema de opinión periodística y electoral.
Federico Gutiérrez	Alcalde del fascio	Cobertura de mural Antifa	Alta	Conflicto administrativo elevado a fascismo.
Médicos, expertos y científicos	Vendidos; mercaderes; traficantes de la muerte	Debate sobre reforma de salud	Media-alta	Descalificación equivalente; exige separar destinatarios.
Milei, Kast, Bolsonaro, Trump	Hitler, Mussolini, nazi, fascista	Derechas radicales y política internacional	Variable	En parte uso políticamente defendible; requiere contexto individual.

El primer expediente identifica el etiquetamiento moral como un mecanismo concreto, pero todavía no decide la clasificación general. El capítulo siguiente examina qué ocurre cuando la misma gramática alcanza a las instituciones encargadas de limitar al Ejecutivo.

CAPÍTULO 6. CUANDO EL LÍMITE SE CONVIERTE EN CONSPIRACIÓN

Contrapesos, soberanía paralela y deslegitimación institucional

6.1. El problema no es la crítica, sino la transformación del límite

Una democracia no exige silencio presidencial frente al Congreso, las cortes, los órganos electorales, el banco central o la prensa. Al contrario: la controversia pública forma parte de su funcionamiento. Un jefe de Estado puede considerar equivocada una sentencia, sesgada una investigación, regresiva una tasa de interés o falsa una información periodística. El problema comienza cuando la diferencia deja de tratarse como desacuerdo entre poderes legítimos y se convierte en prueba de que una institución bloquea al pueblo, prepara un golpe, sirve a una mafia o actúa contra la historia.

Este capítulo no demuestra una ofensiva uniforme contra toda institución ni una abolición consumada de los contrapesos. Demuestra algo más gradual y, por eso mismo, más difícil de identificar: una gramática política recurrente mediante la cual determinados controles pierden legitimidad cuando obstaculizan el programa gubernamental. El límite jurídico o político se redefine como conspiración; la derrota procedimental, como negación de la voluntad popular; y el adversario institucional, como actor moralmente sospechoso.

Petro no desconoce todos los límites ni lo hace siempre. Los acata en aspectos sustanciales y actúa dentro de un sistema que conserva capacidad de resistencia. Pero, ante decisiones adversas relevantes, tiende a apelar a una fuente superior de legitimidad —el voto, la calle o el poder constituyente— para disputar no solo el contenido del límite, sino también la autoridad de quien lo impone.

6.2. La democracia plebiscitaria: del mandato electoral al monopolio de la voluntad popular

Todo gobierno elegido posee un mandato. Sin embargo, en una democracia constitucional ese mandato no convierte el programa presidencial en una orden irrevocable. El Congreso conserva capacidad deliberativa; las cortes controlan la constitucionalidad; los órganos electorales investigan campañas; el Banco de la República protege una función autónoma; y la prensa examina la actuación pública. Cada uno representa una dimensión distinta de la soberanía y ninguno puede reducirse a simple ejecutor de la mayoría presidencial.

La lógica plebiscitaria aparece cuando la victoria electoral es interpretada como equivalencia entre líder, programa y pueblo. Bajo esa fórmula, apoyar la agenda

significa respetar el mandato; frenarla puede convertirse en traición a la ciudadanía. El gobernante no se presenta únicamente como uno de los poderes constituidos, sino como intérprete privilegiado de una voluntad popular que existiría por encima de los procedimientos ordinarios.

Esta duplicación de soberanía es el hilo conductor del expediente. De un lado están las instituciones formales, con sus reglas, competencias y tiempos. Del otro aparece el pueblo auténtico, convocado por el presidente y expresado en la movilización, la consulta o el poder constituyente. Cuando ambos coinciden, no hay tensión. Cuando divergen, la legitimidad del procedimiento puede subordinarse a la legitimidad moral atribuida al movimiento.

6.3. El Congreso: de interlocutor democrático a bloqueo institucional

El Congreso ofrece la prueba de simetría más clara. Cuando rechazó, modificó o demoró reformas centrales, Petro lo describió como parte de un “bloqueo institucional” contra la voluntad popular. El término no se limita a afirmar que existía una mayoría opositora o que determinados intereses influían en la votación. Sugiere que la función legislativa se había convertido en una obstrucción ilegítima del mandato electoral. (*Presidencia de la República, 11 mar. 2025*)

La diferencia es decisiva. En una democracia, votar contra un proyecto puede ser una mala decisión, una decisión capturada por intereses o una decisión perfectamente legítima. Para convertirla en bloqueo antidemocrático se necesita demostrar algo adicional: fraude, compra de votos, desconocimiento de reglas o ejercicio abusivo de la competencia. Cuando la prueba se reemplaza por la sola frustración del programa, el Congreso deja de ser un poder autónomo y pasa a ser evaluado por su obediencia al Ejecutivo.

La aprobación posterior de la reforma laboral completa la comparación. El Congreso que antes bloqueaba recuperó entonces su carácter institucional y el resultado fue celebrado como victoria popular. Esto no prueba por sí solo oportunismo: una votación puede ser mejor que otra. Pero sí revela que la legitimidad discursiva del órgano cambia de manera marcada según facilite o impida la agenda. (*Presidencia de la República, 26 jun. 2025*)

6.4. La consulta popular y el Decreto 0639: cuando el discurso se convierte en acción

El episodio de la consulta popular de 2025 es el caso más fuerte del expediente porque une narrativa y conducta. El Gobierno presentó la consulta como mecanismo para devolver la decisión al pueblo frente al bloqueo legislativo.

Después de que el Senado no emitiera el concepto favorable requerido, el Ejecutivo expidió el Decreto 0639 para convocarla. *(Consejo de Estado, auto del 18 jun. 2025)*

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto al considerar, en esa etapa, que se había desconocido el requisito constitucional y legal de intervención favorable del Senado. La importancia del caso no radica en negar el valor democrático de una consulta. La consulta es un mecanismo constitucional. Lo relevante es que el Ejecutivo intentó activarla por decreto precisamente después de perder el paso institucional que condicionaba su convocatoria.

Aquí aparece el núcleo decisionista: la urgencia moral de la reforma y la identidad proclamada entre Gobierno y pueblo reducen el valor del procedimiento que produjo un resultado adverso. La pregunta deja de ser si la consulta cumple sus condiciones y pasa a ser si una formalidad puede impedir que el pueblo decida. Esa formulación parece democrática, pero encierra un desplazamiento: las reglas que hacen posible la consulta son tratadas como obstáculos cuando no conducen a la decisión esperada.

La evidencia contraria también importa. El Consejo de Estado pudo suspender el acto, el Gobierno produjo efectos de acatamiento y el decreto fue posteriormente derogado. No hubo imposición definitiva. Por eso el caso demuestra una tentativa plebiscitaria contenida, no una ruptura consolidada. *(Presidencia de la República, 25 jun. 2025; Decreto 0703/2025)*

6.5. El CNE: una investigación convertida en “primer paso de un golpe”

La confrontación con el Consejo Nacional Electoral muestra el grado máximo de deslegitimación verbal. Después de la apertura de una investigación administrativa sobre la campaña presidencial, Petro afirmó que se había dado “el primer paso de un golpe de Estado” contra el presidente constitucional y habló de un golpe ejecutado no por soldados, sino por personas de corbata. *(Presidencia de la República, 8 oct. 2024)*

Existía una controversia jurídica real. Era necesario delimitar qué podía investigar el CNE y qué correspondía a la Comisión de Acusaciones por el fuero presidencial. El Consejo de Estado reconoció la competencia administrativa del CNE respecto de la campaña y preservó que una eventual pérdida del cargo requería el procedimiento político correspondiente. Esa delimitación permitía discutir jurídicamente el alcance de la investigación sin equipararla a una ruptura institucional. *(Consejo de Estado, 23 ago. 2024)*

Llamar golpe al inicio de un control electoral produce dos efectos. Primero, desplaza la discusión desde las pruebas y competencias hacia la supervivencia del mandato popular. Segundo, enseña a los seguidores que una investigación del

gobernante no es control democrático, sino ataque a quienes lo eligieron. La persona, la campaña, el Gobierno y el electorado quedan fusionados en una sola víctima.

La explicación alternativa más fuerte es que Petro temía una utilización abusiva del derecho para alterar el resultado electoral. Esa preocupación no es absurda en América Latina. Sin embargo, cuanto más grave es la acusación de golpe, mayor debe ser la evidencia de una operación destinada a remover al presidente, no simplemente de una investigación controvertida.

6.6. Las cortes: entre el control constitucional y la transferencia de responsabilidad

El patrón frente a las cortes es menos homogéneo y debe graduarse. En la emergencia de La Guajira, la Corte Constitucional reconoció la gravedad de la crisis, pero limitó el uso de poderes extraordinarios. Petro cuestionó las consecuencias prácticas del fallo y defendió que los decretos buscaban proteger a la población. No está demostrado en ese episodio que hubiera llamado golpista a la Corte. *(Corte Constitucional, C-383/2023)*

Aun así, aparece otro mecanismo: la transferencia de responsabilidad. Cuando una corte invalida el instrumento escogido por el Ejecutivo, el fracaso de la política puede atribuirse al tribunal que impidió actuar, aunque subsistan herramientas ordinarias. La institución deja de ser guardiana del procedimiento y pasa a ser presentada como responsable del daño social que el Gobierno afirmaba querer evitar.

En 2026, el discurso sobre la emergencia económica reunió a la Corte Constitucional, al Congreso y al Banco de la República dentro de una misma narrativa de bloqueo fiscal. Órganos con funciones diferentes fueron interpretados como componentes de un obstáculo común. Esa generalización es relevante: convierte decisiones independientes en apariencia de coordinación. *(Presidencia de la República, 13 abr. 2026)*

El Consejo de Estado ocupa una posición particularmente importante porque sus decisiones produjeron efectos directos sobre el Decreto 0639 y sobre la competencia del CNE. El Ejecutivo acató los fallos, lo cual debilita cualquier afirmación de ruptura consumada. Pero el acatamiento formal puede coexistir con una narrativa que reduce la legitimidad del juez ante la opinión pública. *(Consejo de Estado, 23 ago. 2024)*

6.7. Fiscalía y Procuraduría: persecución, lawfare y conflicto personal

La Fiscalía dirigida por Francisco Barbosa constituye un caso fuerte, aunque no simple. Petro afirmó que el fiscal buscaba un “golpe de Estado bajo manto institucional”. La disputa incluía investigaciones sobre su entorno, desacuerdos acerca del fuero presidencial y una confrontación pública intensa entre dos figuras que habían convertido la relación institucional en enemistad política. ([publicación presidencial original en X, 3 feb. 2024](#))

La crítica a Barbosa no carecía necesariamente de fundamentos. Un fiscal puede extralimitarse, politizar sus actuaciones o intervenir indebidamente en el debate. Pero la categoría golpe vuelve a transformar una controversia sobre competencia e imparcialidad en amenaza existencial al mandato. La prueba de simetría muestra que el tono fue menos confrontacional con la Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo, lo que sugiere que parte del conflicto estaba asociada al titular y no exclusivamente a la institución.

La Procuraduría requiere mayor cautela. Petro tiene un antecedente objetivo: su destitución e inhabilidad como alcalde, posteriormente cuestionadas en el sistema interamericano. Esa historia explica una desconfianza más profunda. Durante la Presidencia, la Procuraduría fue incluida por Petro y por aliados en relatos de golpe blando y persecución, pero no todas las expresiones están igualmente atribuidas o verificadas. Por ello, este frente permanece con fuerza intermedia y no debe utilizarse como pieza central sin completar el corpus. (*Corte IDH, Caso Petro Urrego vs. Colombia, 8 jul. 2020*)

6.8. El Banco de la República: moralización del desacuerdo técnico

El Banco de la República aporta una variante especialmente reveladora porque no representa a una oposición electoral. Su autonomía existe para separar la política monetaria de las necesidades inmediatas del Gobierno. Petro tiene pleno derecho a discutir sus tasas, sus supuestos y sus efectos distributivos. Un banco central puede equivocarse y sus decisiones nunca son socialmente neutrales.

El salto problemático ocurre cuando la discrepancia técnica se convierte en clasificación moral. Al atribuir a la Junta sectarismo, ignorancia y fascismo, la política monetaria deja de ser una decisión discutible y pasa a ser prueba de inferioridad intelectual o perversidad política. La autonomía se interpreta como hostilidad. (*Presidencia de la República, 13 abr. 2026*)

La prueba de simetría refuerza parcialmente el hallazgo: no aparece una descalificación equivalente cuando las decisiones monetarias se acercan a la orientación gubernamental. La legitimidad técnica parece depender, al menos en

parte, del sentido del resultado. Aun así, hace falta una cronología más exhaustiva de decisiones favorables antes de cerrar esa comparación de manera definitiva.

6.9. La prensa: del control del relato al enemigo informativo

La prensa conecta los dos primeros expedientes. Quien investiga al Gobierno no impone una sentencia ni vota una ley, pero limita el poder al disputar su versión de los hechos. En el corpus reunido, Petro combina correcciones legítimas de informaciones con una tendencia a explicar la crítica mediante intereses económicos, élites, mafia, nazismo o golpe.

El caso “muñecas de la mafia” es el más robusto. La expresión, pronunciada en un escenario oficial, reunió género, subordinación y vínculo criminal en una categoría amplia capaz de alcanzar a mujeres periodistas. La Corte Constitucional examinó el caso y estableció límites derivados del poder de amplificación presidencial. La relevancia no depende solo de que la frase resultara ofensiva, sino de que un rótulo emitido desde la jefatura del Estado puede convertirse en licencia para el hostigamiento colectivo. (*Corte Constitucional, SU-432/2025*)

No toda crítica a los medios es estigmatización. La concentración de propiedad, la pauta oficial, los sesgos editoriales y la exclusión histórica de voces alternativas son problemas reales. La línea se cruza cuando la veracidad de una investigación se sustituye por la presunta corrupción moral de quien la publica, o cuando el periodismo crítico es integrado en una operación mafiosa o golpista sin individualización probatoria.

La evidencia no autoriza a hablar de censura total. Los medios privados siguieron funcionando, publicaron investigaciones y acudieron a tribunales. Lo que sí puede sostenerse es una hostilidad presidencial recurrente con capacidad de intimidación y de degradación pública del contradictor informativo.

6.10. La prueba de simetría: instituciones legítimas cuando producen el resultado correcto

La prueba de simetría no está completa en todos los frentes, pero produce un patrón consistente. El Congreso es bloqueo cuando rechaza y expresión popular cuando aprueba. La Fiscalía es golpe bajo Barbosa y recibe un trato comparativamente menos hostil bajo Camargo. El Banco es sectario cuando sostiene una política adversa. La prensa crítica sirve a intereses ilegítimos, mientras los medios alternativos cercanos al proyecto son presentados como democratización informativa.

Las cortes ofrecen una comparación menos cerrada porque faltan suficientes decisiones favorables y reacciones presidenciales equivalentes. Esa ausencia debe

conservarse como límite probatorio, no llenarse con inferencias. Sin embargo, el conjunto muestra que la legitimidad discursiva de los contrapesos tiende a aumentar cuando facilitan el programa y a disminuir cuando lo contienen.

La explicación alternativa sigue siendo importante: las decisiones favorables pueden ser mejores en sus fundamentos y las adversas pueden estar capturadas por intereses. Pero una crítica basada en principios debería demostrar esas diferencias caso por caso. Cuando la explicación aparece automáticamente después de perder, la sospecha de legitimidad instrumental se fortalece.

6.11. De la crítica democrática a la deslegitimación: una gradación necesaria

No todos los episodios pertenecen a la misma categoría. Una clasificación rigurosa debe conservar al menos cinco niveles: crítica jurídica; crítica política dura; deslegitimación moral; apelación a soberanía paralela; e intento de superar el procedimiento. Confundirlos produciría un argumento inflado y vulnerable.

Nivel	Característica	Ejemplo	Lectura
Crítica jurídica	Discute competencia, procedimiento o fundamento	Debate sobre alcance del CNE	Compatible con democracia
Crítica política dura	Atribuye sesgo o intereses, pero reconoce la institución	Debate sobre tasas o efectos de fallos	Puede ser legítima
Deslegitimación moral	Convierte al órgano en golpista, mafioso, sectario o enemigo	CNE, Banco, parte del discurso mediático	Fuerza alta
Soberanía paralela	Invoca pueblo, calle o constituyente por encima del resultado institucional	Bloqueo del Congreso y poder constituyente	Tensión plebiscitaria
Superación del procedimiento	Busca obtener por otra vía lo rechazado en la ruta prevista	Decreto 0639	Caso institucional más fuerte

6.12. Lo que este capítulo demuestra

- Petro ha utilizado oficialmente las categorías golpe de Estado y bloqueo institucional frente a controles y derrotas adversas.
- Ha vinculado la superación de esos límites con consulta popular, movilización y poder constituyente.
- En el Decreto 0639, el discurso de bloqueo estuvo acompañado por una actuación ejecutiva suspendida judicialmente.
- El desacuerdo técnico con el Banco de la República fue convertido en juicio político y moral.

- El periodismo crítico ha sido objeto de categorías estigmatizantes cuya gravedad fue examinada por la Corte Constitucional.
- La legitimidad discursiva de varios contrapesos varía según faciliten o impidan la agenda gubernamental.

6.13. Lo que este capítulo no demuestra

- Que todas las instituciones actuaron correctamente, sin sesgo o sin intereses.
- Que toda crítica de Petro a los contrapesos sea antidemocrática.
- Que exista una coordinación secreta entre Congreso, cortes, CNE, Fiscalía, Banco y prensa.
- Que Petro haya capturado o abolido materialmente esos órganos.
- Que toda consulta, movilización o constituyente sea autoritaria.
- Que Colombia se haya convertido en un régimen fascista consolidado.

6.14. Contrapruebas: el valor de los contrapesos que resistieron

Una hipótesis seria debe incorporar los hechos que la limitan. Las cortes suspendieron y anularon medidas; el Congreso negoció, rechazó y aprobó reformas; el CNE mantuvo su investigación; el Banco conservó autonomía; la prensa siguió publicando; y el Ejecutivo acató decisiones sustanciales. No hubo destrucción consumada de la arquitectura institucional.

Este resultado no vuelve irrelevante la trayectoria. La autocratización rara vez comienza con la abolición instantánea de todos los controles. Puede comenzar con el aprendizaje social de que cada límite adverso es ilegítimo, cada investigación es persecución y cada derrota exige una fuente superior de poder. Pero el hecho de que los contrapesos hayan resistido obliga a describir el fenómeno como tendencia, tentativa o lógica, no como régimen concluido.

6.15. Conclusión graduada: una concepción plebiscitaria y autocratizante del límite

El hallazgo central de este capítulo no es que Petro critique instituciones. Es que, frente a varias decisiones adversas, la crítica adopta una gramática común: el límite se presenta como bloqueo, golpe, persecución o conspiración; el programa presidencial se identifica con la voluntad popular; y se invoca la calle, la consulta o el poder constituyente como legitimidad superior.

La evidencia más fuerte surge donde convergen palabras y actos: CNE, Decreto 0639, estrategia constituyente, Banco de la República y estigmatización de periodistas. La prueba de simetría sugiere además que la legitimidad de los contrapesos depende parcialmente del resultado que producen.

La conclusión debe ser graduada: Petro exhibe una concepción plebiscitaria del poder y una tendencia autocratizante a degradar selectivamente la legitimidad de los límites. Colombia, sin embargo, mantuvo contrapesos capaces de contenerlo y no se convirtió por estos hechos en un régimen fascista consolidado. Este mecanismo solo aporta a la categoría fascistizante cuando converge con construcción del enemigo, movilización permanente, excepcionalidad, captura semántica y debilitamiento de la alternancia.

El enemigo moral ya no es solo una persona: también puede ser la institución que limita al Ejecutivo. El capítulo siguiente examina el tercer movimiento de la secuencia: la elevación de la calle favorable a voz privilegiada del pueblo y a fuente de presión sobre esos límites.

CAPÍTULO 7. CUANDO LA CALLE PRETENDE HABLAR POR TODO EL PUEBLO

Movilización, Primera Línea, Fuerza Pública y legitimidad coercitiva

La calle es una institución no escrita de la democracia. Permite que quienes carecen de cargos, micrófonos o mayorías legislativas hagan visible su existencia. Sería absurdo considerar autoritaria toda convocatoria a marchar y, todavía más, reprochar a un Gobierno que defienda públicamente las reformas por las que fue elegido. El problema comienza en otro punto: cuando una parte movilizada de la sociedad deja de ser presentada como una voz entre otras y pasa a ser identificada con el pueblo entero.

7.1. La calle democrática y su transformación plebiscitaria

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la movilización no ha sido un recurso ocasional. Ha acompañado las reformas sociales, la consulta popular, los conflictos con el Congreso y, finalmente, la propuesta de activar un poder constituyente. La calle cumple entonces tres funciones: expresa respaldo, presiona decisiones y ofrece una fuente alternativa de legitimidad cuando las instituciones producen resultados adversos.

Las dos primeras funciones son normales en una democracia. Toda sociedad plural combina deliberación institucional con presión social. La tercera es más delicada. Cuando el presidente describe una concentración favorable como “la voz del pueblo colombiano”, la multitud deja de ser una fracción ciudadana y se convierte en sujeto soberano. El Congreso, las cortes o los magistrados aparecen, por contraste, como poderes derivados que deben responder ante esa voz más auténtica. [\(Presidencia de la República, 1 may. 2025\)](#)

La diferencia puede parecer retórica, pero organiza una concepción del poder. La legitimidad ya no proviene únicamente de las reglas que permiten que distintos ciudadanos, partidos e instituciones decidan y se controlen entre sí. Proviene también de una relación directa entre el líder, la causa y el pueblo movilizado.

7.2. Primera Línea: entre criminalización e inocencia política

La Primera Línea muestra cómo esa lógica opera sobre personas concretas. Durante las protestas de 2019 y 2021, el nombre designó realidades heterogéneas: jóvenes que protegían manifestantes, equipos de primeros auxilios, grupos de resistencia y también personas a quienes la Fiscalía atribuyó conductas violentas.

No existió una organización nacional única cuya identidad permitiera presumir culpabilidad o inocencia.

Petro corrigió una narrativa estatal que había tendido a convertir a amplios sectores juveniles en enemigos internos. Esa corrección era necesaria. El abuso policial, la estigmatización y las detenciones arbitrarias no podían desaparecer bajo la palabra vandalismo. Sin embargo, la inversión moral contiene otro riesgo: que el joven procesado sea presentado como víctima por pertenecer al sujeto político correcto y que la legitimidad de la protesta anticipe la respuesta sobre los hechos imputados.

La figura de los gestores de paz resume la tensión. Tiene fundamento legal y puede servir a la reintegración, al diálogo y a la prevención de nuevos ciclos de violencia. La Corte Constitucional preservó controles judiciales y descartó una inmunidad automática. La designación política no equivale a absolución. Cuando ambas categorías se confunden, la justicia individual puede ser reemplazada por una narrativa colectiva: si la causa era justa, la persona debe ser inocente; si fue detenida, la detención debe haber sido persecución. (*Ley 2272/2022; Corte Constitucional, C-525/2023*)

7.3. Fuerza Pública: reforma legítima y sospecha estructural

La relación con la Fuerza Pública exige una cautela equivalente. Los abusos documentados durante las protestas justificaban reformas, sanciones y una revisión profunda de doctrina y protocolos. La transformación del ESMAD en la UNDMO, el énfasis en diálogo y la crítica a la doctrina del enemigo interno pueden entenderse como intentos de democratización institucional. ([Policía Nacional, UNDMO](#))

No existe base suficiente para afirmar que Petro haya desmantelado o negado uniformemente la legitimidad de Policía y Ejército. Las instituciones conservaron estructura, mando y capacidad operativa. El problema posible es más fino: la violencia de los manifestantes tiende a ser individualizada y explicada por contexto; la violencia estatal se interpreta, con mayor frecuencia, como resultado de doctrina, mando y estructura.

Parte de esa diferencia es correcta. El Estado dispone del monopolio de la fuerza y sus agentes tienen deberes reforzados. Pero la responsabilidad estructural no puede transformarse en culpabilidad colectiva, del mismo modo que la exclusión social no puede transformarse en inocencia colectiva. La prueba decisiva consiste en observar si el discurso reconoce también a policías y militares heridos o asesinados, y si condena con la misma claridad la violencia cometida por actores políticamente cercanos.

7.4. Del respaldo a la consulta al poder constituyente

La movilización gubernamental alcanzó su mayor densidad institucional durante la consulta popular de 2025. El Ejecutivo denunció un bloqueo del Congreso, convocó jornadas de apoyo, declaró un día cívico vinculado a la campaña por el sí y presentó las marchas del primero de mayo como expresión nacional del pueblo. (*Presidencia de la República, 14 mar. y 1 may. 2025*)

La presión ciudadana sobre el Congreso es legítima. Un senador no decide en un vacío social y los ciudadanos tienen derecho a exigir, persuadir y protestar. El salto plebiscitario ocurre cuando votar contra el Gobierno deja de ser una opción representativa y se convierte en traición a una voluntad popular ya definida por el presidente y la calle.

El tránsito posterior hacia el “modo constituyente” hizo explícita esa jerarquía. La movilización dejó de ser únicamente respaldo para una reforma y se convirtió en infraestructura para producir un nuevo momento constitucional. La estrategia invocó firmas, comités y trámite legal, lo cual impide describirla como ruptura inmediata. Pero su justificación fue superar a los poderes constituidos que bloqueaban el cambio. ([Presidencia de la República, 3 oct. 2025](#))

7.5. Marchas propias y marchas contrarias

La comparación con la gran movilización opositora del 21 de abril de 2024 revela la asimetría con mayor claridad. El Gobierno garantizó materialmente la protesta. No hubo una política sistemática de prohibición o represión, y algunos altos funcionarios pidieron escuchar el mensaje y realizar autocrítica. Este dato contradice cualquier tesis de cierre total del espacio democrático.

Sin embargo, Petro relativizó la magnitud de la marcha, la asoció con la clase dominante y la insertó en el relato de golpe blando. Las concentraciones favorables son pueblo, democracia y poder constituyente; las adversas tienden a ser élite, manipulación, privilegio o amenaza. Quien marcha contra el Gobierno conserva el derecho, pero no recibe la misma densidad moral como miembro del pueblo.

La democracia no exige que el presidente considere igualmente justas todas las causas. Sí exige que reconozca que quienes se oponen forman parte plena de la ciudadanía. El pueblo democrático no es únicamente la coalición de los justos; incluye al votante adverso, al ciudadano confundido, al defensor de intereses y a quien intenta persuadir para cambiar el Gobierno.

7.6. El umbral entre presión e intimidación

La evidencia no demuestra que la Presidencia organizara coerción física contra el Congreso, las cortes o la oposición. Las movilizaciones revisadas pertenecen a

repertorios públicos de marcha, huelga, firmas y consulta. Tampoco se probó la existencia de una milicia partidista ni una sustitución material del procedimiento por la violencia.

Lo probado es presión plebiscitaria: la multitud favorable es presentada como autoridad superior al procedimiento. La intimidación requeriría elementos adicionales —amenazas, cercos, señalamientos personales o impedimentos físicos— que deben individualizarse y que no aparecen demostrados como política gubernamental en el corpus cerrado.

Esta distinción es esencial. Inflar el hallazgo hasta convertir toda marcha en coerción haría el argumento más estridente y menos verdadero. El fenómeno relevante es previo a la violencia: la enseñanza de que solo una parte de la ciudadanía encarna la soberanía auténtica.

7.7. La legitimidad coercitiva y sus fronteras: Fuerza Pública, gestores de paz y actores extrainstitucionales

La política de paz obliga a tratar con actores que han ejercido violencia y cometido delitos. La interlocución, los beneficios condicionados o la exposición pública de un negociador no prueban por sí mismos una lógica autoritaria: pueden formar parte de una estrategia democrática de sometimiento, reintegración o reducción de violencia. El problema analítico aparece cuando se examina cómo se distribuye la legitimidad entre el aparato coercitivo del Estado y los actores extrainstitucionales con los que el Gobierno decide construir confianza.

7.7.1. El “tarimazo” de Medellín: interlocución legítima y legitimación simbólica

El 21 de junio de 2025, durante el acto oficial “Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá” en la plazoleta de La Alpujarra, varios jefes de estructuras criminales recluidos participaron públicamente en una tarima junto al presidente. El Gobierno presentó el evento como una demostración transparente del proceso de paz urbana; Petro respondió después que no había subido delincuentes, sino personas presas en rehabilitación. La defensa democrática es atendible: una negociación de paz puede requerir reconocer interlocutores sin absolverlos ni legitimar sus delitos.

Fuentes: [Presidencia, 21 jun. 2025](#) · [Presidencia, 24 jun. 2025](#) · [El País, 25 jun. 2025](#)

Lo relevante para este ensayo no es que el Estado dialogue con criminales, sino la operación simbólica: actores privados de la libertad por pertenecer a estructuras violentas pueden adquirir visibilidad política bajo el lenguaje de la paz, mientras la Fuerza Pública es examinada —a veces correctamente— desde categorías estructurales de abuso, doctrina y depuración. Ninguna de esas dos operaciones es

ilegítima por sí sola. Su convergencia, sin embargo, obliga a preguntar si la pertenencia al relato político modifica de manera asimétrica quién recibe presunción de reforma, contexto y rehabilitación y quién recibe presunción de sospecha institucional.

7.7.2. Los audios con el Clan del Golfo: qué está documentado y qué no

El 24 de junio de 2026, Noticias Caracol divulgó grabaciones de una reunión realizada el 2 de septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, comandante del Clan del Golfo. En los fragmentos publicados, Rueda presenta como señales de confianza gubernamental asuntos relacionados con bombardeos y con una depuración de inteligencia policial, mientras el interlocutor criminal plantea retirar grupos de infiltración de Policía y Ejército de zonas donde operaba la organización. La existencia de la conversación y el contenido de esos fragmentos constituyen hechos documentados.

Fuentes: [Noticias Caracol, 24 jun. 2026](#) · [Caracol Radio, respuesta de Danilo Rueda, 24 jun. 2026](#) · [Caracol Radio, indagación disciplinaria, 25 jun. 2026](#)

La evidencia disponible no permite afirmar como hecho probado que oficiales concretos fueran retirados porque el Clan del Golfo lo solicitó, ni que Petro hubiera ordenado cesar operaciones para satisfacer al grupo. Rueda niega esa causalidad: sostiene que se trató de una fase exploratoria, que no existieron acuerdos para suspender operaciones, que la depuración de la Fuerza Pública había sido anunciada públicamente por el Gobierno y que él no tenía competencia ni recibió listas de uniformados para retirar. La apertura de una indagación disciplinaria tampoco equivale a responsabilidad establecida.

7.7.3. Qué añade al patrón: redistribución selectiva de legitimidad coercitiva

Precisamente porque la causalidad más grave no está demostrada, el valor de estos episodios debe formularse de manera funcional. No añaden un “punto” mecánico a una lista de fascismo. Aumentan la densidad de la convergencia porque introducen un ámbito relativamente independiente: la frontera entre la coerción estatal, la negociación con actores armados y la legitimidad política concedida a cada uno.

El patrón que merece examen es una posible redistribución selectiva de legitimidad coercitiva: instituciones estatales pueden ser descritas como estructuras que requieren depuración por su historia de abusos, mientras actores extrainstitucionales violentos reciben contexto, reconocimiento como interlocutores y señales de confianza en nombre de una misión superior de paz. Si llegara a demostrarse que decisiones de personal u operaciones fueron

subordinadas materialmente a exigencias criminales, la fuerza probatoria aumentaría de manera sustancial. El corpus cerrado no permite dar ese paso.

7.7.4. La mejor defensa y la contraprueba

La explicación democrática más fuerte es clara: negociar la paz exige escuchar incluso a organizaciones responsables de violencia; depurar agentes comprometidos con abusos o corrupción fortalece, no destruye, el monopolio legítimo de la fuerza; y una tarima de negociación no convierte al criminal en autoridad estatal. Además, el corpus no demuestra subordinación permanente de Policía o Ejército a esos interlocutores, una fuerza armada partidista ni reemplazo material del mando institucional.

Esa defensa limita la conclusión, pero no elimina la pregunta. Cuando el reconocimiento político de actores extrainstitucionales y la sospecha estructural sobre instituciones coercitivas aparecen dentro de la misma arquitectura que distingue entre pueblo auténtico, adversario sospechoso y legitimidad superior de la causa, el expediente deja de ser únicamente una discusión sobre seguridad. Se convierte en evidencia adicional sobre cómo el proyecto distribuye autoridad moral y legitimidad institucional.

7.7.5. Conclusión graduada del expediente coercitivo

La evidencia no demuestra una milicia gubernamental, un aparato coercitivo paralelo ni control criminal de la Fuerza Pública. Sí fortalece la dimensión institucional-excepcional del análisis al mostrar que la disputa por la legitimidad alcanza también el campo coercitivo. Su relevancia fascistizante no reside en negociar con delincuentes, sino en la posible porosidad entre misión política, autoridad moral, actor extrainstitucional y monopolio estatal de la fuerza cuando ese patrón converge con los demás capítulos. Actualización final: en el tránsito inmediato entre los dos gobiernos, 103 internos de la cárcel de Itagüí, clasificados como de alto perfil o máxima peligrosidad, fueron trasladados a otros centros penitenciarios; entre los trasladados se encontraban, según los reportes disponibles, varios participantes del llamado “tarimazo”. El hecho no demuestra que la política previa fuera ilícita ni prueba los motivos personales de Petro. Sí aporta una contraprueba de reversibilidad institucional: la disposición penitenciaria de esos interlocutores pudo ser modificada durante la transición. Por ello, el peso analítico del “tarimazo” permanece principalmente en la dimensión simbólica de legitimidad y no como prueba de captura material del sistema penitenciario.

7.8. Una gramática común con los expedientes anteriores

Este capítulo converge con los dos anteriores. Primero se divide moralmente el campo político: pueblo y élites, víctimas y represores, ciudadanos auténticos y

actores sospechosos. Después, los contrapesos que frenan el programa son convertidos en bloqueo, persecución o golpe. Finalmente, la calle favorable aparece como correctivo superior de esas instituciones.

No se trata de tres comportamientos aislados, sino de una gramática: una causa moralmente redentora, un adversario degradado, una institución presentada como obstáculo y una movilización que reclama hablar por el conjunto. Esta gramática es compatible con procesos de autocratización plebiscitaria, aunque no demuestre por sí sola un régimen fascista.

7.9. La explicación democrática más fuerte

La interpretación alternativa merece ser tomada en serio. Colombia posee una historia de exclusión, violencia estatal, desigualdad de acceso a las instituciones y concentración del poder comunicativo y económico. La movilización puede equilibrar esa estructura, hacer visibles a sectores ignorados y obligar al Congreso a deliberar sobre problemas que preferiría aplazar.

La reforma policial puede fortalecer, no debilitar, la legitimidad del Estado. Los gestores de paz pueden evitar nuevas trayectorias criminales. La convocatoria popular puede profundizar una democracia excesivamente restringida a élites organizadas.

Esta explicación resulta convincente mientras la movilización sea voluntaria, pacífica y transparente; mientras el Gobierno individualice responsabilidades; mientras reconozca a la oposición como parte del pueblo; y mientras acepte que los procedimientos pueden producir resultados adversos.

7.10. Conclusión graduada: soberanía selectiva

Este capítulo no demuestra que Gustavo Petro haya reemplazado la ley por la calle ni que haya construido una fuerza coercitiva propia. Demuestra una concepción plebiscitaria de la movilización.

En esa concepción, la causa propia recibe una superioridad moral; sus participantes son elevados a pueblo, juventud o poder constituyente; los límites institucionales son convertidos en bloqueo; y la protesta adversa es tolerada materialmente, pero degradada simbólicamente. El expediente coercitivo añade una distribución selectiva de legitimidad entre instituciones estatales e interlocutores extrainstitucionales, sin demostrar que estos hayan sustituido el mando o la fuerza pública.

La expresión más precisa no es dictadura de la calle. Es soberanía selectiva: una parte movilizada pretende hablar por el conjunto y el

líder se presenta como intérprete de esa voz. Colombia conservó oposición, Fuerza Pública institucional, cortes, Congreso y protestas adversas. Por ello, el hallazgo corresponde a una tendencia autocratizante contenida, no a una coerción total consumada.

7.11. Límites de la conclusión

- No se atribuye responsabilidad colectiva a la Primera Línea ni a la Fuerza Pública.
- No se concluye que toda movilización oficialista sea irregular.
- No se afirma que el Gobierno haya ordenado violencia contra las instituciones.
- No se equipara reforma policial con ataque autoritario.
- No se considera que la oposición sea siempre democrática por el solo hecho de oponerse.
- No se afirma que remociones concretas de uniformados obedecieran a solicitudes del Clan del Golfo; esa causalidad no está demostrada.
- No se equipara la interlocución con actores criminales ni la política de paz con fascistización.
- La relevancia del expediente surge de su convergencia con los patrones de etiquetamiento moral y deslegitimación institucional.

CAPÍTULO 8. CUANDO EL MÉRITO DEBE OBEDECER

Confianza política, autonomía técnica y colonización selectiva del Estado

Conexión acumulativa. El capítulo anterior mostró quién puede ser presentado como pueblo auténtico y cómo una movilización favorable adquiere superioridad simbólica. Este capítulo traslada la pregunta al interior del Estado: qué ocurre cuando esa jerarquía moral influye en nombramientos, carreras, regulación y autonomía técnica.

Todo gobierno necesita personas de confianza. Un presidente elegido no está obligado a administrar con quienes rechazan su programa, ni la burocracia existente puede presentarse como una aristocracia naturalmente neutral. El problema aparece cuando la confianza deja de convivir con el mérito y comienza a exigir obediencia; cuando el experto conserva su cargo mientras confirma el rumbo, pero lo pierde cuando convierte la técnica en límite.

8.1. Gobernar con los propios no es colonizar el Estado

La acusación de colonización institucional suele formularse con demasiada facilidad. Cada nuevo gobierno reemplaza ministros, directores y asesores; cada presidente necesita equipos que comprendan y ejecuten su programa. La afinidad política, por sí sola, no demuestra clientelismo, y la diversidad social no es una renuncia al mérito.

La frontera relevante se encuentra en otro lugar: si el cargo está sometido a carrera, requisitos o autonomía técnica; si el nombrado posee capacidades proporcionales; si puede producir información incómoda; y si la institución conserva una misión propia distinta de la defensa del líder.

8.2. La diplomacia: cuando la confianza desplaza reglas

Los casos diplomáticos ofrecen la evidencia más concreta. Los nombramientos de Álvaro Moisés Ninco y Andrés Camilo Hernández fueron anulados por incumplimientos procedimentales y por desconocer la preferencia de funcionarios de carrera disponibles. No se trató únicamente de una disputa ideológica sobre quién merece representar al país: hubo reglas específicas que el Gobierno no observó adecuadamente. ([Consejo de Estado, Ninco, 9 ago. 2024](#)) ([Consejo de Estado, Hernández, 14 mar. 2024](#))

La respuesta presidencial trasladó parte del debate desde el procedimiento hacia una oposición moral entre democratización y aristocracia diplomática. La crítica a una carrera cerrada puede ser legítima; lo problemático es sugerir que las reglas de

mérito son apenas mecanismos de una élite cuando obstaculizan un nombramiento preferido.

Estos casos prueban patronazgo en decisiones concretas, no captura total del servicio exterior. Pero también muestran el mecanismo: la cercanía política se vuelve prioritaria, el control legal aparece como obstáculo y la corrección posterior puede buscar preservar al designado antes que restaurar la regla.

8.3. CREG: la técnica como límite incómodo

La CREG es un laboratorio especialmente revelador porque sus expertos son nombrados por el presidente, pero deben cumplir requisitos altamente especializados. La anulación del nombramiento de Omar Fredy Prías por incumplimiento de requisitos mostró que la confianza presidencial no bastaba para ocupar un cargo regulador. (*Consejo de Estado, 4 jul. 2024*) Tras el fallo, la CREG informó que adelantaría una revisión jurídica integral de sus efectos. (*CREG, 9 jul. 2024*)

La reacción posterior, orientada a modificar los requisitos, admite dos lecturas. Puede tratarse de una reforma razonable para actualizar perfiles y ampliar pluralidad. También puede ser un intento de reducir las barreras que habían impedido designaciones políticamente preferidas. La prueba no está en cambiar la norma, sino en la dirección del cambio: si fortalece capacidad técnica o amplía discrecionalidad.

En una entidad reguladora, la politización no exige órdenes ilegales. Puede aparecer mediante encargos prolongados, quórum frágiles, requisitos flexibilizados y expertos cuya permanencia depende más de la compatibilidad con el Ejecutivo que de una autoridad profesional propia.

8.4. Intervenciones en salud: poder extraordinario con responsabilidad difusa

Las intervenciones de Sanitas, Nueva EPS y Famisanar no fueron inventadas sobre entidades sanas. Existían fallas financieras, asistenciales y administrativas que exigían respuesta. Sin embargo, la intervención concentra en agentes designados discrecionalmente un poder enorme sobre redes, contratos, prestadores y recursos. (*Supersalud, Res. 2024160000003002-6, 2 abr. 2024, para Sanitas*) ([Supersalud, Informe de gestión 2024](#))

El problema más visible no fue la ausencia absoluta de controles, sino la dificultad para atribuir resultados. Las resoluciones explican con detalle la crisis heredada, pero con menor precisión qué produjo cada agente, por qué fue mantenido, por qué fue removido y qué contratos cambiaron durante su gestión.

Esta opacidad crea una oportunidad estructural de patronazgo. No demuestra que exista una red partidista, pero dificulta distinguir corrección técnica, improvisación,

cuota y captura. En un sistema intervenido, la rendición de cuentas debe ser más intensa precisamente porque la autonomía ordinaria de la entidad ha sido suspendida.

8.5. El gabinete: cuando el experto deja de acompañar

Las salidas de Alejandro Gaviria, Jorge Iván González, José Antonio Ocampo y Cecilia López no pueden explicarse todas de la misma manera. Había diferencias de política, problemas de ejecución, filtraciones y pérdida de confianza. El presidente tenía facultad para reorganizar su gabinete. (DAPRE, Decreto 0274 de 2023, para Educación; [perfil institucional de Jhénifer Mojica en Vicepresidencia](#))

Aun así, la secuencia es significativa. Cada uno introducía restricciones: riesgos de la reforma de salud, límites de planeación, prudencia fiscal o dificultades de ejecución agraria. La técnica dejaba de ser un instrumento de diseño y se convertía en una objeción visible al ritmo o al relato del Gobierno.

El patrón plausible no es que Petro rechace el conocimiento. Es que lo valora mientras puede incorporarlo a su proyecto y reduce su espacio cuando exige modificarlo. La deliberación interna se vuelve entonces frágil: el experto puede hablar, pero no necesariamente conservar influencia cuando su conclusión es políticamente incómoda.

8.6. La contraprueba: los reemplazos no eran incompetentes

La revisión de Aurora Vergara, Alexander López, Ricardo Bonilla y Jhénifer Mojica impide una conclusión simplista. Varios tenían experiencia pertinente, formación sólida y conocimiento sectorial. Diversidad, compromiso político y mérito coexistían en sus perfiles. (DAPRE, Decreto 0274 de 2023; DNP, Informe al Congreso 2023–2024; [perfil institucional de Jhénifer Mojica](#))

El cambio fue más sutil. En Educación y Agricultura se modificó el énfasis; en Hacienda aumentó la cercanía política; en Planeación, la entidad pareció desplazarse desde la evaluación y la restricción hacia la ejecución territorial y la movilización del programa.

Por eso el problema no puede describirse como sustitución de expertos por ignorantes. Puede consistir en seleccionar expertos cuya principal compatibilidad no sea solo técnica, sino política: personas capaces, pero menos dispuestas o menos situadas para convertir el conocimiento en límite al presidente.

8.7. Mérito y autonomía son variables diferentes

Un funcionario puede cumplir requisitos y carecer de autonomía. Puede ser cercano al Gobierno y conservar criterio. Puede tener una hoja de vida impecable y

utilizar su conocimiento para justificar decisiones previamente tomadas. También puede ser independiente y, sin embargo, gestionar mal.

La colonización moderna rara vez necesita poblar todo el Estado de incompetentes. Le basta con modificar incentivos: quién asciende, quién permanece, quién puede disentir, qué datos se publican y qué organismo es presentado como técnico o político según el sentido de su decisión.

8.8. Del patronazgo puntual a la politización selectiva

La evidencia no muestra una red homogénea y coordinada que controle toda la administración. Sí muestra tres niveles diferentes. Primero, patronazgo verificable en nombramientos específicos. Segundo, debilitamiento del mérito en cargos técnicos concretos. Tercero, una tendencia más amplia a preferir alineación cuando la autonomía se convierte en obstáculo.

La expresión más rigurosa es politización selectiva. El Estado no desaparece dentro del movimiento, pero ciertos espacios de carrera, regulación, intervención y deliberación se vuelven más permeables a la voluntad presidencial y menos capaces de producir un “no” institucional.

8.9. La explicación democrática más fuerte

La interpretación alternativa merece tomarse en serio. Petro recibió un Estado lento, desigual y atravesado por élites burocráticas. Necesitaba funcionarios comprometidos con reformas que habían sido bloqueadas durante décadas. La apertura de la diplomacia, la representación de poblaciones excluidas y la sustitución de administradores deficientes podían democratizar instituciones cerradas.

Esta explicación gana fuerza cuando el nombrado cumple requisitos, mejora resultados, publica datos adversos y conserva equipos profesionales. Se debilita cuando el control legal es descalificado, los requisitos se flexibilizan después de una anulación, los agentes permanecen sin evaluación individual o los discrepantes salen mientras la entidad adopta un lenguaje de adhesión.

8.10. Conclusión graduada: politización selectiva

Este capítulo no demuestra una colonización total del Estado ni una burocracia completamente sometida al petrismo. Tampoco permite afirmar que el Gobierno haya sustituido mérito por incompetencia de manera sistemática.

La evidencia sí demuestra episodios concretos de patronazgo, una falla verificable de mérito en una entidad reguladora y una secuencia plausible de reducción del espacio técnico independiente. La contraprueba obliga a precisar que varios

reemplazos eran competentes; lo que pudo disminuir fue su autonomía frente al proyecto presidencial.

La formulación final más defendible es esta: bajo Petro existe una politización selectiva de la administración, con preferencia por perfiles cercanos y alineados en áreas donde carrera, regulación y deliberación debían preservar mayor independencia. Es una tendencia autocratizante de intensidad intermedia, contenida por jueces, órganos de control, carreras profesionales y pluralismo institucional.

8.11. Límites de la conclusión

- No se considera irregular todo nombramiento político.
- No se opone diversidad a mérito.
- No se atribuye responsabilidad penal o disciplinaria sin decisión competente.
- No se presume fracaso de una intervención por la persistencia de problemas heredados.
- No se afirma que los reemplazos fueran simples obedientes.
- La relevancia del hallazgo surge de la convergencia entre nombramientos, regulación, intervenciones y reducción del disenso técnico.

CAPÍTULO 9. CUANDO EL DATO DEBE CONFIRMAR EL RELATO

Producción política de la realidad, causalidad asimétrica y cierre epistemológico parcial

Conexión acumulativa. La politización selectiva no se agota en quién ocupa un cargo. También afecta qué información conserva autoridad, qué indicadores se consideran suficientes y qué experto continúa siendo técnico cuando contradice al Gobierno. Este capítulo examina esa administración política de la realidad.

9.1. La cifra no necesita ser falsa

La propaganda más rudimentaria inventa un número. La más sofisticada no lo necesita: puede partir de un dato verdadero, seleccionar el periodo conveniente, ampliar su significado, atribuirle una causalidad todavía no demostrada y convertirlo en prueba moral del proyecto político.

La pregunta no es si Gustavo Petro falsifica sistemáticamente las estadísticas oficiales: la evidencia reunida no permite afirmarlo. Es otra, más precisa: ¿qué ocurre entre el dato y la conclusión? ¿Cuánto de lo presentado como descripción de la realidad corresponde, en verdad, a una interpretación organizada para confirmar el relato?

Los casos de empleo, deuda con el Fondo Monetario Internacional, salud, seguridad y reforma agraria muestran operaciones distintas, pero convergentes. En todos existe un núcleo factual. La distorsión aparece cuando ese núcleo absorbe dimensiones que no mide, la causalidad se distribuye de forma asimétrica o la fuente pierde autoridad al producir un resultado incómodo.

9.2. El desempleo: un logro real convertido en teoría total

El caso del empleo obliga a comenzar con una concesión importante. El desempleo disminuyó y la ocupación aumentó. No fue una ilusión producida solamente porque la gente dejara de buscar trabajo. El resultado merece ser reconocido como un logro objetivo. *(DANE, GEIH, dic. 2025)*

Pero una tasa de desempleo favorable no demuestra por sí sola formalización, productividad, estabilidad contractual ni suficiencia del ingreso. La informalidad continuó afectando a más de la mitad de los ocupados y las diferencias regionales siguieron siendo profundas. *(DANE, informalidad, oct.-dic. 2025)*

La operación narrativa no está en falsear el dato, sino en permitir que pruebe demasiado: del menor desempleo se pasa a la superioridad del modelo económico; de más ocupados, a la dignificación integral del trabajo; de una mejoría multicausal, a la eficacia principal de la orientación presidencial.

Este es el caso menos grave del capítulo. El punto de partida es sólido y existen mecanismos plausibles de contribución gubernamental. Lo que permanece sin probar es la magnitud de esa contribución y la validez de convertir un indicador parcial en una teoría completa.

9.3. El FMI: dos operaciones verdaderas convertidas en una liberación

El episodio del Fondo Monetario Internacional ofrece una estructura más reveladora. Colombia desembolsó una parte de la Línea de Crédito Flexible en 2020,

pagó esa obligación conforme al calendario previsto y, años después, canceló un acuerdo precautorio que no había utilizado. *(Banco de la República, 30 sep. 2025) · (FMI, 3 dic. 2020) · (FMI, 26 abr. 2024)*

Los dos actos fueron reales. Pero no eran el mismo acto. Cancelar una línea disponible no equivale a pagar un crédito desembolsado. La cercanía temporal y la ambigüedad de la palabra cancelar permitieron reunirlos dentro de una historia única: el Gobierno habría liberado al país de una deuda, de condiciones impuestas y de un beneficio consumido por los sectores más ricos.

La Línea de Crédito Flexible no imponía, sin embargo, la condicionalidad posterior propia de otros programas del Fondo. Tampoco se demostró mediante trazabilidad presupuestal que la totalidad de los recursos hubiera sido apropiada por las élites. *· (FMI, diseño y condiciones de la LCF) · (FMI, acuerdo precautorio 2024)*

Aquí aparece una media verdad estructurada: las piezas son verdaderas, pero su ensamblaje produce una conclusión que cada una por separado no autoriza. El pago se transforma en emancipación; la amortización contractual, en ruptura soberana; y la crítica distributiva, en condena moral ya probada.

9.4. Salud: cuando el dinero sustituye al paciente

En salud, la sustitución ocurre entre actividad administrativa y experiencia clínica. El Gobierno puede demostrar que giró más recursos, amplió el giro directo, mantuvo millones de afiliaciones y registró grandes volúmenes de servicios. Todos son hechos relevantes. *(ADRES, 2025, respecto de recursos y giro directo)*

Pero el paciente no experimenta la UPC, el giro ni el registro administrativo. Experimenta la demora, la cita, la entrega incompleta, la interrupción terapéutica, la tutela y el desenlace clínico. Un medicamento puede existir en el país y no llegar a quien lo necesita. Una red puede figurar contratada y no asignar oportunamente una consulta. *· (Corte Constitucional, 3 sep. 2025)*

La producción política de la realidad aparece cuando el indicador financiero funciona como sustituto del resultado asistencial. Más dinero se vuelve mejor acceso; más servicios, mejor continuidad; más regulación, mejor atención.

La causalidad también se distribuye de manera desigual. Los recursos adicionales son mérito inmediato del Gobierno; las barreras posteriores continúan explicándose por el modelo heredado, los gestores, los fabricantes o las deudas ocultas. Todos esos factores pueden ser reales, pero no pueden operar indefinidamente como exoneración.

9.5. Seguridad: elegir el mapa en el que se gana

La seguridad ofrece otro mecanismo: seleccionar la escala. Una reducción nacional de homicidios puede ser verdadera mientras ciertos territorios padecen desplazamiento, confinamiento, extorsión, reclutamiento o pérdida de control estatal.

El promedio nacional no es falso. Es insuficiente. Puede describir una tendencia agregada y ocultar al mismo tiempo la geografía concreta de la violencia.

La operación narrativa consiste en moverse entre nación, ciudad y municipio según el lugar en el que el dato resulte favorable. Una reducción local puede incorporarse al éxito nacional; un deterioro local puede tratarse como excepción, responsabilidad territorial o herencia armada.

El caso del Catatumbo muestra el límite de esta técnica. No prueba que todo el país estuviera en caos. Sí demuestra que negar el caos nacional no responde a la pregunta sobre territorios donde el Estado perdió capacidad efectiva de proteger, circular y gobernar. · *(Defensoría del Pueblo, 6 may. 2025)*

9.6. Tierras: la potencia política de un verbo impreciso

La reforma agraria es una política real y acelerada. Hubo compras, formalizaciones, recuperaciones y entregas. El problema no es negar esos avances, sino establecer qué significa cada verbo. *(Agencia Nacional de Tierras, Informe de Gestión 2025)*

Comprar no es entregar. Recuperar no es adjudicar. Formalizar no siempre es redistribuir. Entregar provisionalmente no equivale a registrar el título. Y ninguna de esas actuaciones demuestra por sí sola que la tierra haya recibido crédito, agua, asistencia, comercialización y un proyecto productivo sostenible.

Cuando todas las categorías se reúnen bajo expresiones como hectáreas gestionadas, impactadas o entregadas, la actividad institucional adquiere la apariencia de reforma consumada. La magnitud puede ser correcta como agregado administrativo y engañosa si el público la interpreta como igual superficie redistribuida y jurídicamente perfeccionada.

La política existe. La amplificación aparece en el tránsito semántico entre gestión, acceso, propiedad y transformación productiva.

9.7. La prueba decisiva: ¿la fuente conserva autoridad cuando contradice?

El hallazgo transversal más importante no es la selección de cifras favorables, práctica común a gobiernos y oposiciones. Es la administración selectiva de la autoridad de las fuentes.

El DANE es árbitro cuando confirma el empleo; la informalidad recibe entonces una explicación estructural. El Banco de la República sirve para describir montos y obligaciones, pero puede convertirse en tecnocracia antipopular cuando limita la interpretación presidencial. ADRES demuestra el aumento de recursos; las tutelas y las alertas de control se contextualizan. La Policía valida el descenso agregado; las crisis regionales se reducen a excepciones.

Una fuente no tiene que ser infalible. Puede y debe ser criticada. La pregunta es si el criterio de crítica permanece estable. Cuando la institución es técnica si coincide e ideológica si contradice, la evidencia deja de juzgar el relato y empieza a servirlo.

9.8. La causalidad también tiene dueño

El segundo patrón transversal es la distribución de la responsabilidad. Los buenos resultados tienden a presentarse como efectos directos del Gobierno. Los adversos conservan explicaciones más complejas: herencia, tasas de interés, intermediación, sabotaje, oposición, medios, burocracia o estructura histórica.

Muchas de esas explicaciones son razonables. La asimetría surge cuando la complejidad solo se concede al fracaso. El éxito tiene autor; el fracaso tiene contexto.

La prueba democrática exige la misma disciplina causal en ambas direcciones: reconocer que un logro puede ser compartido, que una política propia puede tener costos y que una herencia, por real que sea, pierde poder explicativo a medida que avanza la administración.

9.9. De la persuasión democrática a la no falsabilidad

La democracia no prohíbe la propaganda, la simplificación ni la disputa por el significado. La oposición también selecciona periodos, exagera fracasos y presenta casos extremos como si describieran al país entero.

El umbral preocupante aparece cuando ninguna evidencia puede modificar realmente la conclusión. Si el dato es favorable, confirma el proyecto. Si es adverso, prueba la profundidad del daño heredado. Si una institución corrige, demuestra tecnocracia o captura. Si un experto discrepa, revela intereses o distancia frente al pueblo.

La evidencia reunida no permite afirmar que este sistema esté completamente cerrado. Los datos siguen publicándose, los jueces corrigen, los órganos de control advierten y existen decisiones que responden a resultados adversos. Pero sí permite hablar de un cierre epistemológico parcial: la refutación existe, aunque su capacidad de alterar el relato se reduce.

9.10. Qué prueba este capítulo y qué no prueba

Este capítulo prueba una regularidad: hechos verdaderos son utilizados para producir conclusiones más amplias mediante causalidad no demostrada, sustitución de resultados, cambio de escala, agregación de categorías y autoridad selectiva de las fuentes.

No prueba que todas las cifras de Petro sean falsas, que las entidades hayan perdido toda autonomía, que no existan logros reales o que cada simplificación constituya una mentira deliberada.

Tampoco prueba por sí solo fascismo. La manipulación narrativa aparece en democracias, populismos, tecnocracias y campañas. Su peso clasificatorio surge únicamente al converger con los capítulos anteriores: enemigo moral, contrapesos tratados como conspiración, calle convertida en voluntad del pueblo y administración progresivamente alineada.

9.11. Conclusión graduada: producción política de la realidad

Este capítulo no demuestra que el Gobierno Petro haya inventado una realidad paralela. Documenta una técnica más eficaz: organizar fragmentos verdaderos para que conduzcan a una conclusión previamente definida.

El desempleo confirma el modelo; el pago al FMI, la emancipación; los giros en salud, la mejor atención; la reducción de homicidios, la pacificación; y las hectáreas impactadas, la reforma consumada.

La formulación final más defendible es esta: bajo Petro existe una producción política sistemática, aunque no total, de la realidad, basada en datos verdaderos, inferencias ampliadas, causalidad asimétrica y cierre epistemológico parcial. El hallazgo fortalece la dimensión epistemológica del mínimo discriminante y la hipótesis de una tendencia autocratizante, porque reduce la capacidad de la evidencia adversa para corregir al poder; no autoriza a concluir falsificación general, propaganda totalitaria ni fascismo consumado.

9.12. Límites de la conclusión

- No se considera falsa toda cifra utilizada políticamente.
- No se niegan los logros objetivos encontrados en cada caso.
- No se presume intención de engaño sin evidencia suficiente.
- No se equipara simplificación democrática con propaganda totalitaria.
- No se desconoce que la oposición también selecciona y exagera.
- No se afirma que las fuentes técnicas sean infalibles.
- La relevancia depende de la repetición, la asimetría causal y su convergencia con la deslegitimación de fuentes y expertos.

CAPÍTULO 10. CUANDO LA CORRUPCIÓN SIEMPRE PERTENECE AL OTRO

*Círculo cercano, gobernabilidad, responsabilidad política y administración
moral de la culpa*

Conexión acumulativa. Si el dato favorable se atribuye al proyecto y el adverso al bloqueo, la misma asimetría puede trasladarse de la causalidad a la responsabilidad moral. Este capítulo estudia ese paso: cómo se distribuyen culpa, contexto, presunción y responsabilidad cuando los escándalos alcanzan al círculo propio.

10.1. La promesa que eleva el estándar

Gustavo Petro llegó al poder no solo con un programa de reformas, sino con una promesa moral: romper con la corrupción de las élites tradicionales. Ese compromiso no convierte automáticamente en culpable al Gobierno cuando uno de sus funcionarios delinque. Sí eleva el estándar político con el que deben evaluarse la selección de colaboradores, los controles internos, la reacción ante las alertas y la coherencia entre el juicio aplicado a los propios y a los adversarios.

La pregunta, por tanto, no es si un gobierno de izquierda puede tener corruptos. Puede. Tampoco si la existencia de un caso demuestra que el presidente lo dirigió. No lo demuestra. La pregunta es cómo administra el poder la culpa cuando la corrupción entra en su propio círculo.

10.2. La UNGRD: cuando el caso deja de ser un sobreprecio

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comenzó ante la opinión pública con la compra de carrotaques para La Guajira. El núcleo inicial apuntaba a sobreprecios, apropiación y contratación direccionada. *(Fiscalía General de la Nación, 18 mar. 2025)*

Pero la investigación se amplió. La teoría penal llegó a sostener que recursos y contratos de una entidad de emergencia habrían sido utilizados para obtener apoyo legislativo. La acusación alcanzó a exdirectivos de la Unidad, a una exconsejera presidencial, a un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y a presidentes del Congreso. *· (Fiscalía, Sandra Ortiz, 1 sep. 2025) · (Fiscalía, Carlos Ramón González, 29 ene. 2026) · (Corte Suprema, Name y Calle, 10 oct. 2025)*

Ese salto cambia la naturaleza política del caso. Ya no se trataría únicamente de funcionarios que se enriquecieron dentro de una entidad vulnerable, sino de una posible tecnología de gobernabilidad: transformar contratación pública en moneda para construir mayorías.

La precisión es indispensable. La cadena ha sido judicializada en niveles relevantes, pero no existe prueba pública suficiente para afirmar que Petro ordenó, conoció o recibió un beneficio personal. La cercanía institucional del caso con la Presidencia no equivale a responsabilidad penal del presidente.

10.3. Pedir perdón: un acto importante, pero incompleto

Petro pidió perdón ante el Congreso y reconoció responsabilidad política por haber nombrado a Olmedo López. Ese gesto no debe minimizarse. Muchos gobernantes reducen cada escándalo a una operación de sus enemigos; Petro admitió que una decisión presidencial había contribuido al problema. *· (Presidencia de la República, 20 jul. 2024)*

Sin embargo, la responsabilidad reconocida fue estrecha: haber escogido mal a una persona. Si el caso implicó coordinación entre varias oficinas, contratación orientada y búsqueda de apoyos legislativos, el problema político no termina en el nombramiento. Interroga también la forma de construir coalición, el tipo de operadores privilegiados, el control sobre entidades con contratación excepcional y la reacción frente a las primeras alertas.

El perdón es una señal democrática. No sustituye la reconstrucción de quién sabía qué, cuándo lo supo y qué hizo después.

10.4. La categoría de traición

A medida que el escándalo avanzó, la explicación presidencial se organizó alrededor de la traición. Quienes participaron en la corrupción no representaban al cambio: lo habían traicionado.

La categoría puede ser verdadera. Un funcionario puede actuar contra las instrucciones del presidente y utilizar su cargo para beneficio propio. Pero también puede funcionar como una poderosa inmunidad moral.

Si todo aliado deja de pertenecer al proyecto en el instante en que se corrompe, ningún caso propio puede revelar un defecto del proyecto. La corrupción siempre será externa a su esencia: infiltración, desviación o traición. Así, la responsabilidad se individualiza y la identidad moral del movimiento permanece intacta.

10.5. La responsabilidad política no es responsabilidad penal

El análisis exige separar dos planos. La responsabilidad penal necesita prueba de conducta, participación, conocimiento y decisión judicial. No puede transferirse desde un funcionario hacia el presidente por cercanía o jerarquía.

La responsabilidad política funciona de otra manera. Comprende seleccionar, vigilar, reaccionar, explicar y proteger la capacidad institucional de investigar. Puede existir incluso cuando el gobernante no conoció el delito.

En la UNGRD, esa responsabilidad es relevante. Petro nombró al director, confió en personas que ocuparon posiciones centrales y presidió un Gobierno cuya estrategia legislativa quedó bajo investigación por posible uso de recursos públicos.

Sostener esta responsabilidad política no autoriza a inventar una responsabilidad penal.

10.6. Nicolás Petro: parentesco no es prueba

El caso de Nicolás Petro exige una disciplina especial. La relación filial vuelve políticamente explosivo cualquier señalamiento, pero no permite transferir culpabilidad del hijo al padre.

Las investigaciones sobre su patrimonio y sobre recursos recibidos son serias. Aun así, deben distinguirse tres hechos: que alguien entregue dinero con una finalidad política, que Nicolás lo reciba y que ese dinero termine financiando efectivamente la campaña. *(Fiscalía General de la Nación, comunicaciones 2023-2025)*

La finalidad declarada por un aportante no demuestra el destino real. Y el destino real no demuestra, sin una prueba adicional, conocimiento presidencial.

Petro pidió que la Fiscalía investigara a su hijo. Esa actuación debilita una tesis de encubrimiento familiar automático. La pregunta política permanece en los controles de campaña y en la existencia de una periferia de recaudación informal alrededor del proyecto.

10.7. La campaña de 2022: control administrativo y disputa existencial

La investigación del Consejo Nacional Electoral sobre ingresos, gastos y topes de la campaña es distinta del proceso penal de Nicolás Petro. Incluye conceptos propios: aportes, transporte, propaganda, eventos, testigos y pagos de organizaciones. · *(CNE, comunicado 8 oct. 2024)*

Una formulación de cargos no es una sanción definitiva. Pero tampoco es un simple rumor. Obliga a responder con documentos, cuentas y explicaciones.

La reacción presidencial introdujo otro mecanismo: presentar el control como golpe o amenaza contra el voto popular. La controversia deja entonces de girar alrededor de facturas, reportes y topes para convertirse en una disputa sobre quién tiene derecho a cuestionar la voluntad del pueblo.

El presidente puede objetar competencia, parcialidad o debido proceso. El riesgo autocratizante aparece cuando el control es legítimo mientras examina a otros y se vuelve conspiración cuando alcanza el núcleo electoral del proyecto.

10.8. Ricardo Roa: mérito y confianza no se excluyen

Ricardo Roa tenía experiencia en el sector energético. No fue un nombramiento técnicamente absurdo. Pero también había sido gerente de la campaña presidencial. · *(Ecopetrol, designación y perfil, 18 abr. 2023)* · *(Ecopetrol, rol como gerente de campaña, 9 oct. 2024)*

La cuestión no es escoger entre mérito y cercanía, porque ambos podían coexistir. La pregunta es si su cercanía produjo una protección institucional más robusta que la que habría recibido otro ejecutivo sometido a riesgos equivalentes.

La Junta de Ecopetrol informó que monitoreó el caso, evaluó riesgos y contó con asesoría legal y regulatoria. En abril de 2026 autorizó una licencia no remunerada solicitada por Roa, precedida por vacaciones, y designó un presidente encargado. Estas medidas impiden hablar con seriedad de captura absoluta, pero tampoco deben describirse como una remoción impuesta por la Junta. · (*Ecopetrol, seguimiento de Junta, 9 oct. 2024*) · (*Ecopetrol, decisiones de Junta, 6 abr. 2026*)

Pero la confianza se mantuvo mientras se acumulaban riesgos electorales, disciplinarios, reputacionales y regulatorios. La permanencia prolongada fortalece moderadamente la hipótesis de un trato preferente, sin demostrar culpabilidad ni imposición presidencial.

10.9. Verónica Alcocer: el límite que protege al análisis

Un análisis del círculo cercano corre el riesgo de convertirse en una colección de insinuaciones. La esposa del presidente tiene acceso, visibilidad y actividad pública; eso justifica transparencia, no culpabilidad.

Viajes, reuniones, agendas sociales o relaciones personales no prueban contratos direccionados, nombramientos impuestos ni beneficios privados. Para incluirla como caso de corrupción se necesitaría una cadena individualizada de acto, decisión, recurso, beneficio y responsabilidad.

No encontrar esa cadena y excluir el señalamiento no debilita el manuscrito. Lo fortalece. Una crítica al doble estándar de Petro no puede construirse aplicando culpa por asociación contra su familia.

10.10. Dos gramáticas de la corrupción

El hallazgo transversal es una diferencia en la arquitectura moral del relato.

Cuando la corrupción afecta a los propios, la unidad de culpa suele ser individual: un funcionario, un hijo, un gerente o un grupo de operadores traicionó el proyecto. Cuando afecta a los adversarios, el hecho individual tiende a convertirse con mayor rapidez en prueba de un gobierno, una élite o un régimen corrupto.

No toda diferencia es ilegítima. Algunos casos adversarios pueden revelar estructuras históricas reales. La asimetría aparece cuando los casos propios casi nunca pueden interrogar la estructura del proyecto, mientras los ajenos casi siempre pueden condenar la estructura del adversario.

10.11. El líder personalmente honesto y el sistema que lo rodea

Petro ha defendido repetidamente su integridad personal: no haberse apropiado de dinero público. Esa afirmación es relevante, pero responde solo a una forma de corrupción.

Un gobernante puede no enriquecerse y aun enfrentar responsabilidad por beneficio electoral, apoyo legislativo, cuotas, contratos, conflictos de interés o redes construidas por personas cercanas.

Reducir la corrupción al enriquecimiento personal del líder permite preservar su inocencia individual sin resolver el modo en que funciona el poder bajo su administración.

10.12. Las contrapruebas que no deben ocultarse

La crítica pierde credibilidad si ignora los hechos que la contradicen.

Petro pidió investigar a su hijo, pidió perdón por la UNGRD, aceptó salidas, calificó severamente a antiguos funcionarios y confirmó la solicitud para que Carlos Ramón González respondiera ante la justicia. · *(Presidencia, perdón y responsabilidad política, 20 jul. 2024)* · *(Fiscalía, acusación Carlos Ramón González, 29 ene. 2026)*

Además, la Fiscalía, la Procuraduría, el CNE y la Corte Suprema conservaron capacidad de investigar y acusar a personas del círculo gubernamental.

Estos hechos impiden hablar de impunidad completa, encubrimiento demostrado o captura total de los organismos de control.

10.13. Lo que sí queda probado

Queda probado que durante el Gobierno Petro ocurrió un caso grave de corrupción dentro de la UNGRD y que la investigación avanzó hacia una posible conexión entre contratación y gobernabilidad legislativa. · *(Corte Suprema, Name y Calle, 10 oct. 2025)* · *(Fiscalía, Sandra Ortiz, 1 sep. 2025)*

Queda probado que existieron controles formales relevantes sobre el patrimonio de Nicolás Petro, la financiación de la campaña y el manejo de riesgos alrededor de Ricardo Roa. · *(CNE, apertura de investigación, 8 oct. 2024)* · *(Ecopetrol, seguimiento corporativo, 9 oct. 2024)*

Queda probado también que Petro reconoció responsabilidad política, pero la delimitó principalmente al error de nombrar y confiar.

Y queda suficientemente documentada una asimetría narrativa: individualización y contextualización más amplias para los propios; generalización estructural más rápida para los adversarios.

10.14. Lo que no queda probado

No queda probado que Petro dirigiera una red criminal, conociera los sobornos, recibiera dinero o interfiriera para impedir investigaciones.

No queda probado que los recursos investigados de Nicolás Petro ingresaran a la campaña oficial, que Ricardo Roa sea culpable de las conductas examinadas o que Verónica Alcocer participara en corrupción.

No queda probado un encubrimiento presidencial ni una neutralización completa de los controles.

10.15. La relevancia para la hipótesis autocratizante

La corrupción no es fascismo ni es exclusiva de gobiernos autoritarios. Su relevancia para este libro aparece en la forma de procesarla políticamente.

Cuando el líder conserva para su proyecto una inocencia moral difícil de refutar; cuando el aliado corrupto se convierte retroactivamente en traidor; cuando el adversario individual prueba la corrupción de todo un régimen; y cuando el órgano de control es reubicado como actor de golpe al acercarse al núcleo electoral, aparece una lógica autocratizante.

En este capítulo esa lógica aparece de manera parcial. Las instituciones actuaron y el presidente cooperó en momentos importantes. Por eso la evidencia no permite hablar de inmunidad total ni de régimen cerrado.

10.16. Conclusión graduada: administración moral de la culpa

Durante el Gobierno Petro se produjo al menos un caso grave de corrupción con posible función de gobernabilidad legislativa. Alrededor del proyecto existieron además zonas de alto riesgo: financiación periférica, controles discutidos, confianza prolongada y figuras de influencia informal.

La evidencia no permite atribuir a Petro una dirección criminal, conocimiento directo, beneficio personal o encubrimiento.

Sí permite atribuirle responsabilidad política relevante y documentar una administración asimétrica de la culpa: los propios reciben con mayor frecuencia individualización, espera, contextualización y la categoría de traición; los adversarios, generalización estructural y condena del régimen con mayor rapidez.

La formulación final más defendible es esta: existe un doble estándar moral parcial, acompañado por una posible función de gobernabilidad de la corrupción

investigada en la UNGRD y por controles insuficientes en la periferia del proyecto. Las contrapruebas institucionales impiden concluir encubrimiento, captura total o fascismo consumado; el patrón fortalece, en cambio, la dimensión moral-excluyente y la hipótesis autocratizante al administrar la legitimidad de la investigación según su proximidad al poder.

10.17. Límites de la conclusión

- No se transfiere responsabilidad penal por parentesco, jerarquía o cercanía.
- No se confunde formulación de cargos con condena.
- No se llama encubrimiento a toda defensa política.
- No se ignoran los actos de cooperación del presidente.
- No se incorpora a Verónica Alcocer sin prueba individualizada ni se presenta toda corrupción como fascismo; importa el doble estándar reiterado y su convergencia con otros mecanismos.

CAPÍTULO 11. CUANDO EL MANDATO PRETENDE ESTAR POR ENCIMA DE LA REGLA

Consulta, decreto, poder constituyente, emergencia y erosión simbólica del límite

Conexión acumulativa. La administración selectiva de la culpa protege la superioridad moral del proyecto; el problema institucional aparece cuando esa superioridad pretende justificar medios extraordinarios para realizar el mandato. Este capítulo reúne consulta, decreto, emergencia y poder constituyente para examinar el tránsito desde el relato hacia la expansión ejecutiva.

11.1. El problema no es querer transformar

Un presidente elegido para cambiar un país tiene derecho a intentar cambiarlo. Puede presentar reformas, convocar apoyo social, proponer consultas, criticar al Congreso, impugnar decisiones judiciales y defender una reforma constitucional. Nada de eso es, por sí mismo, autoritario.

El problema comienza en otro lugar: cuando el programa presidencial deja de ser una propuesta sometida a instituciones y empieza a funcionar como medida de la legitimidad de esas instituciones. Si aprueban, representan al pueblo. Si modifican, mutilan su voluntad. Si niegan, bloquean. Si controlan, pueden convertirse en responsables del daño o incluso de una ruptura constitucional.

Este capítulo no pregunta si Petro tiene derecho a reformar. Pregunta qué ocurre cuando la regla no produce el resultado que el mandato desea.

11.2. La consulta laboral: una derrota convertida en autorización

La consulta popular laboral de 2025 ofrece el caso más nítido. El Gobierno inició la ruta prevista: formuló preguntas y solicitó al Senado el concepto favorable exigido para una consulta nacional.

El Senado negó esa autorización y, al mismo tiempo, reabrió el trámite de la reforma laboral. No cerró toda discusión sobre derechos laborales; rechazó un mecanismo y mantuvo otro.

El Gobierno sostuvo que la votación negativa había sido irregular. Esa controversia podía ser seria. Pero en lugar de obtener primero una decisión competente que invalidara el resultado, el Ejecutivo convocó directamente la consulta mediante el Decreto 639.

La cuestión decisiva no era únicamente si el Senado había actuado bien. Era quién tenía autoridad para declarar que su decisión no valía. Al expedir el decreto, el Ejecutivo actuó como si pudiera resolver por sí mismo la controversia y suplir el requisito que no había obtenido.

11.3. El sistema contuvo el intento

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto. La consulta no se realizó. El Congreso aprobó finalmente la reforma laboral y el Gobierno derogó el acto. (*Consejo de Estado, auto del 18 jun. 2025*)

Estos hechos impiden hablar de sustitución consumada del Congreso. Las instituciones funcionaron: el juez detuvo, el legislador deliberó y el Ejecutivo retiró la convocatoria.

Pero la contención no borra el intento. El episodio revela una disposición concreta: ante una derrota legislativa, trasladar la decisión directamente al pueblo y atribuir al Ejecutivo la capacidad de neutralizar el efecto de la votación adversa.

11.4. Del pueblo soberano al pueblo “sin permiso”

La Constitución reconoce al pueblo como soberano. También establece procedimientos para que esa soberanía se convierta en una decisión jurídicamente vinculante. Ambas afirmaciones son inseparables.

Petro afirmó en 2024 que el pueblo podía constituirse en poder constituyente “sin permiso”. La frase puede leerse como una defensa de la organización ciudadana frente a instituciones cerradas. Nadie necesita autorización estatal para reunirse, deliberar, movilizarse o promover una reforma. · (Presidencia de la República, 19 mar. 2024)

Pero si “sin permiso” significa sin procedimiento, aparece otra cosa: una soberanía política abierta cuya voz puede ser definida por el líder, la plaza o los comités y colocada por encima de la Constitución vigente.

La pregunta no es si el pueblo manda. Es quién puede hablar en su nombre, cómo se protege a quienes discrepan y qué reglas distinguen una movilización de una decisión constitucional.

11.5. La Constituyente: ruta formal y legitimidad previa

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente evolucionó. Primero fue una idea amplia de poder popular y cumplimiento de la Constitución de 1991. Después se convirtió en comités, firmas y un proyecto que debía pasar por el nuevo Congreso.

Esa canalización formal es una contraprueba central. Petro no convocó unilateralmente una Asamblea y ha mencionado pasos compatibles con el artículo 376: iniciativa, ley, votación popular y elección de delegatarios. · (Presidencia, 24 oct. 2025); (Presidencia, 27 dic. 2025)

Sin embargo, el discurso fue aumentando su alcance. La Constituyente apareció como respuesta al bloqueo, como gran acuerdo nacional, como defensa frente a amenazas y finalmente como única vía para realizar reformas sociales y alcanzar “corrupción cero”.

La tensión reside allí: la ruta reconoce al Congreso, pero la legitimidad de la Asamblea se construye antes del trámite. Si la negativa legislativa llega después de que el pueblo ha sido presentado como ya constituido y movilizado, el Congreso puede quedar reducido a obstáculo de una decisión moralmente tomada.

11.6. No hay prueba de reelección; sí debe haber límites

No existe evidencia suficiente para afirmar que la propuesta constituyente busque prolongar inmediatamente el mandato de Petro. Él mismo situó el proceso después de las elecciones de 2026 y el Comité Ciudadano suspendió la recolección de firmas durante la coyuntura electoral, decisión que Petro respaldó públicamente.

([Presidencia de la República, 4 jun. 2026](#))

La suspensión constituye una contraprueba relevante frente a una escalada inmediata: reduce la fuerza de la hipótesis de sustitución unilateral en esta etapa. No equivale todavía al abandono definitivo de la iniciativa, que deberá verificarse después de la transición.

Atribuirle una maniobra reeleccionista sin prueba repetiría el método de culpabilidad anticipada que este libro critica.

Pero las garantías democráticas no descansan solo en declaraciones. Deben aparecer en el texto: competencia limitada, cronograma, exclusión de prolongación del periodo, reglas de inelegibilidad, composición plural y aceptación de una eventual derrota legislativa o popular.

11.7. La excepción: gobernar cuando lo ordinario no alcanza

Los estados de excepción existen porque hay crisis que no pueden esperar. Una guerra, una grave perturbación del orden público o una calamidad extraordinaria pueden exigir poderes temporales que el Gobierno no posee en la normalidad.

Petro enfrentó crisis reales. La Guajira padecía una emergencia humanitaria y climática. El Catatumbo sufrió violencia, desplazamientos y confinamiento. El Estado tenía obligaciones urgentes.

El problema constitucional no consiste en negar la gravedad. Consiste en demostrar que los instrumentos ordinarios eran insuficientes y que cada medida extraordinaria respondía directamente al hecho nuevo.

11.8. Tres emergencias, tres resultados distintos

La Corte declaró inexecutable la emergencia de La Guajira porque el Gobierno no justificó suficientemente por qué las herramientas ordinarias no bastaban, aunque reconoció la crisis y protegió temporalmente algunas medidas relacionadas con el agua. · (Corte Constitucional, C-383/23)

En el Catatumbo, la conmoción interior tuvo una justificación extraordinaria más fuerte. El control fue mixto: unas medidas sobrevivieron y otras fueron anuladas o condicionadas. Este caso impide sostener que toda excepcionalidad de Petro fuera artificiosa. · (Corte Constitucional, C-207/25); (Corte Constitucional, C-467/25)

La emergencia fiscal nacional de diciembre de 2025 fue diferente. El Gobierno invocó déficit, salud, seguridad, deuda, obligaciones judiciales y negativas legislativas. La Corte concluyó que la mayoría de esos hechos eran estructurales, persistentes o previsibles, y declaró inexecutable la habilitación. · (Corte Constitucional, C-075/26)

El punto más delicado fue incorporar la no aprobación de leyes de financiamiento como parte de la emergencia. Si una derrota tributaria se transforma en hecho habilitante, el Ejecutivo puede recuperar por decreto la competencia que no obtuvo en el Congreso.

11.9. Cuando el control es llamado ruptura

Petro ha cumplido materialmente decisiones judiciales relevantes. Los decretos suspendidos dejaron de producir efectos y las normas declaradas inexecutables cayeron. No existe una política general demostrada de desacato.

La erosión opera en otro nivel. Después de la suspensión de la emergencia fiscal, el presidente llegó a presentar la decisión como una ruptura del orden constitucional. · (Presidencia de la República, 30 ene. 2026)

La inversión es significativa: el tribunal que controla un poder excepcional aparece como autor de la ruptura; el decreto que amplía la capacidad del Ejecutivo aparece como defensa de la normalidad.

La institución conserva fuerza jurídica, pero pierde legitimidad política ante la audiencia del líder.

11.10. Congreso y cortes: autoridad variable según el resultado

El Congreso no fue siempre descrito como ilegítimo. Cuando aprobó reformas, el Gobierno celebró la victoria democrática. Cuando archivó, modificó o negó, apareció el bloqueo institucional.

Las cortes tampoco actuaron siempre contra el Gobierno. Avalaron algunas medidas, condicionaron otras y anularon actos centrales. Esa variedad demuestra que no fueron una oposición uniforme.

La asimetría está en el lenguaje: una decisión favorable confirma la Constitución; una adversa puede convertirse en daño, sabotaje o ruptura. La autoridad de la institución parece variar con el resultado que produce.

11.11. Acatar no siempre significa reconocer

La democracia puede erosionarse sin una orden abierta de desobedecer. Un Gobierno puede cumplir un fallo y, al mismo tiempo, preparar a sus seguidores para considerar ilegítimo al tribunal que lo dictó.

El fallo sigue vigente, pero el árbitro queda asociado con las élites, el bloqueo, la tecnocracia o el sufrimiento social. La siguiente decisión llega a una opinión pública ya predispuesta a interpretarla como agresión.

Por eso la categoría adecuada no es desacato consolidado. Es erosión simbólica de contrapesos con contención jurídica efectiva.

11.12. La prueba histórica evita la caricatura

Petro no inventó el presidencialismo fuerte colombiano. Uribe promovió un referendo y reformas de reelección. Santos convocó el plebiscito de paz y buscó otra ruta después del triunfo del No. Duque declaró la emergencia por la pandemia.

Los mecanismos de participación, reforma y excepción pueden utilizarse democráticamente. La Corte avaló la emergencia de COVID-19 porque existía un hecho extraordinario y sobreviniente; permitió una primera reelección y detuvo una segunda; controló el referendo y el plebiscito.

La comparación demuestra que el problema no es la ideología del presidente ni el nombre del instrumento. Es el respeto por el procedimiento, el hecho habilitante, el resultado y el árbitro.

11.13. La singularidad está en la convergencia

Ninguno de los episodios aislados basta para demostrar una trayectoria autoritaria. Una consulta controvertida puede ser un error jurídico. Una emergencia inexequible puede ser una interpretación fallida. Una propuesta constituyente puede ser completamente democrática.

La fuerza probatoria aparece cuando convergen: consulta convocada por decreto, poder constituyente “sin permiso”, Asamblea presentada como salida necesaria, emergencias expansivas y deslegitimación del control.

Todos los mecanismos avanzan en una misma dirección: cuando el procedimiento ordinario no realiza el mandato, se busca una fuente de legitimidad superior que permita corregirlo o superarlo.

11.14. La mejor defensa integral

Petro fue elegido para realizar reformas profundas en un sistema con poderes de veto, partidos inestables, intereses organizados y crisis sociales reales. No estaba obligado a renunciar a su programa después de la primera derrota.

La consulta popular, la movilización, la iniciativa constituyente y los estados de excepción están previstos en la Constitución. El Gobierno tenía derecho a discutir la votación del Senado, a proponer una Asamblea, a responder a crisis y a criticar fallos con impactos fiscales y sociales.

Además, no cerró el Congreso, no neutralizó tribunales, no prolongó el mandato, no realizó la consulta suspendida y no convocó unilateralmente la Constituyente.

11.15. La mejor crítica integral

La defensa anterior no resuelve la regularidad del patrón. En un periodo breve, las derrotas o límites institucionales fueron seguidos por llamados al pueblo directo, decretos, emergencia, Constituyente y acusaciones de bloqueo o ruptura.

La concepción subyacente parece jerarquizar las fuentes de legitimidad. El presidente y el pueblo movilizado representarían el contenido verdadero de la democracia; Congreso, procedimientos y cortes conservarían autoridad solo mientras no frustraran ese contenido.

El riesgo no es una dictadura ya instalada. Es acostumbrar a la ciudadanía a pensar que una institución es democrática únicamente cuando confirma al líder.

11.16. Lo que queda probado

Queda probado que el Gobierno convocó por decreto una consulta que no había obtenido concepto favorable del Senado y que el acto fue suspendido.

Queda probado que Petro desarrolló de forma sostenida una noción de poder constituyente y que la vinculó con bloqueo institucional y necesidad de reformas.

Queda probado que el Gobierno utilizó estados de excepción de manera reiterada y que dos emergencias económicas centrales fueron invalidadas por la Corte.

Queda probado que las decisiones judiciales produjeron efectos materiales y que no existe una desobediencia general.

Y queda suficientemente documentado un patrón de deslegitimación selectiva del límite cuando contradice el programa presidencial.

11.17. Lo que no queda probado

No queda probado que Petro haya abolido o neutralizado el Congreso, capturado las cortes, gobernado permanentemente por decreto o convocado una Asamblea al margen de la Constitución.

No queda probado que busque una reelección inmediata, que todas las crisis fueran ficticias o que cada crítica a un tribunal fuera ilegítima.

No queda probado un régimen fascista consolidado. La evidencia pertenece al terreno del populismo plebiscitario y la autocratización gradual.

11.18. Conclusión graduada: jerarquía plebiscitaria de legitimidades

El Gobierno Petro ha desarrollado una estrategia reiterada de ampliación del mandato presidencial mediante mecanismos constitucionales o cercanos a ellos cuando el procedimiento ordinario limita sus reformas.

La estrategia no ha producido ruptura institucional. Congreso y cortes continúan actuando, las decisiones se cumplen y los intentos más controvertidos han sido contenidos.

Pero sí ha generado una jerarquía plebiscitaria de legitimidades: el mandato presidencial y el pueblo movilizado son presentados como superiores al límite institucional adverso.

La formulación más precisa es esta: un populismo plebiscitario que, ante límites adversos, eleva el mandato y al pueblo movilizado sobre el procedimiento; una tendencia autocratizante clara en la dimensión institucional-excepcional, contenida por contrapesos que conservaron eficacia material.

11.19. Relevancia para la hipótesis general y límites

Los capítulos anteriores mostraron la construcción del enemigo, la conversión del límite en conspiración, la calle como voz del pueblo, la politización de la administración, la producción narrativa de la realidad y la distribución asimétrica de la culpa.

Este capítulo muestra cómo esas piezas pueden convertirse en una teoría práctica del poder. Cuando la institución no confirma el mandato, se invoca una legitimidad alternativa capaz de superarla.

Por sí solo, esto no demuestra fascismo. Al converger con las demás dimensiones del mínimo discriminante, sí fortalece la hipótesis de una lógica autocratizante que

conserva las instituciones mientras disputa el derecho de esas instituciones a limitar al líder.

- No se confunde una propuesta constituyente con un golpe.
- No se confunde una suspensión cautelar con una sentencia definitiva.
- No se presenta toda emergencia como fraudulenta.
- No se atribuye una intención reeleccionista sin prueba.
- No se llama desacato a todo desacuerdo con una corte.
- No se ignora que los contrapesos han funcionado.
- La conclusión depende de repetición, convergencia y dirección común.

CAPÍTULO 12. CUANDO EL ESPEJO VENEZOLANO DEJA DE SER UNA EXAGERACIÓN

Maduro, indulgencia ideológica y aprendizaje posible de una autocratización gradual

Conexión acumulativa. El capítulo anterior mostró la teoría práctica del poder dentro de Colombia: mandato, límite, urgencia y legitimidad alternativa. Este capítulo somete esa secuencia a una comparación regional controlada, no para afirmar identidad con Venezuela, sino para evaluar coincidencias funcionales, diferencias institucionales y posibilidades de aprendizaje.

12.1. El problema de las analogías demasiado fáciles

Decir que Colombia se convertirá en Venezuela se volvió durante años una forma de propaganda. La comparación se utilizó para descalificar reformas, cerrar discusiones y atribuir intenciones sin necesidad de probarlas.

Esa exageración produjo un efecto paradójico: volvió sospechosa cualquier advertencia seria sobre Venezuela. Quien señalaba una semejanza podía ser acusado de repetir un eslogan, incluso cuando la semejanza ya no estaba en la economía o en la ideología, sino en la manera de relacionar mandato, pueblo, instituciones y poder.

Este capítulo no sostiene que Petro sea Chávez, que Colombia sea Venezuela ni que toda Constituyente conduzca al autoritarismo. Pregunta algo más limitado y más difícil: si Petro ha incorporado algunos mecanismos tempranos de una experiencia regional que demostró cómo ampliar gradualmente el poder sin comenzar por abolir las elecciones.

12.2. Hablar con Maduro no es obedecer a Maduro

Colombia comparte con Venezuela una frontera extensa, millones de vínculos familiares, migración, comercio, grupos armados, necesidades consulares y una interdependencia que ningún discurso puede borrar.

Restablecer embajadas, consulados y pasos fronterizos fue una decisión racional. La ruptura anterior no democratizó a Venezuela; trasladó buena parte de la relación hacia trochas, intermediarios y economías ilegales. (*Cancillería de Colombia, 28 ago. 2022*)

Por eso la existencia de relaciones diplomáticas no prueba afinidad autoritaria. Un Estado responsable debe hablar con quien controla efectivamente al Estado vecino, incluso cuando cuestiona la legitimidad de sus elecciones.

12.3. La normalización produjo beneficios reales

La reapertura permitió recuperar servicios consulares, formalizar parte del comercio, reactivar mecanismos binacionales y ofrecer una capacidad mayor de gestión sobre migración y frontera.

Estos beneficios no son propaganda ni detalles secundarios. Afectan documentos, familias, transporte, salud, seguridad y trabajo cotidiano de poblaciones que no deben convertirse en instrumentos de castigo entre gobiernos.

La crítica democrática pierde credibilidad si niega esos resultados solo para conservar una imagen completamente negativa de la política exterior de Petro.

12.4. La relación material avanzó más que la exigencia democrática

El problema aparece al comparar velocidades. La integración bilateral se volvió visible, continua y concreta. Las exigencias sobre independencia electoral, presos políticos, represión y alternancia fueron menos constantes y menos vinculantes.

Colombia obtuvo interlocución, pero no consiguió actas públicas completas, apertura del árbitro electoral ni una reducción verificable de la persecución.

Eso no significa que la normalización causara la represión. Significa que el régimen recibió beneficios diplomáticos y políticos inmediatos, mientras la condicionalidad democrática permaneció débil o difícil de observar.

12.5. La elección de 2024 eliminó la ambigüedad esencial

Antes del 28 de julio podía discutirse hasta qué punto el régimen venezolano conservaba una competencia electoral capaz de producir alternancia. Después de la proclamación sin resultados completos por mesa, el problema dejó de ser una percepción opositora.

El Centro Carter, invitado por la propia autoridad electoral, concluyó que el proceso no cumplió estándares internacionales de integridad y que el resultado anunciado no podía verificarse de manera independiente. · (Centro Carter, 30 jul. 2024)

La oposición presentó una colección extensa de actas. La autoridad que tenía acceso al universo oficial no publicó una base completa capaz de confirmarlas o refutarlas. La carga principal de la transparencia recaía en el Estado. · (Centro Carter, informe final, 17 feb. 2025)

12.6. Petro no reconoció incondicionalmente a Maduro

La respuesta colombiana tuvo componentes democráticos reales. Petro había propuesto garantías para ganador y perdedor. Después de la elección, Colombia pidió datos desagregados por mesa, evitó reconocer inmediatamente la

proclamación y terminó afirmando que no reconocía los resultados sin actas públicas y transparentes. (*Presidencia de la República, declaración conjunta, 24 ago. 2024*)

Petro tampoco asistió a la posesión. Estas decisiones contradicen la tesis de una complicidad abierta o de un respaldo automático a Maduro. · (Presidencia de la República, 10 ene. 2025)

La acusación correcta no puede ser que Petro certificó el fraude. La cuestión es si la firmeza utilizada para exigir actas fue equivalente a la utilizada para condenar lo que ocurrió después.

12.7. La represión cambió el objeto del juicio

Después de la elección, la discusión ya no era solo electoral. Organismos internacionales documentaron una respuesta estatal orientada a silenciar a opositores reales o percibidos mediante detenciones arbitrarias, persecución y violencia. (*Naciones Unidas, misión de determinación de los hechos, 2025*)

Las autoridades venezolanas describieron la protesta y la oposición como parte de un golpe fascista. La etiqueta no fue un adorno retórico: acompañó la conversión del adversario en amenaza criminal. · (Centro Carter, informe final, 17 feb. 2025)

El caso ofrece una advertencia central para este libro. Cuando fascismo y golpe se utilizan como categorías móviles, pueden preparar la exclusión de personas que todavía participan dentro de la disputa democrática.

12.8. La insuficiencia colombiana estuvo en la intensidad moral

Colombia fue más clara sobre las actas que sobre la represión. Predominaron el diálogo, la paz, la soberanía y la búsqueda de una salida negociada.

Esa prudencia puede proteger canales diplomáticos. Sin embargo, la gravedad documentada superaba el umbral para una condena pública más sostenida y más específica sobre responsabilidades políticas.

No existe evidencia de que Petro apoyara las detenciones. La categoría adecuada no es complicidad. Es una respuesta democrática parcial, acompañada por una indulgencia visible en la distribución del énfasis.

12.9. Las sanciones: una crítica legítima que puede administrar la culpa

Petro ha señalado que las sanciones económicas pueden afectar a la población, impedir operaciones permitidas y profundizar migración y sufrimiento. Esa crítica tiene fundamento humanitario.

El error aparece cuando la coerción externa se convierte en explicación dominante y las decisiones internas pierden centralidad. La crisis venezolana no comenzó con

todas las sanciones, y la represión electoral no es una consecuencia automática de restricciones financieras.

La formulación original de Petro era condicional: alivio progresivo de sanciones a cambio de garantías democráticas. Después de 2024, el componente de alivio conservó visibilidad mientras la condición democrática produjo pocos resultados.

12.10. La soberanía no pertenece únicamente al gobierno

Rechazar una intervención militar y defender la no intervención son posiciones legítimas. Colombia no debe promover un cambio de régimen por la fuerza.

Pero la soberanía no es propiedad de quien controla el palacio presidencial. También protege al elector, al opositor, al periodista, al detenido y al ciudadano que exige que su voto sea contado.

Invocar soberanía para limitar presiones externas puede ser correcto; usarla para evitar un juicio moral sobre el poder interno convertiría un principio jurídico en una barrera de impunidad.

12.11. La prueba de simetría

Petro aplicó frente a Venezuela un estándar probatorio que, en sí mismo, era adecuado: pedir actas antes de declarar fraude.

El posible doble estándar surge porque esa prudencia no siempre se concede a sus adversarios. En Colombia y frente a gobiernos de derecha, las palabras fascismo, golpe, nazismo, odio y extrema derecha aparecen con mayor rapidez, personalización y certeza.

Frente a Maduro predominan el proceso, la geopolítica, las sanciones y la formulación impersonal. La diferencia puede explicarse parcialmente por la diplomacia, pero la cercanía ideológica parece influir en quién recibe contexto y quién recibe condena.

12.12. No es la ausencia de la palabra fascismo

Petro no está obligado a llamar fascista a Maduro. El régimen venezolano tiene una genealogía distinta y el término puede ser históricamente discutible.

La simetría no exige repetir la misma palabra, sino aplicar la misma gravedad moral a conductas equivalentes. Una elección no verificable, el encarcelamiento de opositores y el uso del Estado para impedir alternancia exigen una condena sustantiva, cualquiera que sea la etiqueta.

La desigualdad aparece cuando actores con conductas más graves reciben un lenguaje más cuidadoso que adversarios a quienes se atribuyen intenciones aún no demostradas.

12.13. Venezuela como trayectoria, no como fotografía

El error más común consiste en comparar la Colombia actual con la Venezuela ya consolidada de Maduro. Esa fotografía hace que toda analogía parezca absurda: Colombia conserva elecciones competitivas, cortes independientes, medios críticos y oposición fuerte.

La comparación correcta es secuencial. Chávez llegó mediante elecciones, canalizó una crisis real, prometió refundación y utilizó una Constituyente aprobada popularmente. La concentración posterior fue gradual.

El valor del caso venezolano no está en afirmar que el desenlace ya ocurrió, sino en identificar los primeros mecanismos antes de que el desenlace sea inevitable.

12.14. El mandato refundacional

Chávez interpretó su victoria como autorización para reemplazar el orden político anterior. El presidente no era solo un gobernante dentro de las reglas: era el conductor de una nueva legitimidad histórica.

Petro utiliza una formulación menos consumada, pero semejante en función. El Gobierno del cambio representa una ruptura histórica y las instituciones que lo limitan pueden aparecer como supervivencias de un régimen de élites.

La coincidencia no demuestra copia. Sí muestra una concepción plebiscitaria del mandato que convierte la victoria electoral en algo más amplio que una autorización temporal y limitada.

12.15. La Constituyente como legitimidad superior

La Constituyente venezolana de 1999 fue aprobada por votación popular y produjo una nueva Constitución con derechos y mecanismos participativos. Al mismo tiempo, actuó como acelerador de la reorganización institucional alrededor del proyecto chavista.

Petro ha defendido que el pueblo puede constituirse “sin permiso” y ha presentado una Asamblea como salida frente al bloqueo de las reformas.

La diferencia es decisiva: en Colombia la Asamblea no fue convocada, se reconoció una ruta formal y la iniciativa quedó suspendida. Existe semejanza en la teoría del poder; no equivalencia en la realización.

12.16. El contrapeso como residuo del orden anterior

En la trayectoria chavista, el Congreso, la justicia, el árbitro electoral y los medios fueron perdiendo autonomía a medida que sus límites eran presentados como resistencia de las élites derrotadas.

En Petro aparece la primera parte de esa lógica: decisiones adversas se convierten en bloqueo, golpe, sabotaje o ruptura del orden constitucional.

Lo que todavía separa a Colombia de Venezuela es la capacidad material del límite. Las cortes suspenden, el Congreso modifica y el Gobierno cumple. La erosión es simbólica y plebiscitaria; la captura no está demostrada.

12.17. El árbitro electoral es el umbral decisivo

Un régimen puede conservar elecciones y perder democracia. Lo decisivo es si el oficialismo puede ser derrotado, si las candidaturas pueden competir y si el resultado puede verificarse.

Venezuela mantuvo votaciones mientras reducía gradualmente la independencia del árbitro, el acceso de adversarios y la posibilidad efectiva de alternancia. La elección de 2024 mostró el extremo de ese proceso. · (Centro Carter, informe final, 17 feb. 2025)

En Colombia no se ha demostrado una captura equivalente. Las críticas de Petro al CNE o a la justicia electoral deben vigilarse, pero no sustituyen la prueba de una intervención destinada a impedir su propia derrota.

12.18. La coerción marca otra frontera fundamental

El régimen venezolano terminó combinando control institucional con fuerzas de seguridad y estructuras civiles capaces de producir temor y desmovilización.

En Colombia no existe una milicia nacional oficialista equivalente ni una política estatal sistemática de encarcelamiento de opositores.

La Primera Línea, los comités o las marchas no pueden equipararse automáticamente con colectivos armados. Sin organización, función coercitiva y vínculo estatal demostrados, hacerlo sería propaganda y no investigación.

12.19. Coincidencia no es transferencia

Mandato histórico, enemigo moral, movilización, crítica a élites y Constituyente pertenecen a repertorios políticos más amplios que el chavismo.

Para demostrar transferencia consciente sería necesario identificar diseño compartido, referencia explícita, asesoría, adaptación deliberada o vínculos funcionales concretos.

Esa prueba no existe en el corpus cerrado. La categoría rigurosa es convergencia funcional con aprendizaje posible. Petro puede haber observado una tecnología política regional sin copiarla integralmente ni buscar necesariamente el mismo desenlace.

12.20. La mejor defensa integral

Petro reconstruyó una relación bilateral indispensable, obtuvo beneficios fronterizos, exigió actas, no reconoció el resultado sin transparencia y evitó una intervención militar.

Colombia conserva una Constitución distinta, economía mixta, medios plurales, oposición competitiva, Banco de la República independiente y cortes capaces de frenar al Ejecutivo.

Sus propuestas constituyentes pueden leerse desde la tradición participativa de 1991 y no desde Caracas. La semejanza con el chavismo puede provenir del repertorio regional del populismo y no de un plan autoritario.

12.21. La mejor crítica integral

La cercanía ideológica y la utilidad estratégica redujeron el costo moral que Petro impuso a Maduro. La condena de la represión fue más débil que el énfasis en sanciones, soberanía y diálogo.

Al mismo tiempo, Petro utiliza dentro de Colombia una gramática que coincide con fases tempranas del chavismo: mandato histórico, pueblo verdadero, élites bloqueadoras, poder constituyente y sospecha sobre árbitros.

El riesgo no es una Venezuela ya reproducida. Es acostumbrar a la ciudadanía a los mecanismos iniciales mientras los contrapesos todavía consiguen contenerlos.

12.22. Lo que queda probado

Queda probado que la normalización diplomática respondió a necesidades reales y produjo beneficios materiales.

Queda probado que Colombia no reconoció el resultado venezolano sin actas y que, por tanto, no existió un respaldo electoral incondicional.

Queda probado que la reacción pública frente a la represión fue menos intensa de lo que permitía la evidencia disponible.

Queda probado que Petro distribuye contexto, personalización y condena de manera desigual según la ubicación política del responsable.

Queda probada una convergencia funcional parcial entre mecanismos de Petro y etapas iniciales del chavismo.

12.23. Lo que no queda probado

No queda probado que Petro apoyara el fraude o la represión.

No queda probada una transferencia consciente de diseño desde Caracas.

No queda probado que Colombia haya perdido alternancia, libertad de prensa o independencia judicial.

No queda probado que la Constituyente colombiana buscara prolongar el mandato presidencial.

No queda probado que toda crítica a las sanciones tenga una finalidad de absolución política.

No queda probado que Colombia sea una Venezuela en fase terminal.

12.24. Conclusión graduada: indulgencia ideológica selectiva

La relación de Petro con Venezuela no puede describirse honestamente como subordinación a Maduro. Es una política pragmática, con beneficios reales y con algunos límites democráticos expresos.

Pero tampoco puede reducirse a diplomacia neutral. La diferencia de intensidad moral, la administración de la causalidad y la prudencia selectiva muestran una indulgencia ideológica de fuerza considerable.

En el plano interno, Petro comparte con la fase temprana del chavismo una gramática de poder: la elección como mandato histórico, el pueblo como legitimidad superior, el límite como bloqueo y el constituyente como vía de superación.

12.25. Por qué el espejo ya importa

Durante años, Venezuela fue utilizada como caricatura para impedir toda reforma. Este capítulo rechaza esa caricatura.

Pero la experiencia venezolana contiene una lección que no desaparece porque haya sido usada de manera abusiva: la democracia puede vaciarse gradualmente mientras conserva elecciones, lenguaje popular y procedimientos formales.

La comparación se vuelve legítima cuando no afirma identidad, sino dirección; cuando registra diferencias con la misma precisión que semejanzas; y cuando ubica el umbral decisivo en la posibilidad real de perder y entregar el poder.

La formulación más precisa es esta: pragmatismo diplomático con indulgencia ideológica selectiva y convergencia funcional con el chavismo temprano. El hallazgo fortalece la dimensión geopolítica del mínimo discriminante, pero no demuestra subordinación a Maduro, transferencia consciente ni venezolanización consumada.

12.26. Límites de la conclusión

- No se confunden relaciones diplomáticas con reconocimiento electoral.
- No se atribuye a Petro responsabilidad por la represión venezolana.
- No se convierte afinidad ideológica en prueba de coordinación.
- No se equipara una Constituyente propuesta con la experiencia venezolana consumada.
- No se ignoran los beneficios materiales de la normalización.
- No se omiten las exigencias colombianas sobre actas y presos políticos.
- La hipótesis depende de convergencia, dirección, repetición y efectos observables sobre la alternancia.

PARTE III. DEL CASO A LA CLASIFICACIÓN

CAPÍTULO 13. LA CONVERGENCIA: CINCO DIMENSIONES Y CATORCE COMPONENTES

Convergencia, escalamiento, límites y fuerza probatoria

Cambio de escala. Los ocho capítulos han respondido preguntas particulares y conservado sus propias contrapruebas. La matriz no incorpora un noveno conjunto de hechos ni suma mecánicamente episodios: examina si los hallazgos son independientes, recurrentes, funcionalmente compatibles, escalables y orientados en una misma dirección; y también determina en qué medida la alternancia, la ausencia de coerción sistemática y la eficacia de los contrapesos limitan el alcance de la conclusión.

13.1. Objetivo de la matriz

Los ocho capítulos probatorios respondieron preguntas específicas. Este capítulo examina qué figura política aparece cuando sus hallazgos se observan en conjunto.

La prueba acumulativa no convierte ocho indicios débiles en una conclusión fuerte. Solo existe acumulación válida cuando los hallazgos son suficientemente independientes, recurrentes, funcionalmente compatibles y orientados en una dirección común, y cuando las contrapruebas se incorporan al balance.

13.2. Regla de acumulación

1. Un episodio aislado genera una hipótesis.
2. La repetición permite identificar un patrón.
3. La convergencia entre ámbitos distintos aumenta la fuerza explicativa.
4. El escalamiento muestra si el patrón pasa del discurso a la institución.
5. Los efectos sobre alternancia y coerción determinan la gravedad institucional.
6. Las contrapruebas limitan la conclusión y evitan convertir trayectoria en destino.

FIGURA 3
LAS CINCO DIMENSIONES CONVERGENTES

Arquitectura analítica de los mecanismos fascistizantes

Los catorce componentes observables se agrupan en cinco dimensiones.
Su valor depende de la convergencia, no de una suma de casillas.

1

DIMENSIÓN REFUNDACIONAL Y REDENTORA

La crisis se presenta como agotamiento del orden y como apertura de una misión histórica.

●
**Crisis
terminal**

●
**Ruptura
histórica**

●
**Promesa de
regeneración**

2

DIMENSIÓN MORAL Y EXCLUYENTE

La sociedad se divide entre un pueblo auténtico y actores degradados o convertidos en enemigos.

●
**Pueblo
auténtico**

●
**Enemigo
colectivo**

●
**Expulsión
simbólica**

●
**Culpa
asimétrica**

3

DIMENSIÓN PLEBISCITARIA Y PERSONALISTA

El líder reclama una relación directa con el pueblo y una autoridad superior para interpretar su voluntad.

●
**Identificación
líder-pueblo**

●
**Calle como
totalidad**

●
**Soberanía electoral
reinterpretada**

4

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y EXCEPCIONAL

Los contrapesos y procedimientos pueden presentarse como bloqueos que justifican vías extraordinarias.

●
**Degradación de
contrapesos**

●
**Atajos
extraordinarios**

●
**Politización de
autonomías**

5

DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA Y GEOPOLÍTICA

La realidad, la causalidad y la condena política se ordenan de manera asimétrica según la afinidad.

●
**Selección
de datos**

●
**Causalidades
asimétricas**

●
**Indulgencia frente a
autoritarismos aliados**

CRITERIO DE CONVERGENCIA

La clasificación depende de la presencia conjunta de varias dimensiones,
su persistencia, su escalamiento frente a los límites y la insuficiencia de explicaciones rivales.
No hay suma mecánica: un episodio aislado puede ser populismo, polarización, abuso retórico o mal gobierno.

Las dimensiones no son exclusivas del fascismo; el calificador surge de su arquitectura conjunta.

Figura 3. Las cinco dimensiones convergentes. Elaboración propia.

13.3. Los ocho hallazgos centrales

Cap.	Objeto	Hallazgo central	Fuerza	Contraprueba principal	Riesgo	Categoría
5	Enemigo moral	Etiquetamiento recurrente y división pueblo/élite	Alta	No toda polarización es fascismo	Exclusión moral	Populismo moral
6	Contrapesos	El límite adverso se convierte en bloqueo o conspiración	Alta	Cortes y órganos siguen operativos	Erosión de legitimidad	Autocratización discursiva
7	Calle	Movilización oficialista como voz superior del pueblo	Media-alta	Sin milicia ni coerción equivalente	Presión plebiscitaria	Populismo movilizador
8	Administración	Politización selectiva y reducción posible de autonomía técnica	Media-alta	No hay colonización total	Lealtad sobre independencia	Patronazgo selectivo
9	Realidad	Datos verdaderos ordenados mediante causalidad y selección asimétricas	Alta	No existe mentira total ni constante	Cierre epistemológico	Producción política de realidad
10	Corrupción	Responsabilidad y culpa distribuidas según pertenencia	Alta	No se probó dirección criminal de Petro	Impunidad moral selectiva	Doble estándar
11	Mandato	Pueblo, urgencia y constituyente para superar límites	Muy alta	Contención judicial y legislativa efectiva	Jerarquía plebiscitaria	Tendencia autocratizante
12	Venezuela	Indulgencia selectiva y convergencia funcional con chavismo temprano	Alta	No hay transferencia ni venezolanización	Aprendizaje posible	Comparación de trayectoria

13.4. La secuencia acumulativa

Los hallazgos pueden ordenarse como una cadena de transformación del conflicto político:

- 1. Crisis:** el orden vigente es descrito como agotado, injusto o capturado.
- 2. División moral:** el pueblo auténtico se separa de élites, corruptos, fascistas o enemigos de la vida.
- 3. Mandato histórico:** la victoria electoral se interpreta como autorización para realizar una transformación superior.

- 4. Bloqueo:** la negativa o demora institucional deja de ser desacuerdo legítimo y se convierte en obstáculo contra el pueblo.
- 5. Movilización:** la calle y la participación directa son invocadas para corregir o presionar a los intermediarios.
- 6. Sustitución funcional:** consulta, decreto, emergencia o constituyente buscan superar el límite ordinario.
- 7. Alineación:** la autonomía técnica y administrativa puede subordinarse a la confianza política.
- 8. Realidad administrada:** los datos y la culpa se ordenan para sostener la superioridad moral del proyecto.
- 9. Normalización del excepcionalismo:** cada contención se convierte en argumento para reclamar más poder.

13.5. De la retórica a la institución

Nivel	Manifestación	Capítulos	Efecto	Fuerza acumulativa	Estado
Retórico	Enemigo, fascismo, golpe, pueblo	5, 6, 12	Polarización moral	Alta	Demostrado
Epistemológico	Selección de datos y causalidad	9, 10, 12	Control del marco interpretativo	Alta	Demostrado parcialmente
Movilizador	Calle, comités y poder directo	7, 11	Presión sobre intermediarios	Media-alta	Demostrado
Administrativo	Lealtad, reemplazos e intervenciones	8, 10	Menor autonomía	Media	Selectivo
Normativo	Decreto, consulta, emergencia	11	Ampliación del Ejecutivo	Muy alta	Intentada y contenida
Constituyente	Legitimidad superior del pueblo	11, 12	Posible reordenamiento del sistema	Alta	No consumado
Electoral	Control de árbitro o cierre de alternancia	12	Permanencia en poder	Baja en Colombia	No demostrado
Coercitivo	Guardias populares y eventual coerción paralela	7, 18	Tensión sobre el monopolio estatal de la fuerza	Baja-media	Aproximación discursiva poscierre; sin estructura material demostrada

13.6. Convergencias de máxima relevancia

13.6.1. *Pueblo y líder*

Los capítulos 5, 7, 11 y 12 convergen en una idea: el presidente no aparece solo como titular temporal del Ejecutivo, sino como intérprete privilegiado del mandato popular.

La calle, la consulta y el constituyente adquieren valor cuando confirman esa interpretación; los intermediarios pierden legitimidad cuando la contradicen.

13.6.2. *El límite como agresión*

Los capítulos 6 y 11 muestran que Congreso, cortes, órganos de control y procedimientos pueden ser descritos como bloqueo, golpe o ruptura.

El hallazgo no es la existencia de crítica institucional, sino la transformación del desacuerdo en amenaza contra el pueblo o contra la democracia.

13.6.3. *La culpa según pertenencia*

Los capítulos 9, 10 y 12 muestran una administración asimétrica de causalidad y responsabilidad.

Para el cercano existen contexto, estructura, sanciones, herencias y presunción; para el adversario aparecen voluntad, culpa personal y conclusión moral rápida.

13.6.4. *El poder constituyente como solución superior*

Los capítulos 11 y 12 conectan la frustración institucional con una fuente alternativa de legitimidad.

La Constituyente no aparece solo como mecanismo jurídico, sino como respuesta a la incapacidad de los poderes constituidos para realizar el mandato.

13.6.5. *Legitimidad coercitiva, Estado y actor extrainstitucional*

El capítulo 7 agrega una convergencia especialmente sensible: la legitimidad del aparato coercitivo estatal y la de actores violentos extrainstitucionales no se distribuye siempre de manera simétrica. La Fuerza Pública puede ser examinada como estructura que requiere reforma o depuración, mientras determinados actores criminales reciben reconocimiento como interlocutores de paz y visibilidad pública.

Ninguna de esas decisiones es fascistizante por sí sola. El peso aparece al converger con la división moral, la soberanía selectiva y la legitimidad superior atribuida a la misión. El corpus no demuestra control criminal de nombramientos ni una milicia oficialista; por eso el hallazgo aumenta la densidad de la dimensión institucional-excepcional sin cruzar el umbral de coerción organizada.

13.7. Independencia de los hallazgos

La fuerza del conjunto aumenta porque los patrones no proceden de un único tipo de evidencia.

- El etiquetamiento moral proviene principalmente de discursos.
- La tensión con contrapesos aparece en decisiones y reacciones institucionales.
- La movilización y la legitimidad coercitiva se observan en convocatorias, marchas, gestores de paz, trato a la Fuerza Pública y formas de reconocimiento de actores extrainstitucionales.
- La politización administrativa se estudia mediante nombramientos, intervenciones y reemplazos.
- La producción de realidad se identifica en cifras y marcos causales.
- La corrupción se analiza a partir de procesos, controles y responsabilidades.
- La lógica plebiscitaria se observa en decretos, emergencias y propuestas constituyentes.
- La comparación venezolana agrega una trayectoria externa y una prueba de simetría.

13.8. La hipótesis rival más fuerte: populismo democrático

Una explicación alternativa sostiene que Petro es un populista democrático de izquierda que usa lenguaje confrontacional, movilización y participación para impulsar reformas dentro de una Constitución resistente.

Según esta lectura, la polarización expresa un conflicto social real; la crítica a cortes y Congreso forma parte de la libertad política; la consulta y la Constituyente son mecanismos constitucionales; y la continuidad de los contrapesos demuestra que no existe proyecto autoritario.

13.9. Lo que la hipótesis populista explica bien

- El apoyo electoral auténtico y la existencia de demandas sociales reales.
- La centralidad de reformas redistributivas y de inclusión.
- El uso de movilización como mecanismo democrático.
- La apelación al constituyente dentro de la tradición de 1991.
- La aceptación material de fallos y decisiones adversas.
- La ausencia de cierre electoral, censura total o coerción sistemática.

13.10. Lo que la hipótesis populista explica peor

- La repetición de golpe, fascismo y conspiración frente a límites heterogéneos.
- La convocatoria ejecutiva de una consulta después de una negativa legislativa.
- El uso reiterado de excepcionalidad frente a problemas estructurales.

- La distribución asimétrica de culpa y presunción.
- La idea de pueblo constituyente superior a los procedimientos.
- La distribución selectiva de legitimidad entre Fuerza Pública y actores extrainstitucionales en el expediente de paz.
- La convergencia entre retórica, administración y expansión normativa.

13.11. La hipótesis rival más fuerte: presidencialismo conflictivo

Otra explicación sostiene que el caso pertenece a la tradición colombiana de presidentes fuertes, confrontaciones con cortes, reformas ambiciosas y uso intensivo de facultades.

La comparación histórica muestra que Uribe, Santos y Duque también usaron referendos, plebiscitos, emergencias y discursos polarizantes.

La diferencia de Petro no está en inventar cada instrumento, sino en la convergencia de varios dentro de una teoría plebiscitaria del mandato.

13.12. Qué distingue una tendencia autocratizante

La autocratización no requiere que el líder haya abolido ya la democracia. Se refiere a una dirección acumulativa de debilitamiento de límites, árbitros y alternancia.

Criterio	Evidencia actual	Fuerza	Contraprueba	Balance
Deslegitimación de árbitros	Recurrente	Alta	Siguen operativos	Tendencia
Expansión ejecutiva	Consulta y emergencias	Muy alta	Anuladas o contenidas	Intento
Sustitución de intermediarios	Calle y constituyente	Alta	Procedimiento formal reconocido	Parcial
Politización institucional	Selectiva	Media-alta	No colonización total	Parcial
Control informativo	Marco narrativo y ataques	Media	Medios plurales	No captura
Ventaja electoral	No demostrada	Baja	Competencia vigente	No
Represión	No sistemática	Muy baja	Oposición activa	No
Permanencia personal	No acreditada	Muy baja	Sin reelección	No

13.13. Por qué todavía no puede hablarse de régimen autoritario

- El Congreso conserva capacidad de aprobar, modificar y negar.
- Las cortes suspenden y anulan decisiones del Ejecutivo.
- La prensa investiga y critica al Gobierno.
- La oposición compite y gobierna territorios.

- No existe política general de encarcelamiento de opositores.
- No se ha demostrado captura del árbitro electoral.
- No existe extensión del mandato presidencial.
- El Gobierno ha cumplido materialmente decisiones adversas relevantes.

13.14. Por qué la ausencia de consolidación no elimina la trayectoria

Una democracia resistente puede contener repetidamente conductas expansivas. Su fracaso no vuelve democráticamente neutras esas conductas ni la dirección observable, pero tampoco autoriza a atribuir una intención interna no demostrada. Tampoco demuestra que toda contención sea una batalla contra una dictadura. La categoría precisa es una tendencia plebiscitaria y autocratizante dentro de un sistema que todavía conserva defensas efectivas.

13.15. Relación con el calificador fascistizante

Los ocho capítulos no prueban fascismo histórico ni un régimen fascista contemporáneo consolidado.

Sí identifican mecanismos que, al converger, justifican un calificador fascistizante restringido: misión refundacional, enemigo moral, fusión plebiscitaria entre líder y pueblo, excepcionalidad frente al límite y ordenamiento político de la realidad, la responsabilidad y la afinidad geopolítica.

El expediente coercitivo refuerza esa convergencia al mostrar que la disputa por legitimidad puede alcanzar también la frontera entre institución estatal, interlocutor armado y misión política, aunque no pruebe una fuerza paralela ni subordinación criminal del Estado.

Faltan, sin embargo, elementos constitutivos del fascismo histórico: ultranacionalismo palingenésico dominante, comunidad orgánica nacional-racial, partido-milicia, violencia política organizada como método central, partido-Estado y eliminación de la competencia electoral.

13.16. Comparación preliminar de categorías

Categoría	Enemigo moral	Plebiscitarismo	Contrapesos	Alternancia	Coerción	Ajuste actual
Populismo	Frecuente	Central	Tensión	Puede conservarse	No necesaria	Muy alto
Democracia iliberal	Posible	Alta	Debilitados	Formal	Variable	Medio
Autocratización electoral	Alta	Alta	Erosionados	En riesgo	Selectiva	Alto como tendencia
Cesarismo plebiscitario	Alta	Muy alta	Subordinados al líder	Dependiente	Variable	Alto

Categoría	Enemigo moral	Plebiscitarismo	Contrapesos	Alternancia	Coerción	Ajuste actual
Fascismo histórico	Máxima	Movilización total	Destruídos	Eliminada	Central	Bajo
Mecanismos fascistizantes	Alta	Alta	Deslegitimados	Amenazada	Puede ser tardía	Moderado-alto como calificador

13.17. Clasificación acumulativa vigente

La clasificación anidada que mejor describe el conjunto es:

Populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa; liderazgo cesarista como forma; tendencia autocratizante como dirección; y presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido, dentro de una democracia cuyos contrapesos continúan siendo efectivos.

13.18. Fuerza y límites de esa clasificación

Componente	Fuerza	Qué lo sostiene	Qué lo limita	Estado
Populismo	Muy alta	Pueblo/élite, liderazgo y movilización	No elimina democracia	Demostrado
Plebiscitarismo	Muy alta	Calle, consulta y constituyente	Contención formal	Demostrado
Autocratización	Alta	Erosión y expansión ejecutiva	Sin captura ni cierre	Tendencia
Mecanismos fascistizantes	Moderada-alta	Enemigo, crisis y legitimidad superior	Sin coerción ni totalización	Calificador restringido
Régimen autoritario	Baja	Algunos intentos expansivos	Instituciones operativas	No
Fascismo consolidado	Muy baja	Coincidencias funcionales limitadas	Faltan elementos esenciales	No

13.19. Criterios resumidos de cambio del diagnóstico

13.19.1. Hechos que debilitarían la hipótesis

La hipótesis se debilitaría si el proyecto acepta de modo inequívoco la alternancia, respeta fallos y árbitros adversos, fortalece la independencia técnica y electoral, aplica estándares simétricos de culpa y evidencia y abandona la excepcionalidad para problemas ordinarios.

13.19.2. Hechos que la fortalecerían

Se fortalecería con alteración de reglas electorales, desconocimiento de una derrota, captura del árbitro, prolongación del mandato, constituyente al servicio del

poder en curso, incumplimiento material de fallos o coerción contra medios y oposición. El capítulo 17 desarrolla estos umbrales.

13.20. Qué queda probado por acumulación

- Existe una gramática política coherente en distintos ámbitos.
- El adversario es moralizado con frecuencia.
- Los límites institucionales pueden ser reinterpretados como agresión.
- El pueblo directo es invocado como legitimidad superior.
- El Ejecutivo ha intentado ampliar su capacidad mediante vías extraordinarias.
- La culpa y la evidencia se distribuyen de manera asimétrica.
- Existe una distribución selectiva de legitimidad en el campo coercitivo, sin prueba de una fuerza armada oficialista paralela.
- La dirección general es plebiscitaria y autocratizante.
- La contención constitucional continúa siendo efectiva.

13.21. Qué no queda probado por acumulación

- Que Petro haya diseñado un plan secreto de dictadura.
- Que todos los episodios respondan a una coordinación central.
- Que la oposición haya sido eliminada.
- Que las elecciones hayan dejado de ser competitivas.
- Que exista coerción sistemática o milicia oficialista.
- Que Colombia sea una democracia autoritaria consolidada.
- Que Petro reproduzca integralmente el chavismo.
- Que el fascismo sea ya la categoría única o definitiva.

13.22. Del patrón a la comparación conceptual

El capítulo siguiente somete esta clasificación a una comparación sistemática entre populismo, cesarismo plebiscitario, democracia iliberal, autocratización electoral, mecanismos fascistizantes y fascismo histórico.

El objetivo no es escoger la palabra más impactante, sino determinar qué categoría explica cada nivel del fenómeno con menos supuestos y cómo pueden coexistir sin confundirse.

13.23. Conclusión de la matriz

Los ocho capítulos forman una figura coherente. No se trata únicamente de un presidente confrontacional ni de una colección de excesos verbales.

Aparece una concepción del poder en la que el mandato electoral adquiere densidad histórica, el líder interpreta al pueblo, el adversario puede convertirse en

amenaza moral, el límite institucional en bloqueo y la participación directa en legitimidad superior.

Esa concepción se proyecta sobre la calle, la administración, los datos, la corrupción, los decretos, las emergencias y la política exterior.

El balance confirma una base populista plebiscitaria, una forma cesarista y una dirección autocratizante contenida; el calificador fascistizante permanece restringido por las ausencias constitutivas del fascismo histórico y la eficacia de los contrapesos. El capítulo siguiente compara sistemáticamente esas capas.

CAPÍTULO 14. CÓMO LLAMAR AL FENÓMENO: COMPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ANIDADA

Populismo, cesarismo plebiscitario, democracia iliberal, autocratización electoral y mecanismos fascistizantes

De la convergencia a la clasificación. La matriz respondió si existe un patrón acumulativo. El capítulo siguiente plantea una pregunta distinta: qué categorías —populismo, cesarismo, democracia iliberal, autocratización o mecanismos fascistizantes— explican mejor ese patrón sin forzar la evidencia.

14.1. Pregunta central

¿Qué combinación de categorías describe mejor el conjunto de hallazgos sobre Gustavo Petro sin confundir base explicativa, forma del liderazgo, dirección institucional, calificador fascistizante y estado actual del régimen?

14.2. Principio de parsimonia conceptual

Una categoría es útil cuando explica el mayor número de hechos relevantes sin forzar la evidencia ni ignorar contrapruebas.

La clasificación debe ser anidada y graduada. Un dirigente puede tener una base populista, ejercer un liderazgo cesarista y mostrar una dirección autocratizante; el calificador fascistizante solo se añade si convergen las cinco dimensiones del mínimo discriminante, sin convertirlas en identidad histórica plena.

14.3. Categorías analizadas

Categoría	Núcleo	Relación con el pueblo	Relación con límites	Alternancia	Coerción
Populismo	Pueblo puro frente a élite corrupta	Representación moral directa	Sospecha de intermediarios	Puede conservarse	No necesaria
Cesarismo plebiscitario	Líder como encarnación del mandato	Aclamación y vínculo directo	Contrapesos subordinados al liderazgo	Puede existir, pero debilitada	Variable
Democracia iliberal	Elecciones con derechos y controles debilitados	Mayoría sobre liberalismo	Límites reducidos	Formal, menos equilibrada	Selectiva
Autocratización electoral	Erosión gradual desde dentro	Legitimidad electoral usada para concentrar	Árbitros y controles erosionados	En riesgo progresivo	Puede aparecer tarde
Mecanismos fascistizantes	Crisis, enemigo, líder, movilización y redención	Unidad moral del pueblo	Pluralismo visto como decadencia o traición	Amenazada	Puede escalar
Fascismo consolidado	Estado totalizante, violencia, nacionalismo extremo	Fusión pueblo-líder-nación	Destrucción de límites	Eliminada	Central y organizada

14.4. Populismo

14.4.1. *Qué explica bien*

- La división moral entre pueblo y élites.
- La centralidad del liderazgo personal.
- La apelación a la voluntad popular directa.
- La sospecha frente a intermediarios, expertos y contrapesos.
- La movilización como fuente de legitimidad.
- La presentación del conflicto como lucha entre mayoría auténtica y minoría corrupta.

14.4.2. *Qué no explica por sí solo*

- La expansión ejecutiva mediante consulta o emergencia.
- La repetición de acusaciones de golpe frente a controles diversos.
- La erosión institucional sostenida.
- El intento de sustituir procedimientos cuando niegan el resultado esperado.
- La posibilidad de reducir alternancia.

14.4.3. *Aplicación al caso Petro*

El ajuste es muy alto. La estructura pueblo/élite, la moralización del adversario, la centralidad del líder y la apelación directa a la calle aparecen de manera recurrente.

Sin embargo, el populismo es una categoría demasiado amplia para explicar por sí sola el uso expansivo de mecanismos ejecutivos y la deslegitimación repetida de límites.

14.5. Cesarismo plebiscitario

14.5.1. *Núcleo del concepto*

El cesarismo plebiscitario describe un liderazgo que busca legitimidad directa en el pueblo, presenta al jefe como intérprete privilegiado del mandato y reduce el valor de intermediarios.

No requiere necesariamente partido único ni abolición inmediata de elecciones. Su rasgo distintivo es la superioridad política del vínculo líder-pueblo frente a procedimientos y cuerpos representativos.

14.5.2. *Evidencia compatible*

- Consulta directa cuando el Congreso niega.
- Movilización oficialista como corrección del procedimiento.
- Poder constituyente invocado frente a poderes constituidos.
- Presentación del mandato como autorización histórica.
- Deslegitimación del límite sin incumplirlo siempre materialmente.

- Personalización intensa de la transformación.

14.5.3. Límite

El cesarismo describe bien la relación entre líder, pueblo y procedimiento, pero no necesariamente explica la construcción sistemática del enemigo, la producción política de la realidad o la administración selectiva de culpa.

En el caso Petro funciona mejor como dimensión del liderazgo que como clasificación completa.

14.6. Democracia iliberal

14.6.1. Núcleo del concepto

La democracia iliberal conserva elecciones, pero debilita libertades, controles, autonomía judicial, prensa y derechos de minorías.

La mayoría electoral se presenta como fuente suficiente de legitimidad, incluso cuando reduce los límites liberales al poder.

14.6.2. Evidencia compatible

- Tensión con cortes y organismos de control.
- Deslegitimación de medios y periodistas.
- Preferencia por mandato mayoritario sobre autonomía técnica.
- Uso de herramientas extraordinarias.
- Retórica que reduce pluralismo moral.

14.6.3. Límite

Colombia conserva medios críticos, oposición fuerte, cortes efectivas y competencia electoral. Por eso la democracia iliberal describe mejor un riesgo o dirección que el estado consolidado del sistema.

14.7. Autocratización electoral

14.7.1. Núcleo del concepto

La autocratización electoral es un proceso, no un régimen terminado. Ocurre cuando un gobierno elegido erosiona gradualmente reglas, árbitros, libertades y capacidad de alternancia.

La categoría permite analizar intentos fallidos, avances parciales y contención institucional.

14.7.2. Evidencia compatible

- Expansión ejecutiva después de una negativa legislativa.
- Uso reiterado de estados de excepción.

- Deslegitimación discursiva de cortes y Congreso.
- Apelación a legitimidad superior del pueblo.
- Politización selectiva de administración y controles.
- Tendencia a convertir desacuerdo en conspiración.

14.7.3. Contrapruebas

- Las cortes anulan y suspenden actos.
- El Congreso conserva capacidad de decisión.
- El Gobierno cumple materialmente fallos relevantes.
- No existe captura electoral acreditada.
- No hay prolongación de mandato.
- La oposición compite y conserva poder territorial.

14.7.4. Aplicación al caso Petro

Es la categoría procesual más útil para describir la dirección del conjunto. Permite afirmar tendencia sin confundirla con consolidación.

14.8. Mecanismos fascistizantes

14.8.1. Qué significa aquí

No se utiliza como sinónimo de dictadura ni como insulto. Designa un repertorio funcional en el que convergen misión refundacional, exclusión moral, personalización plebiscitaria, excepcionalidad institucional y ordenamiento político de la realidad y de las afinidades geopolíticas.

14.8.2. Las cinco dimensiones convergentes

- Dimensión refundacional y redentora: crisis terminal, ruptura histórica y promesa de regeneración.
- Dimensión moral y excluyente: pueblo auténtico, enemigo colectivo y expulsión simbólica del contradictor.
- Dimensión plebiscitaria y personalista: identificación entre líder, pueblo y sentido de la historia.
- Dimensión institucional y excepcional: presión sobre contrapesos, búsqueda de vías superiores al procedimiento, soberanía paralela y distribución selectiva de legitimidad coercitiva.
- Dimensión epistemológica y geopolítica: realidad políticamente ordenada, causalidad asimétrica, administración de la culpa e indulgencia selectiva frente a autoritarismos cercanos.
- Los catorce componentes son manifestaciones distribuidas dentro de esas cinco dimensiones, no catorce pruebas independientes.

- Su fuerza depende de la convergencia, la persistencia, el escalamiento y la insuficiencia de las explicaciones rivales, no de una suma mecánica.

14.8.3. Ausencias constitutivas del fascismo histórico

- Ultranacionalismo palingenésico dominante.
- Concepción orgánica o racial de la nación.
- Partido-milicia.
- Violencia política organizada como método central.
- Partido-Estado.
- Eliminación de la competencia electoral.
- Estas ausencias son constitutivas: impiden clasificar a Petro como fascista histórico o jefe de un régimen fascista.

14.8.4. Aplicación al caso Petro

El calificador aporta capacidad explicativa cuando las cinco dimensiones convergen y el populismo o la autocratización, tomados aisladamente, no describen el patrón completo; no describe por sí mismo un régimen.

La formulación rigurosa es presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido, no fascismo histórico, neofascismo ni régimen fascista consolidado.

14.9. Fascismo histórico

El fascismo histórico implicó movilización total, partido-milicia, culto nacional, violencia sistemática, destrucción del pluralismo, expansión estatal y eliminación de alternancia.

El caso Petro no cumple esos elementos esenciales. Utilizar la categoría como diagnóstico total produciría más confusión que precisión.

14.10. Comparación por dimensiones

Dimensión	Populismo	Cesarismo	Democracia iliberal	Autocratización	Mecanismos fascistizantes	Fascismo	Petro
Pueblo/élite	Central	Alta	Media	Frecuente	Central	Central	Muy alta
Líder excepcional	Alta	Central	Variable	Frecuente	Central	Central	Alta
Contrapesos	Sospecha	Subordinados	Debilitados	Erosionados	Deslegitimados	Destruídos	Erosión con contención
Elecciones	Compatibles	Plebiscitarias	Conservadas	Manipuladas	Instrumentales	Eliminadas o vaciadas	Competitivas
Enemigo moral	Frecuente	Posible	Variable	Alta	Central	Máxima	Alta
Movilización	Alta	Aclamativa	Variable	Instrumental	Central	Total	Alta

Dimensión	Populismo	Cesarismo	Democracia iliberal	Autocratización	Mecanismos fascizantes	Fascismo	Petro
Coerción	No necesaria	Variable	Selectiva	Creciente	Puede escalar	Central	No sistemática
Alternancia	Posible	Debilitada	Formal	En riesgo	Amenazada	Eliminada	Aún real

14.11. Qué categoría explica mejor cada expediente

Capítulo	Populismo	Cesarismo	Democracia iliberal	Autocratización	Mecanismos fascizantes
5. Enemigo moral	Muy alto	Medio	Medio	Medio	Muy alto
6. Contrapesos	Alto	Alto	Alto	Muy alto	Alto
7. Movilización y legitimidad coercitiva	Muy alto	Muy alto	Medio	Alto	Muy alto
8. Administración	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
9. Realidad	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto
10. Corrupción	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio
11. Mandato/constituyente	Muy alto	Muy alto	Alto	Muy alto	Alto
12. Venezuela	Alto	Alto	Alto	Muy alto	Alto

14.12. Clasificación por capas

La evidencia se organiza mejor mediante capas, no mediante una etiqueta única:

Capa 1 - base explicativa: populismo plebiscitario de izquierda.

Capa 2 - forma del liderazgo: cesarismo, entendido como vínculo directo entre líder y pueblo por encima de intermediarios.

Capa 3 - dirección institucional: tendencia autocratizante, expresada en expansión ejecutiva y erosión de límites.

Capa 4 - calificador secundario: presencia extensa de mecanismos fascizantes, válida solo por la convergencia de cinco dimensiones.

Límite del diagnóstico: contrapesos efectivos, pluralismo y competencia electoral todavía operativos.

14.13. La categoría más parsimoniosa

La fórmula que explica más evidencia sin afirmar hechos no demostrados es:

Populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa; liderazgo cesarista como forma; tendencia autocratizante como dirección; y presencia extensa de mecanismos fascizantes como calificador secundario restringido, contenido todavía por instituciones democráticas efectivas.

14.14. Por qué no basta decir 'populismo'

La palabra populismo explica el lenguaje moral y la apelación al pueblo, pero subestima los intentos concretos de ampliar poder ejecutivo y sustituir límites.

Además, no captura completamente la relación entre enemigo, golpe, constituyente y administración selectiva de la realidad.

14.15. Por qué no basta decir 'fascismo'

La palabra fascismo sobredimensiona el grado de coerción, captura y totalización.

Ignora que Colombia mantiene competencia electoral, pluralismo, oposición, prensa y cortes efectivas.

La categoría puede conservarse como lógica parcial o riesgo de trayectoria, no como descripción total del régimen.

14.16. Por qué autocratización es la categoría procesual central

Autocratización permite describir una dirección sin suponer desenlace. Integra intentos de expansión, erosión discursiva, politización selectiva y presión plebiscitaria.

También incorpora las derrotas del Ejecutivo y la resistencia institucional como parte del análisis, en vez de tratarlas como refutación automática.

14.17. El papel del cesarismo

El cesarismo explica la estructura del liderazgo: Petro no solo representa un programa; se presenta como intérprete de una voluntad histórica que puede preceder o superar al procedimiento.

La categoría ayuda a comprender por qué la consulta, la calle y el constituyente adquieren valor cuando el Congreso o las cortes limitan el proyecto.

14.18. La función del calificador fascistizante

El calificador fascistizante explica la convergencia entre misión redentora, exclusión moral, fusión líder-pueblo, excepcionalidad y cierre epistemológico-geopolítico.

No debe utilizarse para negar diferencias constitutivas con el fascismo histórico, sino para identificar mecanismos funcionales que pueden aparecer dentro de movimientos de genealogías ideológicas distintas.

14.19. Umbrales de cambio de categoría

Umbral	De	Hacia	Hecho decisivo	Estado actual
1	Populismo	Cesarismo	Líder como intérprete superior del mandato	Parcialmente superado
2	Cesarismo	Autocratización	Erosión o sustitución de límites	En curso/tendencia
3	Autocratización	Democracia iliberal	Debilitamiento estable de libertades y controles	No consolidado
4	Democracia iliberal	Autoritarismo electoral	Alternancia materialmente improbable	No
5	Mecanismos fascistizantes	Fascismo histórico/pleno	Incorporación de elementos constitutivos: ultranacionalismo, partido-milicia, violencia, partido-Estado y eliminación electoral	No; no es una simple escala de intensidad



Figura 4. Trayectoria institucional y densidad fascistizante. Elaboración propia.

14.20. Evidencia que cambiaría el diagnóstico

14.20.1. Hacia una clasificación más grave

El diagnóstico se agravaría ante el escalamiento material del desconocimiento de una derrota —por ejemplo, mediante obstrucción efectiva de la alternancia—, captura del árbitro, prolongación del poder por vía constituyente, persecución sistemática de medios u oposición, incumplimiento de fallos o coerción organizada.

14.20.2. Hacia una clasificación más democrática

Se volvería más democrático con aceptación inequívoca de la alternancia, respeto material y simbólico de fallos, abandono de atajos extraordinarios, protección de prensa y autonomía técnica y reconocimiento de que el pueblo puede elegir un proyecto contrario. El capítulo 17 convierte estos criterios en predicciones observables.

14.21. Qué permite afirmar esta comparación

- Populismo es una base necesaria, pero insuficiente.
- Cesarismo describe bien la forma de liderazgo.
- Autocratización es la categoría procesual más fuerte.
- Democracia iliberal describe un riesgo, no un estado consolidado.

- El calificador fascistizante explica la convergencia de las cinco dimensiones del mínimo discriminante.
- Fascismo histórico no es una clasificación defendible del caso actual.
- Las categorías pueden coexistir en capas.

14.22. Qué no permite afirmar

- Que toda retórica populista conduzca al fascismo.
- Que Petro haya eliminado la democracia.
- Que exista un plan autoritario plenamente coordinado.
- Que el cesarismo implique necesariamente dictadura.
- Que el calificador fascistizante equivalga a fascismo histórico o régimen fascista consolidado.
- Que la contención institucional garantice que la trayectoria no avance.
- Que la clasificación sea definitiva antes de la prueba de alternancia.

14.23. Conclusión de la comparación conceptual

La comparación confirma que ninguna etiqueta única basta: populismo, cesarismo, autocratización y el calificador fascistizante describen niveles distintos del fenómeno, limitados por contrapesos todavía efectivos.

14.24. De la comparación técnica a la síntesis narrativa

La síntesis narrativa que sigue traduce la comparación técnica a una explicación continua; los capítulos 15 a 17 la someten después a defensa, crítica y falsación.

De la comparación técnica a la formulación narrativa. La síntesis no sustituye la matriz ni la comparación conceptual. Traduce sus resultados a una explicación por capas, conserva los componentes ausentes y deja abierta la alternancia como umbral decisivo.

14.25. Síntesis conceptual: ¿cómo llamar al fenómeno?

Clasificación por capas del caso Petro

14.25.1. El problema no es encontrar la palabra más fuerte

Después de ocho capítulos probatorios, la tentación más fácil sería escoger una etiqueta definitiva y obligar a toda la evidencia a caber dentro de ella.

Eso sería metodológicamente pobre. Las categorías políticas no son insultos intercambiables ni diagnósticos clínicos con una sola prueba confirmatoria. Cada una describe una dimensión distinta: quién representa al pueblo, cómo se relaciona el líder con los límites, qué ocurre con los árbitros y si la oposición puede realmente reemplazar al gobierno.

La pregunta correcta no es cuál palabra condena más a Petro, sino cuál combinación explica más hechos sin borrar las contrapruebas.

14.25.2. Lo primero que aparece es populismo

El populismo ofrece la base más evidente. Petro divide recurrentemente el campo político entre un pueblo moralmente legítimo y élites asociadas con privilegio, corrupción, neoliberalismo, violencia o fascismo.

El líder aparece como intérprete del pueblo y la política como confrontación entre una mayoría auténtica y actores que han impedido realizar sus derechos.

Esta estructura explica la movilización, el lenguaje moral, la crítica a intermediarios y la capacidad de presentar un programa de gobierno como reparación histórica.

14.25.3. Pero decir populismo ya no basta

El populismo puede coexistir con una democracia competitiva. Puede incluso ampliar participación y visibilidad de sectores antes excluidos.

Lo que los capítulos muestran va más allá del lenguaje pueblo-élite. Aparecen intentos de ampliar la capacidad del Ejecutivo cuando el procedimiento ordinario niega el resultado esperado, así como una tendencia a convertir la limitación institucional en bloqueo, conspiración o agresión contra el mandato.

El Decreto 639, el uso expansivo de emergencias, la apelación al poder constituyente y la deslegitimación selectiva de los árbitros exigen una categoría procesual adicional.

14.25.4. La forma del liderazgo es cesarista

El cesarismo plebiscitario describe una relación en la cual el líder no se presenta únicamente como administrador temporal de una mayoría, sino como intérprete privilegiado de una voluntad histórica.

El Congreso, los expertos y las cortes conservan autoridad jurídica, pero pueden perder legitimidad política cuando contradicen la lectura presidencial del mandato.

La consulta, la calle y el constituyente adquieren valor porque permiten restablecer el vínculo directo entre líder y pueblo, sin la mediación de instituciones que son descritas como deformadas por el viejo orden.

14.25.5. Cesarismo no significa todavía dictadura

Un liderazgo cesarista puede operar dentro de elecciones, partidos, Congreso y tribunales. Su rasgo principal no es haber destruido esos órganos, sino colocar el vínculo directo con el pueblo por encima de ellos en la jerarquía moral.

En Colombia, esa jerarquía todavía no se ha convertido en subordinación completa. Las cortes han frenado al Ejecutivo, el Congreso ha negado y modificado reformas y la oposición conserva capacidad efectiva.

Por eso el cesarismo describe la forma del liderazgo, pero no basta para clasificar el estado del régimen.

14.25.6. La dirección institucional es autocratizante

La autocratización es una categoría de trayectoria. No exige afirmar que la democracia ya desapareció.

Permite analizar cómo un gobierno elegido amplía progresivamente su poder, debilita árbitros, deslegitima controles y reduce la posibilidad futura de alternancia.

En el caso Petro, la evidencia más fuerte se encuentra en la dirección: consulta convocada después de una negativa legislativa, estados de excepción usados de manera expansiva, poder constituyente invocado frente al bloqueo y crítica sistemática a instituciones que limitan el programa.

14.25.7. Los fracasos del Ejecutivo también son evidencia

Una lectura superficial diría que, como las cortes suspendieron decretos y el Congreso siguió actuando, no existe ningún problema autocratizante.

Eso confunde resultado con dirección. La resistencia institucional demuestra que la democracia colombiana conserva defensas; no convierte en neutrales los intentos de superar el límite.

Al mismo tiempo, sería incorrecto tratar cada derrota del Ejecutivo como prueba de una dictadura en marcha. La formulación precisa es tendencia autocratizante contenida, no ruptura consumada.

14.25.8. *La democracia iliberal describe un riesgo, no el presente completo*

Una democracia iliberal conserva elecciones mientras debilita libertades, prensa, justicia, autonomía técnica y derechos de minorías.

Algunos rasgos del caso Petro son compatibles con esa dirección: hostilidad hacia medios, presión sobre contrapesos, politización selectiva y supremacía moral de la mayoría.

Pero Colombia todavía conserva un ecosistema mediático plural, oposición fuerte, decisiones judiciales efectivas y competencia electoral real. La categoría describe mejor un riesgo de evolución que el estado consolidado del sistema.

14.25.9. *¿Por qué conservar el calificador fascistizante?*

El fascismo histórico no es una clasificación sostenible del gobierno Petro. Faltan ultranacionalismo palingenésico dominante, comunidad nacional-racial orgánica, partido-milicia, violencia organizada como método central, partido-Estado y eliminación de la competencia electoral.

Sin embargo, sí aparece una convergencia extensa de mecanismos fascistizantes: misión refundacional, enemigo moral, fusión líder-pueblo, excepcionalidad frente al límite y ordenamiento político de la realidad, la culpa y las afinidades geopolíticas.

Conservar el calificador permite estudiar esa convergencia funcional sin afirmar que el régimen pertenece a la misma especie histórica.

14.25.10. *El enemigo es la pieza más fascistizante*

En una democracia pluralista, el adversario puede estar equivocado, defender intereses injustos o incluso cometer delitos, pero sigue siendo parte legítima de la competencia mientras respete las reglas.

La dimensión moral-excluyente adquiere función fascistizante cuando el adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en amenaza contra la vida, el pueblo, la patria o la historia.

Los capítulos muestran que fascismo, golpe, oligarquía, extrema derecha y corrupción pueden agrupar actores heterogéneos dentro de una misma categoría de ilegitimidad.

14.25.11. *La movilización no es por sí misma autoritaria*

Las marchas, los cabildos y la participación popular pertenecen a la democracia. La movilización puede corregir exclusiones y ampliar la agenda pública.

El riesgo aparece cuando la calle oficialista se presenta como expresión auténtica del pueblo y la movilización adversa como manipulación, odio o defensa de privilegios.

En ese momento, la cantidad de personas movilizadas deja de ser una forma de expresión y empieza a funcionar como argumento de superioridad frente a procedimientos representativos.

14.25.12. El dato también puede obedecer

La producción política de realidad no consiste necesariamente en inventar cifras.

Puede operar mediante datos verdaderos seleccionados en escalas favorables, categorías no equivalentes, causalidad unilateral y silencios sobre contrapruebas.

El resultado es una realidad moralmente organizada: los avances pertenecen al proyecto, los fracasos a bloqueos, herencias, sanciones o adversarios.

14.25.13. La culpa sigue la geografía política

Los capítulos sobre corrupción y Venezuela muestran una regla similar.

Para el actor cercano existe contexto, estructura, prudencia, sanciones, presunción y necesidad estratégica. Para el adversario aparecen responsabilidad personal, intención y condena rápida.

Esta asimetría no prueba que toda defensa de un aliado sea falsa. Sí muestra que el estándar de evidencia y culpa cambia según la pertenencia política.

14.25.14. Venezuela funciona como espejo de trayectoria

Comparar la Colombia actual con la Venezuela consolidada de Maduro produce una caricatura. Colombia conserva instituciones que Venezuela perdió.

La comparación útil es secuencial: crisis real, mandato refundacional, poder constituyente, deslegitimación de contrapesos, colonización gradual, ventaja electoral creciente y reducción de alternancia.

Petro coincide con algunas etapas iniciales, no con el resultado final. Esa diferencia limita la analogía, pero no vuelve irrelevante la dirección.

14.25.15. La prueba más importante todavía no ha ocurrido

El umbral decisivo no es cuántas veces el presidente critica una corte ni cuántas marchas convoca.

Es si el proyecto puede perder una elección competitiva y entregar el poder sin desconocer el resultado, alterar las reglas o convertir la derrota en una conspiración.

La alternancia no es un detalle final. Es la prueba que distingue a un populismo conflictivo de una autocratización que ha cruzado el punto de no retorno.

14.25.16. La categoría por capas

La evidencia se describe mejor por capas: base populista plebiscitaria, forma cesarista, dirección autocratizante y calificador fascistizante secundario; el límite actual sigue siendo la eficacia de contrapesos, pluralismo y competencia electoral.

14.25.17. Formulación narrativa de la clasificación

La comparación sistemática ya estableció la fórmula técnica. La síntesis debe mostrar ahora cómo se articulan sus capas en una sola descripción narrativa:

Petro articula un populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa, un liderazgo cesarista como forma y una tendencia autocratizante como dirección. La convergencia extensa de cinco dimensiones justifica el calificador fascistizante restringido, mientras la resistencia de instituciones democráticas efectivas impide clasificar el sistema como régimen autoritario o fascista consolidado.

14.25.18. Por qué no decir simplemente que Petro es fascista

Porque esa frase convierte un calificador funcional restringido en una identidad histórica total.

Ignora diferencias esenciales con el fascismo histórico y convierte una investigación graduada en una acusación que el propio libro no puede sostener.

Además, facilita una refutación demasiado fácil: basta señalar que existen elecciones, prensa y cortes para descartar todo el análisis.

14.25.19. Por qué tampoco decir simplemente que es un demócrata confrontacional

Esa fórmula reconoce correctamente que Petro fue elegido, conserva apoyo real y actúa dentro de un sistema plural.

Pero minimiza la repetición de mecanismos dirigidos a elevar el mandato presidencial sobre el procedimiento, así como la moralización del enemigo y el uso de legitimidades alternativas frente a los límites.

No todo intento autocratizante tiene éxito. La resistencia institucional no convierte al intento en una forma ordinaria de conflicto democrático.

14.25.20. Defensa resumida: la objeción que desarrolla el capítulo 15

La defensa que desarrolla el capítulo 15 sostiene que Petro impulsa reformas sobre desigualdades reales, representa sectores excluidos, utiliza mecanismos

constitucionales y ha acatado límites materiales sin cerrar el Congreso, capturar el árbitro ni construir una estructura coercitiva oficialista.

14.25.21. Crítica resumida: la tesis que desarrolla el capítulo 16

La crítica del capítulo 16 responde que, cuando el procedimiento no confirma el mandato, el límite pierde legitimidad moral y aparecen la calle, la urgencia o el constituyente como fuentes superiores, habituando a evaluar las instituciones según confirmen o no al líder.

14.25.22. Qué está probado

Quedan probados la base populista, los rasgos cesaristas, la deslegitimación recurrente de límites, la búsqueda de rutas extraordinarias, la administración asimétrica de realidad y culpa y una dirección autocratizante todavía contenida.

14.25.23. Qué no está probado

No quedan probados un régimen fascista o autoritario consolidado, la captura del árbitro, la pérdida de alternancia, una política general de represión ni un plan secreto y coordinado para destruir la democracia.

14.25.24. La conclusión depende del tiempo

La evolución del diagnóstico dependerá de la alternancia y de la conducta frente a árbitros, reglas y transición; el capítulo 17 fija de manera específica los hechos que lo debilitarían o agravarían.

14.25.25. El nombre más preciso del fenómeno

El nombre preciso es, por tanto, la clasificación por capas formulada en 14.25.17: permite reconocer el riesgo sin anunciar una dictadura consumada ni convertir la trayectoria en destino.

14.25.26. Límites de esta síntesis

Esta síntesis no convierte populismo en autoritarismo, no confunde crítica institucional con abolición, no suma indicios como pruebas equivalentes, no atribuye intenciones secretas y mantiene como límites decisivos los contrapesos efectivos y la alternancia.

CAPÍTULO 15. LA MEJOR DEFENSA Y LAS OBJECIONES DECISIVAS

Por qué esta tesis podría estar equivocada

Prueba adversarial I. Este capítulo cumple una función metodológica específica y debe leerse dentro del método explicado al comienzo del libro. Las afirmaciones que siguen no constituyen nuevas conclusiones del autor ni retractaciones parciales de la tesis. Son la reconstrucción deliberada de la defensa más fuerte que podría formularse en favor de Gustavo Petro utilizando los mismos hechos examinados en los capítulos anteriores.

El procedimiento consiste en asumir provisionalmente la interpretación alternativa más favorable al caso estudiado: que la confrontación institucional puede ser crítica democrática; que la movilización puede ser participación legítima; que la retórica polarizante puede pertenecer al populismo sin convertirse en fascismo; que la política de paz puede explicar la interlocución con actores violentos; y que la supervivencia de elecciones, cortes, prensa y oposición constituye evidencia genuina contra una clasificación autoritaria más intensa.

El propósito no es demostrar que esas explicaciones sean verdaderas por el solo hecho de formularlas aquí. Es someter la hipótesis central del libro a una prueba de resistencia. Cada objeción debe considerarse en su versión más fuerte, no como una caricatura fácilmente refutable. Si una afirmación del libro solo pudiera sobrevivir frente a una defensa débil de Petro, esa afirmación debería retirarse, reducirse o reformularse.

Regla de lectura de este capítulo. Ninguna objeción ni defensa que aparezca a continuación debe citarse aisladamente como veredicto del libro. Su significado metodológico depende de la secuencia completa: objeción, mejor defensa, contraprueba y evaluación posterior. La conclusión del ensayo solo puede establecerse después de determinar qué partes de la hipótesis sobreviven a esta prueba adversarial y cuáles quedan limitadas por ella.

15.1. Objeciones conceptuales decisivas

Objeción: El fascismo es de extrema derecha y Petro es de izquierda.

Respuesta: La clasificación histórica es correcta. La hipótesis distingue esa genealogía de una lógica de construcción del poder. Debe demostrarse que esa extensión conceptual aporta precisión y no convierte fascismo en sinónimo de autoritarismo.

Objeción: El libro llama fascismo a lo que la literatura describe suficientemente como populismo antipluralista o autocratización.

Respuesta: Por eso este libro adopta una clasificación anidada: populismo plebiscitario como base, liderazgo cesarista como forma, tendencia autocratizante

como dirección y fascistizante como calificador secundario. Este último solo se sostiene si convergen las cinco dimensiones del mínimo discriminante y aporta capacidad explicativa adicional frente a las categorías rivales.

Objeción: Sin ultranacionalismo palingenético, partido-milicia ni violencia política organizada no puede hablarse de fascismo.

Respuesta: Es correcto para una clasificación plena del fascismo histórico. El libro no la formula. Las ausencias no son detalles tardíos: delimitan la naturaleza del fenómeno. La tesis se refiere exclusivamente a mecanismos y trayectoria funcionalmente fascistizantes, y debe abandonar esa palabra si no demuestra que aporta algo distinto de populismo y autocratización.

Objeción: Colombia conservó elecciones, prensa, Congreso y cortes.

Respuesta: Esto descarta un régimen fascista consolidado. No descarta por sí solo impulsos o tentativas, pero obliga a reconocer la fortaleza de los contrapesos y a no exagerar el resultado.

Objeción: Todo político polariza, selecciona cifras y nombra aliados.

Respuesta: Por eso no bastan episodios aislados. Se necesita patrón persistente, convergencia entre mecanismos, escalamiento y dirección hacia subordinación institucional.

Objeción: Comparar a Petro con Hitler banaliza el Holocausto.

Respuesta: Sería banalización equiparar crímenes, magnitudes o resultados. No lo es comparar mecanismos iniciales de movilización y poder si se declaran expresamente las diferencias.

Objeción: Criticar a ricos, militares o instituciones no es fascismo.

Respuesta: Correcto. El punto es identificar cuándo la crítica concreta se transforma en culpabilidad colectiva, exclusión del pluralismo y legitimación de medidas excepcionales.

Objeción: Convocar movilizaciones, proponer una constituyente, declarar emergencias o criticar decisiones judiciales son facultades y libertades constitucionales, no síntomas autoritarios.

Respuesta: Correcto. Ningún instrumento cuenta por su mera existencia. Solo adquiere relevancia cuando se combina con el desconocimiento del resultado, la atribución de ilegitimidad al árbitro, la búsqueda de un atajo después de una derrota procedimental o la pretensión de que una voluntad política superior sustituya las condiciones constitucionales. El objeto de análisis es la función y la secuencia, no el instrumento aislado.

Objeción: La inclusión no es autoritarismo.

Respuesta: Correcto. La pregunta es si se amplía el acceso preservando mérito o si la identidad se usa para blindar nombramientos, rebajar requisitos y aumentar lealtades.

15.2. Hechos capaces de refutar la hipótesis

La hipótesis se debilitaría ante aceptación consistente de derrotas, defensa de árbitros independientes, rechazo simétrico de la violencia, fortalecimiento de reglas impersonales y entrega transparente del poder; también si los episodios atribuidos a un patrón se explicaran mejor por improvisación, incompetencia, corrupción ordinaria o populismo no totalizante. El capítulo 17 formaliza estas condiciones.

15.3. Riesgos del propio análisis

- Sesgo de confirmación y selección retrospectiva de hechos.
- Confundir semejanza superficial con identidad causal.
- Atribuir intención interna sin pruebas.
- Usar fascismo de manera tan amplia como el uso que se critica.
- Confundir corrupción, clientelismo, incompetencia o populismo con fascismo.
- Deshumanizar a seguidores de Petro o negar sus argumentos legítimos.
- Ignorar abusos reales de instituciones por temor a fortalecer la narrativa oficial.
- Construir una tesis circular en la que ganar, perder, aceptar o resistir confirmen siempre la misma conclusión.
- Contar como pruebas independientes manifestaciones que derivan de una misma premisa antipluralista.
- Confundir una fuente primaria auténtica con una interpretación necesariamente verdadera de lo ocurrido.
- Comparar a Petro con adversarios a quienes el libro no ha sometido a análisis equivalentes.
- Transformar un contrafactual sobre instituciones más débiles en evidencia de una intención no demostrada.
- Tratar como fascistizante el ejercicio ordinario de derechos políticos o facultades constitucionales sin demostrar su función deslegitimadora.

De las objeciones particulares a la explicación democrática integral. La defensa que sigue reúne la interpretación más fuerte capaz de explicar el conjunto sin recurrir a una intención autoritaria no demostrada.

15.4. La carga de la prueba

Quien sostiene que un presidente democráticamente elegido desarrolla una tendencia autocratizante o una convergencia extensa de mecanismos fascistizantes

asume una carga probatoria alta. No basta con demostrar lenguaje duro, errores, polarización o conflictos con otros poderes.

Debe mostrarse una dirección consistente hacia la reducción del pluralismo, la subordinación de los árbitros y la pérdida de alternancia. Mientras esos efectos no aparezcan, una interpretación democrática sigue siendo posible y debe ser examinada con seriedad.

15.5. Petro llegó al poder por una elección competitiva

Petro no tomó el poder por la fuerza ni mediante una ruptura institucional. Ganó una elección plural, reconocida y altamente competitiva. Su triunfo expresó demandas reales de sectores que durante décadas se sintieron excluidos de la representación nacional.

La existencia de una base electoral amplia y auténtica importa: el liderazgo no se impuso desde fuera del sistema, sino que emergió de sus mecanismos ordinarios.

15.6. El programa de cambio tenía legitimidad democrática

Reforma laboral, pensional, de salud, agraria, ambiental y tributaria formaban parte de una oferta electoral conocida. Impulsarlas no constituye por sí mismo un abuso del mandato, sino el intento esperado de cumplirlo.

La intensidad del proyecto puede explicar buena parte de la confrontación institucional sin necesidad de suponer una intención autoritaria.

15.7. Colombia arrastra desigualdades y exclusiones reales

La crítica de Petro a las élites no nació de una ficción total. Colombia ha tenido concentración de riqueza, violencia política, desigualdad territorial, baja movilidad social y acceso desigual a servicios básicos.

Una retórica de ruptura puede ser excesiva, pero responde a agravios reconocibles. Interpretarla únicamente como construcción artificial de un enemigo ignoraría el conflicto social que le da sustento.

15.8. El populismo también puede democratizar

La apelación directa al pueblo no es siempre antidemocrática. Puede incorporar sectores antes invisibles, ampliar participación y obligar a instituciones cerradas a responder a demandas legítimas.

Cabildos, marchas, consultas y discursos de movilización pertenecen al repertorio democrático, especialmente en sociedades donde los canales institucionales tradicionales han sido estrechos.

15.9. La confrontación no equivale a eliminación del adversario

Petro utiliza un lenguaje áspero y moralizante, pero sus adversarios siguen compitiendo, gobernando territorios, controlando medios, investigando al Ejecutivo y organizando oposición.

No existe una política estatal general de prohibición de partidos, encarcelamiento de opositores o supresión de campañas adversas. El pluralismo permanece vivo y visible.

15.10. Las cortes siguen siendo efectivas

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han suspendido, condicionado o anulado decisiones centrales del Gobierno. Esas decisiones han producido consecuencias materiales.

Un presidente puede criticar duramente un fallo sin haber destruido la independencia judicial. La prueba institucional más importante no es el tono, sino si el tribunal conserva capacidad de decidir y hacer cumplir.

15.11. El Congreso no ha sido neutralizado

El Congreso ha archivado, modificado y aprobado reformas. El Ejecutivo ha tenido que negociar, ceder, recomponer coaliciones y aceptar derrotas.

La aprobación de algunas reformas después de intensos debates demuestra que el sistema legislativo no fue sustituido por una voluntad presidencial unilateral.

15.12. El Decreto 639 admite una defensa jurídica

La votación senatorial sobre la consulta laboral estuvo rodeada de controversias procedimentales. El Gobierno sostuvo que la negativa no había sido válidamente adoptada.

Desde esta lectura, el decreto no habría sido un intento de abolir al Congreso, sino una respuesta discutible a una irregularidad que debía ser resuelta por los jueces. Cuando el Consejo de Estado suspendió el acto, el Gobierno no realizó la consulta y terminó derogándolo.

15.13. El uso de emergencias no prueba un proyecto autoritario

La Guajira, Catatumbo y la crisis fiscal plantearon problemas reales. Los estados de excepción existen precisamente para responder a situaciones en las que los medios ordinarios pueden ser insuficientes.

Que la Corte invalide una emergencia no demuestra mala fe autoritaria; puede demostrar una diferencia jurídica sobre necesidad, conexidad o suficiencia de las herramientas ordinarias.

15.14. La Constituyente puede ser una propuesta democrática

La Constitución de 1991 reconoce mecanismos para convocar una Asamblea Constituyente. Proponerla no es por definición golpista ni chavista.

Petro ha terminado reconociendo una ruta que incluye ley, votación y elección de delegados. No convocó unilateralmente la Asamblea ni afirmó jurídicamente que pudiera reemplazar esos pasos.

15.15. El poder constituyente pertenece a la tradición colombiana

La propia Constitución de 1991 nació de un proceso constituyente que cuestionó un orden institucional agotado. Invocar esa tradición puede expresar una aspiración de renovación democrática, no una voluntad de concentración.

La frase “sin permiso” puede leerse como lenguaje político sobre soberanía popular, no como instrucción de desconocer la Constitución.

15.16. Petro ha acatado materialmente límites importantes

La evidencia acumulada muestra una diferencia entre deslegitimación discursiva y desobediencia material. Petro ha criticado decisiones, pero en casos centrales el Estado las ha cumplido.

Ese dato es incompatible con la idea de una ruptura ya consumada y debilita la interpretación de que el Gobierno solo reconoce las reglas cuando le favorecen.

15.17. La administración pública no ha sido colonizada totalmente

Existen nombramientos políticos, reemplazos y episodios de patronazgo, como en gobiernos anteriores. Pero continúan funcionarios de carrera, organismos técnicos, controles internos y profesionales con autonomía.

Confianza política no equivale siempre a incompetencia ni captura. Un gobierno tiene derecho a designar equipos capaces de ejecutar su programa dentro de los límites legales.

15.18. La crítica a expertos puede ser una disputa legítima

Los expertos no son neutrales por definición. Sus recomendaciones incorporan supuestos, prioridades y tradiciones institucionales.

Cuestionar una tecnocracia cerrada puede ampliar responsabilidad democrática. El problema solo aparecería si la discrepancia técnica fuera castigada sistemáticamente o sustituida por obediencia sin evidencia.

15.19. El uso político de datos no es exclusivo de Petro

Todos los gobiernos seleccionan indicadores, periodos y marcos causales para defender su gestión. Esa práctica puede ser criticable sin ser prueba de una lógica autoritaria.

En varios casos, las cifras utilizadas por Petro eran verdaderas y los desacuerdos se concentraban en interpretación, atribución causal o denominadores.

15.20. La corrupción no ha sido atribuida penalmente a Petro

Los escándalos del Gobierno son graves, especialmente en la UNGRD. Pero responsabilidad política no es dirección criminal.

No existe prueba pública concluyente de que Petro ordenara sobornos, recibiera beneficios personales o diseñara una red de corrupción. Convertir proximidad en culpabilidad repetiría el mismo estándar injusto que este libro critica.

15.21. La campaña de 2022 exige presunción y precisión

Los procesos relacionados con financiación, Nicolás Petro o Ricardo Roa deben resolverse con evidencia individualizada.

Una periferia financiera riesgosa no demuestra que el candidato conociera cada flujo ni que el proyecto presidencial fuera una organización criminal.

15.22. La política hacia Venezuela fue pragmática

Colombia necesitaba restablecer relaciones por frontera, migración, comercio, seguridad y asuntos consulares. La ruptura anterior no produjo democratización venezolana.

Mantener embajadas y diálogo con Maduro no equivale a aprobar su régimen. La diplomacia trabaja con autoridades efectivas, no únicamente con gobiernos ideales.

15.23. Colombia no reconoció sin condiciones el resultado venezolano

El Gobierno pidió actas, reclamó transparencia y sostuvo que no reconocía el resultado sin información verificable. Petro no asistió a la posesión de Maduro.

Estos hechos contradicen la tesis de subordinación política o complicidad electoral automática.

15.24. La prudencia frente a Maduro puede ser una herramienta

Una condena personalizada y estridente podía cerrar canales de mediación, afectar colombianos detenidos, comprometer negociaciones de paz y deteriorar la cooperación fronteriza.

La diplomacia reservada puede producir resultados que no aparecen en discursos públicos. Menor intensidad retórica no demuestra necesariamente menor compromiso moral.

15.25. Criticar sanciones es compatible con defender democracia

Las sanciones amplias pueden dañar población civil, dificultar operaciones humanitarias y aumentar migración. Rechazarlas puede ser una posición humanitaria coherente.

No existe obligación lógica de apoyar sanciones para condenar autoritarismo. Petro puede estar equivocado en su causalidad sin estar absolviendo deliberadamente al régimen.

15.26. La comparación con el chavismo puede confundir más que aclarar

Mandato popular, crítica a élites, movilización y Constituyente no son propiedad del chavismo. Pertenecen a tradiciones democráticas y revolucionarias diversas.

Sin evidencia directa de diseño compartido, asesoría o adopción consciente, hablar de aprendizaje chavista puede ser una inferencia demasiado ambiciosa.

15.27. Colombia tiene barreras estructurales diferentes

La fragmentación partidista, la descentralización, la independencia judicial, el Banco de la República, la sociedad civil, la prensa, el sector privado y la tradición electoral hacen mucho más difícil una concentración venezolana.

Un mismo discurso puede producir efectos distintos en sistemas institucionales distintos.

15.28. No existe reelección ni prolongación del mandato

Petro no ha presentado una reforma de reelección presidencial ni una extensión formal de su periodo. La ausencia de ese paso es una contraprueba de máxima relevancia.

Atribuirle desde ahora una intención de permanencia personal carecería de soporte suficiente.

15.29. No existe captura acreditada del árbitro electoral

La Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la justicia electoral siguen siendo objeto de disputa y control plural. No se ha demostrado que el Gobierno pueda determinar unilateralmente candidaturas, conteos o resultados.

Sin captura del árbitro ni reducción material de alternancia, la categoría de autoritarismo electoral resulta prematura.

15.30. No existe coerción oficialista equivalente

Colombia no tiene colectivos armados oficialistas comparables con los venezolanos ni una política nacional de represión contra la oposición.

Equiparar marchas, comités o Primera Línea con una milicia estatal sin prueba funcional sería una extrapolación injustificada.

15.31. La presidencia de Petro está limitada por el tiempo

El mandato tiene fecha de terminación constitucional. El Gobierno ha perdido tiempo, apoyo legislativo y capacidad de ejecución.

Una explicación alternativa plausible es que muchas de sus acciones respondan a frustración, improvisación y debilidad, no a una estrategia coherente de concentración.

15.32. La tesis puede estar sobreorganizando hechos dispersos

Existe el riesgo de convertir episodios independientes en una secuencia que solo aparece después de seleccionarlos y ordenarlos.

Discursos, nombramientos, errores estadísticos, crisis diplomáticas y decretos pueden tener causas distintas. La coherencia narrativa del analista no garantiza coherencia estratégica del actor.

15.33. El sesgo de confirmación sigue siendo posible

Una vez formulada la hipótesis autocratizante, cada conflicto puede reinterpretarse como evidencia favorable, mientras los actos democráticos se reducen a tácticas o fracasos.

Una teoría que puede explicar tanto el acatamiento como el desacato corre el riesgo de volverse infalsable.

15.34. La ausencia de desenlace importa más de lo que parece

No toda trayectoria potencial debe tratarse como un proceso ya iniciado. A veces la contención institucional no solo frena una intención autoritaria; revela que esa intención nunca existió de manera coherente.

El Gobierno puede estar operando dentro de los límites porque acepta su legitimidad, no únicamente porque carece de fuerza para romperlos.

15.35. Matriz de la defensa

Acusación	Mejor defensa	Contraprueba	Fuerza defensiva	Vacío restante	Balance
Enemigo moral	Retórica de conflicto social real	Oposición sigue legítima y activa	Alta	Lenguaje excluyente repetido	Defensa parcial
Bloqueo/ conspiración	Crítica política a instituciones	Acatamiento material	Alta	Uso expansivo de golpe	Defensa parcial
Calle plebiscitaria	Participación democrática	Sin coerción oficialista	Muy alta	Jerarquía moral de movilizaciones	Fuerte
Politización	Derecho a ejecutar el programa	Carrera y controles persisten	Alta	Casos de patronazgo	Fuerte parcial
Producción de realidad	Framing común en gobiernos	Datos a menudo verdaderos	Alta	Asimetría causal repetida	Parcial
Corrupción	Sin prueba penal contra Petro	Investigaciones independientes	Muy alta	Responsabilidad política	Muy fuerte
Poder constituyente	Mecanismo constitucional	No convocado unilateralmente	Muy alta	Retórica superior al procedimiento	Muy fuerte
Venezuela	Realismo diplomático	No reconocimiento sin actas	Muy alta	Condena débil de represión	Muy fuerte parcial
Autocratización	Conflicto democrático intenso	Controles y alternancia vigentes	Muy alta	Intentos expansivos reiterados	Abierta

15.36. La mejor explicación alternativa integral

Petro puede ser descrito como un populista democrático de izquierda, confrontacional, personalista e improvisador, que intenta cumplir un programa ambicioso dentro de una institucionalidad fragmentada y resistente.

Su lenguaje es frecuentemente irresponsable y polarizante; sus equipos han cometido errores y su Gobierno ha enfrentado corrupción. Pero estos defectos no equivalen a una estrategia coherente de destrucción democrática.

La tensión con los poderes puede reflejar un presidente débil que protesta contra límites que no puede dominar, más que un autócrata exitoso en proceso de consolidación.

15.37. Qué hechos apoyan con mayor fuerza esta defensa

La defensa se apoya con mayor fuerza en el origen electoral competitivo, la eficacia de contrapesos, el acatamiento material de decisiones, la ausencia de prolongación del mandato, el pluralismo mediático, la oposición activa, la falta de captura electoral acreditada y la ausencia de coerción sistemática.

15.38. Qué aspectos esta defensa explica peor

Explica peor la repetición de fascismo, golpe y conspiración ante límites heterogéneos, la consulta convocada por decreto tras una negativa legislativa, la excepcionalidad para problemas estructurales, la apelación constituyente frente al bloqueo, la asimetría de culpa y la convergencia entre retórica, calle, administración y expansión normativa.

15.39. Resultado de la prueba adversarial

La defensa obliga a descartar fascismo histórico o consolidado, plan chavista demostrado, captura total del Estado, complicidad automática con Maduro y dirección criminal personal de la corrupción. También muestra que buena parte de la conducta admite explicaciones por populismo democrático, conflicto institucional, ambición reformista, improvisación y debilidad política.

Sin embargo, no elimina la hipótesis de una tendencia autocratizante. La repetición de mecanismos que elevan el mandato sobre el procedimiento conserva un valor explicativo que la defensa no absorbe por completo.

15.40. Conclusión de la defensa

La defensa cambia el tono y los límites de la tesis: Petro actúa dentro de una democracia competitiva y muchos actos admiten explicaciones democráticas razonables, pero la dirección plebiscitaria y autocratizante no queda absorbida por ellas.

La formulación que sobrevive a la defensa es más modesta y más sólida: populismo plebiscitario de izquierda como base y liderazgo cesarista como forma; una tendencia autocratizante parcial y contenida, sin prueba de un propósito coherente de eliminar la democracia competitiva; y un calificador fascistizante que solo puede mantenerse si las cinco dimensiones conservan capacidad explicativa adicional.

15.41. Consecuencia para la crítica

La crítica integral que siga no podrá apoyarse en exageraciones ya descartadas. Deberá explicar por qué, aun aceptando toda esta defensa, la convergencia de mecanismos sigue siendo preocupante.

La conclusión deberá preservar esta asimetría: el riesgo es real, pero el régimen autoritario no está demostrado; la dirección importa, pero la contención, el pluralismo y la alternancia también.

CAPÍTULO 16. LA MEJOR CRÍTICA POSIBLE

Por qué la categoría de simple populismo democrático no basta

Prueba adversarial II. La crítica no reinicia la acusación original. Parte de todo lo concedido por la defensa y pregunta qué mecanismos permanecen insuficientemente explicados por la categoría de simple populismo democrático.

16.1. La pregunta que queda después de la defensa

Después de aceptar la mejor defensa posible de Petro, la pregunta es qué hechos continúan sin explicación suficiente si se lo describe únicamente como un líder democrático de izquierda, confrontacional y populista.

16.2. La acusación central

La crítica más fuerte no es que Petro haya instaurado una dictadura ni que Colombia sea un régimen fascista.

Es que Petro desarrolla una concepción plebiscitaria y cesarista del poder: su mandato se presenta como expresión histórica del pueblo, los límites institucionales pierden legitimidad cuando lo contradicen y las vías extraordinarias adquieren valor para superarlos.

Esta lógica aparece de manera repetida en el discurso, la movilización, la administración, los datos, la responsabilidad política, los decretos, las emergencias, la Constituyente y la política exterior.

16.3. El problema no es la existencia de un proyecto transformador

Un gobierno democrático puede promover reformas profundas, enfrentar élites y movilizar ciudadanos.

El problema comienza cuando la legitimidad de los fines se traslada a los medios y el proyecto deja de ser una opción política entre otras para convertirse en la voluntad auténtica del pueblo.

En esa estructura, quien limita el proyecto no representa simplemente otra interpretación democrática: puede ser convertido en obstáculo moral, conspirador, fascista o enemigo de la vida.

16.4. La elección como mandato superior

Petro no presenta su victoria únicamente como autorización temporal para gobernar dentro de reglas compartidas.

La presenta con frecuencia como ruptura histórica frente a un régimen de élites, lo que dota al programa de una legitimidad sustantiva superior.

Esta diferencia importa porque transforma la derrota legislativa o judicial en algo más grave que un desacuerdo: la institución estaría frustrando el sentido histórico de la elección.

16.5. Del desacuerdo al bloqueo

Los capítulos probatorios muestran que Congreso, cortes, Fiscalía, Procuraduría, prensa y expertos pueden ser incorporados a un mismo relato de bloqueo.

No toda crítica institucional es autocratizante. Lo relevante es la repetición de una función: el límite adverso se convierte en evidencia de una estructura que impide gobernar al pueblo.

El resultado es una erosión simbólica de los contrapesos antes de cualquier captura material.

16.6. Golpe, fascismo y conspiración como lenguaje de integración

Petro utiliza categorías máximas para reunir conflictos heterogéneos dentro de una amenaza común.

Una investigación, una decisión judicial, una oposición política, un medio crítico o un desacuerdo electoral pueden entrar en el campo semántico del golpe, el fascismo, el odio o la conspiración.

La palabra no solo describe: asigna posición moral. El actor deja de ser adversario y se aproxima a la categoría de enemigo.

16.7. La calle como legitimidad correctiva

La movilización popular puede ser profundamente democrática. La crítica no reside en convocarla.

El problema aparece cuando la calle oficialista es presentada como expresión superior del pueblo y como corrección de Congreso, cortes o procedimientos.

La movilización deja entonces de acompañar la democracia representativa y empieza a funcionar como plebiscito informal permanente alrededor del líder.

16.8. El Decreto 639 como caso rector

La convocatoria de la consulta laboral después de una negativa del Senado es el episodio institucional más fuerte de toda la investigación.

La controversia sobre la votación podía ser real y jurídicamente discutible. El problema fue que el Ejecutivo actuó como si pudiera neutralizar por sí mismo el efecto de la decisión legislativa antes de obtener una decisión competente.

La suspensión judicial y la derogación posterior demostraron contención. Pero el intento revela una jerarquía: cuando el Congreso no realiza el mandato, el Ejecutivo busca al pueblo directamente.

16.9. La excepcionalidad como atajo

Los estados de excepción de La Guajira, Catatumbo y la emergencia fiscal no fueron idénticos.

Sin embargo, en conjunto muestran una preferencia por habilitaciones extraordinarias cuando los instrumentos ordinarios resultan lentos, insuficientes o políticamente bloqueados.

La emergencia fiscal es especialmente relevante porque trasladó problemas estructurales y derrotas legislativas al terreno de la excepción.

16.10. El poder constituyente como salida superior

La propuesta constituyente no es antidemocrática por definición.

Su función política sí genera preocupación cuando se presenta como respuesta al bloqueo de reformas y cuando el pueblo se concibe como capaz de constituirse 'sin permiso'.

La idea implícita es que los poderes constituidos pueden perder legitimidad frente a una voluntad popular interpretada desde la Presidencia.

16.11. Acatar y deslegitimar

Petro ha cumplido materialmente fallos y decisiones adversas relevantes. Esa es una contraprueba central.

Pero el acatamiento material puede coexistir con una estrategia de deslegitimación simbólica del órgano que decide.

La autocratización contemporánea no siempre comienza con desacato abierto. Puede empezar reduciendo la confianza social en árbitros que todavía conservan poder jurídico.

16.12. Lealtad, mérito y autonomía técnica

La administración pública requiere afinidad programática en cargos políticos.

La crítica surge cuando la confianza política se extiende a espacios cuya función es producir límites técnicos, información independiente o control.

Los capítulos no demuestran colonización total, pero sí politización selectiva, patronazgo y reemplazos que pueden reducir autonomía.

16.13. La realidad subordinada al relato

Petro no miente de manera uniforme ni constante. Esa formulación sería insostenible.

El patrón es más sofisticado: datos verdaderos, categorías ampliadas, selección de escalas, causalidad asimétrica y sustitución de indicadores.

La realidad se organiza de modo que los avances confirman el cambio y los fracasos pertenecen al bloqueo, la herencia, las sanciones o la oposición.

16.14. La administración política de la culpa

El mismo patrón aparece en corrupción y política exterior.

Para el cercano existe contexto, estructura, prudencia, presunción, herencia y explicación causal compleja.

Para el adversario existen responsabilidad personal, intención y condena rápida.

La asimetría debilita el universalismo moral que el propio proyecto reclama.

16.15. UNGRD y la periferia del poder

El caso UNGRD no demuestra que Petro dirigiera una red criminal.

Sí muestra que un mecanismo grave de corrupción con posible función de gobernabilidad legislativa se desarrolló dentro de su Gobierno y se acercó institucionalmente a la Presidencia.

La crítica política se concentra en controles insuficientes, confianza prolongada y dificultad para aplicar al círculo propio la misma severidad moral utilizada contra el régimen anterior.

16.16. Venezuela y la indulgencia selectiva

La normalización diplomática con Venezuela era defendible y necesaria.

La crítica aparece en la diferencia de intensidad moral: frente a Maduro predominan el proceso, la soberanía, las sanciones y el diálogo; frente a adversarios internos aparecen con mayor rapidez fascismo, golpe y responsabilidad personal.

Esa asimetría no prueba complicidad, pero confirma que las categorías morales se distribuyen también según cercanía política.

16.17. La convergencia con el chavismo temprano

No existe prueba de transferencia consciente ni de plan venezolano.

Sí existe una coincidencia funcional: mandato histórico, enemigo moral, instituciones bloqueadoras, movilización, poder constituyente y sospecha sobre árbitros.

La experiencia venezolana importa no porque Colombia haya llegado al mismo resultado, sino porque muestra cómo mecanismos inicialmente legales y populares pueden cambiar de función cuando se acumulan.

16.18. Por qué la explicación de improvisación no basta

Es posible que parte de la conducta de Petro responda a frustración, improvisación, temperamento o debilidad política.

Pero la misma secuencia aparece en ámbitos demasiado diversos para reducirla completamente a episodios aislados.

La repetición no demuestra un plan secreto. Demuestra una concepción del poder que orienta respuestas semejantes frente a límites diferentes.

16.19. La lógica común de los ocho capítulos

Capítulo	Mecanismo	Función	Contraprueba	Riesgo acumulado
5. Enemigo moral	Etiquetamiento	Reducir legitimidad del adversario	Pluralismo todavía vigente	Exclusión
6. Contrapesos	Bloqueo/golpe	Deslegitimar el límite	Órganos efectivos	Erosión
7. Calle	Movilización directa	Corregir intermediarios	Sin coerción equivalente	Plebiscitarismo
8. Administración	Lealtad selectiva	Alinear ejecución y control	No captura total	Menor autonomía
9. Realidad	Selección causal	Confirmar el relato	Existen datos adversos públicos	Cierre epistemológico
10. Corrupción	Culpa asimétrica	Proteger moralmente al cercano	Investigaciones operativas	Impunidad política
11. Mandato	Consulta, excepción y constituyente	Superar procedimiento	Contención efectiva	Expansión ejecutiva
12. Venezuela	Indulgencia y comparación	Normalizar al aliado y aprender trayectoria	No complicidad probada	Convergencia regional

16.20. Por qué simple populismo democrático es insuficiente

La categoría explica la división pueblo-élite y la movilización, pero no explica suficientemente el uso de vías extraordinarias para superar negativas, la repetición de acusaciones de golpe, la deslegitimación de árbitros ni la jerarquía del mandato sobre el procedimiento.

El populismo plebiscitario sigue siendo la base explicativa; la forma del liderazgo exige añadir cesarismo, y la dirección institucional, tendencia autocratizante.

16.21. Por qué todavía no puede hablarse de dictadura

No puede hablarse de dictadura porque Congreso, cortes, prensa y oposición conservan capacidad real; no se ha demostrado captura del árbitro, prolongación del mandato ni una política general de encarcelamiento, y Petro ha acatado materialmente decisiones relevantes.

16.22. Por qué tampoco basta la ausencia de dictadura

La democracia puede contener conductas expansivas sin que estas pierdan relevancia analítica.

Esperar a que exista cierre electoral, censura o coerción para reconocer una trayectoria equivale a convertir el desenlace en el único momento visible.

La categoría correcta debe reconocer tanto la resistencia institucional como la dirección de los intentos.

16.23. La acusación más fuerte que sobrevive

Petro no ha destruido la democracia colombiana.

Pero desarrolla una concepción plebiscitaria y cesarista del poder en la que el mandato popular, interpretado por el líder, puede adquirir superioridad moral frente al procedimiento.

Esa concepción produce una tendencia autocratizante: deslegitima límites, busca vías extraordinarias, reduce autonomía y organiza realidad y culpa de manera selectiva.

Además, la convergencia de las cinco dimensiones sostiene la presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido.

16.24. Matriz de fuerza de la crítica

Proposición crítica	Fuerza	Evidencia principal	Límite	Conclusión
Existe populismo moral	Muy alta	Pueblo/élite y enemigo	Compatible con democracia	Demostrado
Existe liderazgo cesarista	Alta	Mandato, calle y constituyente	Sin subordinación total	Demostrado parcialmente
Existe tendencia autocratizante	Alta	Expansión y erosión de límites	Contención efectiva	Demostrada como dirección
Existe convergencia de mecanismos fascistizantes	Moderada-alta	Cinco dimensiones y mínimo discriminante	Ausencias constitutivas y contención democrática	Calificador restringido
Existe plan dictatorial coordinado	Baja	No hay prueba directa	Conducta también puede ser reactiva	No demostrado
Existe régimen autoritario	Muy baja	Faltan umbrales decisivos	Alternancia vigente	No

16.25. La formulación crítica más fuerte

La crítica integral más rigurosa es la siguiente:

Gustavo Petro ejerce un populismo plebiscitario de izquierda, de liderazgo cesarista y dirección autocratizante. Su proyecto moraliza al adversario, subordina simbólicamente los límites al mandato y recurre a legitimidades alternativas cuando el procedimiento no realiza sus fines. La convergencia de las cinco dimensiones justifica la presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido, aunque Colombia no sea un régimen fascista ni autoritario consolidado.

16.26. Qué permite afirmar esta crítica

La crítica permite afirmar una concepción coherente del poder que excede la confrontación ordinaria: jerarquiza el mandato sobre el procedimiento, erosiona simbólicamente contrapesos, asigna función sustitutiva a vías extraordinarias y distribuye de modo asimétrico realidad y culpa, dentro de una dirección autocratizante contenida.

16.27. Qué no permite afirmar

No permite afirmar dictadura, plan secreto, captura de contrapesos, pérdida de competencia, violencia oficialista equivalente al fascismo histórico ni inevitabilidad

del desenlace venezolano; tampoco convierte toda reforma o movilización en autoritaria.

16.28. La crítica también debe poder perder

La acusación debe debilitarse ante aceptación plena de la alternancia y agravarse ante alteración de reglas, captura del árbitro, desconocimiento de resultados, prolongación del mandato o coerción; el capítulo 17 fija esos umbrales.

16.29. Conclusión adversarial

La defensa descarta una dictadura planificada; la crítica muestra que simple populismo democrático no explica la convergencia entre enemigo moral, bloqueo, calle, excepcionalidad, constituyente, politización y asimetría epistemológica.

La clasificación que sobrevive es anidada: populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa; liderazgo cesarista como forma; tendencia autocratizante como dirección; y presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido, todavía limitada por instituciones que conservan capacidad real.

CAPÍTULO 17. PRUEBA DE FALSACIÓN Y CONTRAPRUEBA DEMOCRÁTICA

Umbrales, predicciones y criterios de cambio de diagnóstico

De la conclusión adversarial a la predicción. La falsación convierte el diagnóstico en una tesis vulnerable a los hechos: separa sus capas y define de antemano qué conductas las debilitarían, cuáles las reforzarían y qué combinación obligaría a cambiar de categoría.

17.1. La tesis sometida a prueba

La tesis acumulativa sostiene una clasificación anidada: populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa; liderazgo cesarista como forma; tendencia autocratizante como dirección; y presencia extensa de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido, todavía contenido por instituciones democráticas efectivas.

La prueba de falsación debe examinar por separado cada capa y el límite democrático. Una parte de la tesis puede debilitarse mientras otra sobrevive; la entrega del poder no borra retrospectivamente los hallazgos ya documentados.

17.2. Qué significa falsar una tesis política

No significa exigir una prueba matemática ni esperar un hecho único que destruya todo el análisis.

Significa establecer predicciones observables y reconocer de antemano qué comportamientos serían incompatibles con la interpretación propuesta.

También significa impedir que cualquier conducta sea reinterpretada siempre como confirmación.

17.3. Las cuatro capas y el límite democrático

Componente	Qué afirma	Qué lo sostiene	Qué lo debilita	Qué lo agravaría
Populismo plebiscitario	Pueblo/élite y legitimidad directa	Enemigo moral, calle, consulta	Reconocimiento del pluralismo	Mayor exclusión moral
Liderazgo cesarista	Líder como intérprete superior	Mandato histórico y constituyente	Despersonalización del proyecto	Culto y subordinación
Tendencia autocratizante	Erosión gradual de límites	Expansión ejecutiva y bloqueo	Respeto estable de contrapesos	Captura de árbitros
Mecanismos fascistizantes	Convergencia de cinco dimensiones por encima del mínimo discriminante	Refundación, enemigo, líder-pueblo, excepcionalidad y cierre epistemológico-geopolítico	Pluralismo, alternancia y pérdida de convergencia	Coerción, partido-Estado o eliminación electoral

17.4. Predicción central: la alternancia

La hipótesis autocratizante predice que una derrota electoral suficientemente importante será tratada no solo como pérdida política, sino como amenaza contra el pueblo, fraude, golpe o interrupción del proceso histórico.

La conducta posterior a una derrota es el indicador más importante porque obliga al proyecto a escoger entre su narrativa histórica y la regla de alternancia.

17.5. Hecho que debilitaría fuertemente la tesis

Una elección competitiva, con garantías razonables, en la que el candidato apoyado por Petro pierda y el presidente:

- reconozca con rapidez el resultado;
- evite acusaciones de fraude sin evidencia;
- ordene una transición completa y cooperativa;
- proteja al gobierno entrante y a sus funcionarios;
- rechace movilizaciones destinadas a impedir la posesión;
- defienda públicamente la legitimidad del adversario vencedor;
- y abandone cualquier mecanismo orientado a prolongar el poder.

Ese comportamiento no eliminaría la base populista ni la forma cesarista, pero debilitaría sustancialmente la tendencia autocratizante y la intensidad del calificador fascistizante.

17.6. Hecho que fortalecería decisivamente la tesis

Una derrota seguida por desconocimiento del resultado, acusaciones de fraude sin sustento, presión para modificar el conteo, movilización destinada a impedir la transición o uso de mecanismos extraordinarios para prolongar el control.

Ese conjunto obligaría a elevar la clasificación desde tendencia autocratizante hacia autoritarismo electoral en desarrollo.

17.7. Árbitro electoral

17.7.1. Evidencia que debilitaría la hipótesis

- Nombramientos plurales e independientes.
- Auditorías transparentes.
- Acceso de oposición y observadores.
- Respeto por decisiones adversas.
- No intervención presidencial en el conteo.
- Rechazo explícito a presionar Registraduría, CNE o justicia electoral.

17.7.2. Evidencia que la fortalecería

- Cambios de composición dirigidos a favorecer al oficialismo.
- Uso de investigaciones o sanciones para excluir adversarios.
- Modificación de reglas cerca de la elección.
- Presión pública sobre funcionarios electorales.
- Desconocimiento selectivo de decisiones.
- Control político del escrutinio o de la resolución de controversias.

17.8. Constituyente**17.8.1. Conducta falsadora o debilitante**

- Aceptar que sin ley del Congreso no hay convocatoria.
- Definir límites materiales claros.
- Excluir toda prolongación del mandato actual.
- Garantizar representación plural.
- Aceptar una derrota legislativa o popular.
- Abandonar el proyecto si no supera la ruta constitucional.

17.8.2. Conducta confirmatoria o agravante

- Convocatoria por vía unilateral.
- Presentación de la derrota legislativa como inválida.
- Competencia abierta para modificar mandato o reelección.
- Diseño electoral que garantice mayoría oficialista.
- Subordinación de poderes constituidos al órgano.
- Uso del constituyente para neutralizar controles.

17.9. Estados de excepción y decretos**17.9.1. Evidencia debilitante**

- Reserva estricta de la excepción para hechos extraordinarios y sobrevinientes.
- Justificación técnica verificable.
- Control legislativo y judicial aceptado.
- No reedición de medidas anuladas.
- Uso prioritario de legislación ordinaria.
- Reconocimiento público de errores jurídicos.

17.9.2. Evidencia confirmatoria

- Nuevas emergencias para problemas estructurales.
- Decretos destinados a sustituir al Congreso.
- Reiteración de medidas suspendidas.
- Desconocimiento material de fallos.

- Uso de urgencia como argumento permanente.
- Normalización del gobierno por excepción.

17.10. Congreso y cortes

17.10.1. Evidencia debilitante

- Reconocimiento de la legitimidad de decisiones adversas.
- Crítica centrada en argumentos, no en enemigos.
- Negociación legislativa sostenida.
- Cumplimiento material y simbólico de fallos.
- Defensa pública de independencia judicial.
- Aceptación de que el mandato no elimina separación de poderes.

17.10.2. Evidencia confirmatoria

- Escalada de ataques personales contra magistrados.
- Campañas para reducir autonomía judicial.
- Incumplimiento de decisiones.
- Uso de mayorías para capturar tribunales.
- Presentación sistemática de fallos como golpes.
- Subordinación legislativa mediante presión extrainstitucional.

17.11. Prensa y sociedad civil

17.11.1. Evidencia debilitante

- Protección pública de medios críticos.
- Rechazo a sanciones regulatorias por contenido.
- Acceso plural a información oficial.
- Respeto por ONG y organizaciones opositoras.
- Condena de amenazas contra periodistas.
- Separación entre crítica y persecución.

17.11.2. Evidencia confirmatoria

- Uso de licencias, impuestos o contratos para castigar medios.
- Vigilancia o persecución de periodistas.
- Restricción de ONG por razones políticas.
- Campañas estatales de estigmatización.
- Violencia tolerada contra críticos.
- Creación de un ecosistema informativo dependiente del Gobierno.

17.12. Oposición

17.12.1. Evidencia debilitante

- Reconocimiento explícito de la oposición como alternativa legítima.
- Garantías de seguridad y participación.
- Rechazo a inhabilitaciones políticas selectivas.
- Respeto por gobiernos territoriales adversos.
- Debate sin categorías de enemigo interno.
- Defensa de derechos incluso para sectores hostiles.

17.12.2. Evidencia confirmatoria

- Inhabilitación de competidores mediante órganos alineados.
- Uso penal selectivo.
- Retiro de recursos o competencias por razones políticas.
- Estigmatización oficial persistente.
- Tolerancia de intimidación.
- Negación de legitimidad al adversario vencedor.

17.13. Administración pública

17.13.1. Evidencia debilitante

- Concursos y mérito fortalecidos.
- Nombramientos técnicos en órganos de control.
- Protección de discrepancia profesional.
- Publicación de criterios de selección.
- Remoción por desempeño, no por disenso.
- Autonomía real de entidades técnicas.

17.13.2. Evidencia confirmatoria

- Reemplazo de técnicos por leales sin competencia.
- Uso de intervenciones para control político.
- Presión sobre estadísticas y conceptos.
- Captura de reguladores.
- Sanción a discrepancias internas.
- Conversión de la administración en aparato partidista.

17.14. Corrupción y responsabilidad

17.14.1. Evidencia debilitante

- Aplicación del mismo estándar al círculo propio.
- Entrega completa de información.
- Separación de aliados investigados.

- Protección de denunciantes.
- Reformas de control preventivo.
- Reconocimiento de responsabilidad política sin esperar condena penal.

17.14.2. Evidencia confirmatoria

- Obstrucción de investigaciones.
- Ataques a fiscales o jueces por casos del círculo cercano.
- Mantenimiento de confianza pese a evidencia grave.
- Uso de explicaciones estructurales solo para aliados.
- Persecución de denunciantes.
- Impunidad política sistemática.

17.15. Realidad, cifras y causalidad

17.15.1. Evidencia debilitante

- Corrección pública de errores.
- Uso consistente de indicadores comparables.
- Reconocimiento de datos desfavorables.
- Separación entre correlación y causalidad.
- Publicación de metodología.
- Igual estándar estadístico para logros y fracasos.

17.15.2. Evidencia confirmatoria

- Persistencia de cifras refutadas.
- Cambio oportunista de escalas.
- Agregación de categorías no equivalentes.
- Descalificación moral de expertos.
- Sustitución de indicadores cuando contradicen el relato.
- Control político de datos oficiales.

17.16. Venezuela y doble estándar

17.16.1. Evidencia debilitante

- Condena clara de nuevas represiones.
- Exigencia sostenida de garantías electorales.
- Mismo estándar frente a aliados y adversarios.
- Condicionalidad democrática verificable.
- Defensa de presos políticos sin distinción ideológica.
- Reconocimiento explícito de responsabilidades internas del régimen.

17.16.2. Evidencia confirmatoria

- Minimización de nuevas violaciones.

- Reconocimiento electoral sin transparencia.
- Justificación de represión por sanciones o soberanía.
- Apoyo a cambios de reglas que reduzcan alternancia.
- Doble estándar sostenido frente a gobiernos de derecha.
- Coordinación política directa para copiar mecanismos institucionales.

17.17. Fuerza Pública y coerción

17.17.1. Evidencia debilitante

- Neutralidad electoral de la Fuerza Pública.
- Rechazo a consignas partidistas.
- Protección igual de marchas oficialistas y opositoras.
- Investigación de abusos sin selección política.
- No creación de organizaciones civiles coercitivas.
- Subordinación estricta a la Constitución.

17.17.2. Evidencia confirmatoria o de máxima gravedad

- Partidización de mandos.
- Uso de inteligencia contra oposición.
- Tolerancia de grupos civiles violentos.
- Represión selectiva de manifestaciones adversas.
- Impunidad para estructuras oficialistas.
- Uso de fuerza para impedir alternancia.

17.18. Matriz de predicciones

Área	Predicción de la tesis	Resultado que la debilita	Resultado que la fortalece	Umbral crítico	Estado
Elección	Derrota tratada como amenaza	Reconocimiento y transición	Desconocimiento y bloqueo	Alternancia	Alternancia consumada; contraprueba fuerte
Árbitro	Presión creciente	Independencia reforzada	Captura o manipulación	Competencia real	Competencia electoral preservada al cierre
Constituyente	Uso contra límites	Respeto estricto de ruta	Prolongación o supremacía	Cambio de régimen	No produjo prolongación del mandato
Cortes	Deslegitimación recurrente	Respeto material y simbólico	Incumplimiento/ captura	Estado de derecho	Parcial
Prensa	Hostilidad creciente	Protección plural	Persecución regulatoria	Espacio cívico	Parcial
Oposición	Moralización	Legitimidad reconocida	Inhabilitación/ persecución	Pluralismo	Parcial
Coerción	Puede aparecer tarde	Neutralidad institucional	Guardias populares con eventual dimensión armada	Autoritarismo	Aproximación discursiva poscierre; no materializada

17.19. Tres escenarios de cierre

17.19.1. *Escenario A: falsación sustancial*

Elecciones competitivas, derrota reconocida, transición pacífica, árbitros independientes, Constituyente abandonada si no supera las reglas, respeto por prensa y oposición y reducción del lenguaje de golpe y enemigo.

Diagnóstico resultante: populismo democrático confrontacional con rasgos plebiscitarios; tendencia autocratizante sustancialmente debilitada y calificador fascistizante reducido o retirado si deja de cumplir el mínimo discriminante.

17.19.2. *Escenario B: confirmación parcial*

Elecciones competitivas y transición, pero con acusaciones de fraude, presión callejera, ataques a árbitros y persistencia de la moralización.

Diagnóstico resultante: populismo plebiscitario de liderazgo cesarista, con tendencia autocratizante contenida; el calificador fascistizante dependerá de la persistencia de las cinco dimensiones.

17.19.3. *Escenario C: confirmación grave*

Alteración de reglas, captura de árbitros, desconocimiento de una derrota, Constituyente para prolongar poder, persecución de medios u oposición o coerción organizada.

Diagnóstico resultante: transición hacia autoritarismo electoral y posible consolidación de una democracia iliberal o régimen competitivo autoritario.

17.20. Qué hecho aisladamente no bastaría

- Una frase agresiva.
- Una marcha multitudinaria.
- Una decisión judicial adversa.
- Un nombramiento cuestionable.
- Una denuncia de fraude con evidencia real.
- Una reforma constitucional regular.
- Una crítica a medios o cortes.

La clasificación exige patrón, repetición, dirección y efectos institucionales.

17.21. Qué combinación sí obligaría a cambiar de categoría

La combinación de captura electoral, alteración de reglas, desconocimiento de derrota, subordinación judicial y persecución sistemática de oposición o prensa.

No sería necesario esperar a una dictadura completa para reconocer que la democracia competitiva ha sido superada.

17.22. La tesis también puede sobrevivir parcialmente

Aunque Petro entregue materialmente el poder, los hallazgos sobre populismo plebiscitario, cesarismo y asimetría pueden seguir siendo válidos.

Lo que se debilitaría principalmente sería la intensidad de la tendencia autocratizante; también podría reducirse o retirarse el calificador fascistizante si la convergencia deja de superar el mínimo discriminante.

La falsación debe ser específica: no toda la tesis depende del mismo desenlace.

17.23. Regla contra el sesgo retrospectivo

Los criterios fijados aquí deben aplicarse sin modificarlos después para proteger la tesis.

Si Petro acepta plenamente la alternancia, no debe reinterpretarse automáticamente como una maniobra táctica sin evidencia.

Si desconoce una derrota, tampoco debe minimizarse como simple retórica si produce efectos institucionales.

17.24. Balance de falsabilidad

Hipótesis	Falsabilidad	Prueba principal	Estado actual	Momento decisivo
Populismo moral	Media	Reconocimiento pluralista	Fuerte	Continuidad del discurso
Cesarismo	Media-alta	Despersonalización y límites	Alta, pero limitada por la sucesión	Transición consumada
Autocratización	Muy alta	Alternancia y árbitros	Tendencia contenida; alternancia preservada	Elección y entrega observadas
Mecanismos fascizantes	Alta	Persistencia o pérdida de convergencia entre cinco dimensiones	Calificador restringido	Escalada o contención
Régimen autoritario	Muy alta	Pérdida de competencia	No demostrado	Cambio de reglas

17.25. Conclusión de la prueba

La tesis es falsable porque formula predicciones concretas y admite resultados que la debilitarían.

La prueba más importante era la alternancia. El 7 de agosto de 2026, la entrega material del poder y la investidura constitucional del sucesor aportaron la contraprueba democrática más fuerte del expediente y redujeron de forma sustancial cualquier lectura que supusiera permanencia personal, bloqueo de la sucesión o captura consumada del régimen.

Una derrota desconocida, acompañada de captura de árbitros, alteración de reglas o coerción, obligaría a agravarla.

El desenlace observado combina una contraprueba material decisiva con persistencia de elementos discursivos previstos por la hipótesis: hubo transición e investidura constitucionales, pero también acusaciones de fraude no demostradas a escala decisiva y deslegitimación del vencedor. El resultado obliga a descartar las hipótesis de retención material o autoritarismo consolidado y conserva, de manera más limitada, la clasificación anidada: dirección autocratizante contenida y calificador fascistizante restringido dentro de una democracia con alternancia efectiva.

17.26. Regla final de honestidad

El libro debe estar dispuesto a concluir que exageró si la evidencia futura contradice sus predicciones.

También debe estar dispuesto a agravar el diagnóstico si se cruzan los umbrales definidos.

La finalidad no es tener razón sobre Petro, sino describir con precisión qué ocurre con la democracia colombiana.

PARTE IV. LA PRUEBA PRESIDENCIAL

CAPÍTULO 18. ELECCIONES DE 2026 Y LEGITIMIDAD DEL VENCEDOR

Cronología y evaluación: corte sustantivo 14 de julio de 2026; actualizaciones excepcionales del 20 de julio, 4 y 7 de agosto

Aplicación de la predicción central. El capítulo 18 no añade un noveno indicio equivalente a los ocho anteriores. Somete el diagnóstico a una prueba longitudinal: observa qué ocurre cuando el proyecto pierde el poder nacional y debe distinguir entre impugnar un resultado, reconocer la legitimidad del vencedor y transferir materialmente el mando.

18.1. Por qué esta prueba es decisiva

La alternancia era la principal predicción material todavía abierta. Hasta 2026 podía sostenerse que Petro ejercía un liderazgo plebiscitario y mostraba una dirección autocratizante, pero su proyecto no había enfrentado aún una derrota presidencial y la obligación de entregar el poder a un adversario.

La elección presidencial de 2026 permite observar cómo reacciona ante una derrota estrecha, un resultado adverso certificado institucionalmente y la obligación constitucional de entregar la Presidencia.

18.2. Pregunta central

¿La respuesta de Petro a la victoria de Abelardo de la Espriella combina una impugnación jurídicamente legítima con reconocimiento democrático del vencedor, o convierte la derrota en fraude y construye una legitimidad alternativa por encima del resultado oficial? La transferencia material del mando constituye una tercera pregunta, relacionada pero distinta.

18.3. Distinciones indispensables

Concepto	Qué es	Valor jurídico	Quién decide	Error frecuente
Preconteo	Divulgación rápida e informativa	No declara elección	Registraduría divulga	Tratarlo como resultado definitivo
Escrutinio	Revisión, consolidación y decisión sobre reclamaciones	Tiene validez electoral	Comisiones y CNE	Confundir cambios normales con fraude
Actas E-14	Registro de mesa y soporte de trazabilidad	Documento electoral relevante	Jurados y autoridades	Asumir que toda inconsistencia altera resultado
Declaración	Acto que reconoce oficialmente la fórmula elegida	Produce efecto jurídico	Consejo Nacional Electoral	Sustituirlo por opinión política
Nulidad electoral	Control judicial del acto de elección	Puede anular si se prueba causal	Consejo de Estado	Tratar la demanda como prueba de fraude

18.4. Cronología general

Fecha	Hecho	Actor	Valor probatorio	Lectura al corte
31 mayo 2026	Primera vuelta presidencial	Electores y Registraduría	Abre segunda vuelta	Derrota inicial del oficialismo
1-4 junio	Escrutinio y reclamaciones	Comisiones/CNE	Verificación institucional	Cambios sin reversión del orden
21 junio	Segunda vuelta presidencial	Electores	Resultado adverso al candidato oficialista	Prueba de alternancia
21 junio	Registraduría responde señalamientos técnicos sobre E-14	Registraduría	Aclara trazabilidad y metadatos	Controversia previa al cierre
24 junio	CNE declara la elección de Abelardo de la Espriella	Consejo Nacional Electoral	Declaración oficial	Resultado jurídicamente consolidado
26 junio	Petro y Cepeda anuncian oposición y defensa de reformas	Presidencia/Pacto Histórico	Aceptación de rol opositor	Contraprueba democrática
30 junio-4 julio	Cepeda acepta el resultado, pero objeta la investidura y anuncia desobediencia civil pacífica	Iván Cepeda	Distingue soberanía electoral, investidura y autoridad	Contraprueba electoral preservada; autoridad condicionada
5 julio	Petro convoca movilización general para el 20 de julio	Presidente	Movilización anunciada dentro de la controversia política	Evidencia plebiscitaria anunciada; jornada futura al corte
Finales de junio-julio	Persisten acusaciones de fraude y controversias	Petro y aliados	Disputa política y jurídica	Deslegitimación continuada
7 julio	Petro ratifica que entregará el poder el 7 de agosto	Presidente	Compromiso constitucional explícito	Contraprueba central
Julio (hasta 14 jul.)	Acción de nulidad promovida por aliado del petrismo	Demandante/ Consejo de Estado	Recurso legal, aún no decidido	Legítimo si respeta decisión judicial
20 julio 2026 (poscierre)	Petro presenta guardias libertadoras como desarmadas y pacíficas; llama a resistencia frente a un poder que considera ilegítimo	Presidente / Presidencia	Movilización y soberanía paralela, con límite pacífico explícito	Aumenta la tensión plebiscitaria; no acredita coerción armada

Fecha	Hecho	Actor	Valor probatorio	Lectura al corte
4 agosto 2026 (poscierre)	Discurso de Soacha: resistencia popular, “Abelardo el Breve”, expectativa de renuncia y guardias territoriales con referencia eventual a armas	Presidente	Prueba directa de escalamiento discursivo preposesión	Refuerza soberanía paralela, movilización y legitimidad coercitiva; sin estructura armada demostrada
7 agosto 2026 (cierre final)	Petro termina su mandato; De la Espriella presta juramento ante el Congreso y asume la Presidencia	Presidencia saliente / Congreso / presidente entrante	Prueba material de alternancia y sucesión constitucional	Contraprueba democrática máxima; no borra la deslegitimación previa

18.5. Primera vuelta: sospecha temprana y datos institucionales

Después de la primera vuelta, Petro cuestionó el preconteo y promovió la idea de irregularidades. La auditoría externa internacional publicada el 18 de junio de 2026 examinó los registros de preconteo y escrutinio y concluyó que, dentro del alcance de sus pruebas, los resultados presentaban un comportamiento estadístico compatible con procesos naturales de votación, sin patrones sistemáticos de manipulación, fabricación o generación artificial. ([IIDH/CAPEL, 18 jun. 2026](#))

Este resultado no demuestra que cada reclamación fuera infundada ni sustituye el escrutinio o el control judicial. Sí debilita una hipótesis de alteración masiva capaz de explicar por sí sola el orden general del resultado.

18.6. Reclamaciones y escrutinio

Las reclamaciones electorales forman parte normal del sistema. Una campaña puede pedir recuentos, corregir actas o cuestionar mesas sin desconocer la democracia.

El punto crítico es qué ocurre después de que las autoridades revisan las reclamaciones y mantienen el resultado.

En 2026 se presentaron decenas de miles de reclamaciones y el escrutinio oficial no modificó la fórmula vencedora.

Para la segunda vuelta, la Registraduría informó que, una vez concluido el escrutinio de primer nivel a cargo de jueces y notarios, el preconteo coincidió en 99,997 % con ese escrutinio. El dato no sustituye las reclamaciones ni el control judicial, pero eleva la carga de quien sostiene que existió una alteración nacional determinante. ([Registraduría Nacional, 23 jun. 2026](#))

18.7. La segunda vuelta y el margen estrecho

La segunda vuelta del 21 de junio produjo una diferencia inferior a un punto porcentual entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Un margen estrecho aumenta la necesidad de trazabilidad, auditoría y prudencia. También aumenta el riesgo de que sospechas parciales sean utilizadas para negar el conjunto.

La estrechez no invalida el resultado. La carga de la prueba recae en quien afirma que irregularidades concretas fueron suficientes para modificar la elección.

18.8. El comunicado de la Registraduría del 21 de junio

La Registraduría respondió oficialmente a afirmaciones de Petro sobre una presunta supresión de la estampilla de tiempo, el candado hash y el consecutivo en la consulta de formularios E-14. *(Registraduría Nacional, 21 jun. 2026)*

La entidad afirmó que las horas de digitalización y descarga permanecían en la metadata, en los archivos masivos y en las bitácoras internas, y sostuvo que las medidas técnicas buscaban garantizar seguridad, integridad y disponibilidad.

Esta respuesta no resuelve cualquier controversia imaginable, pero ofrece una explicación técnica oficial que debe ser refutada con evidencia equivalente, no solo con sospecha.

18.9. Declaración oficial del CNE

El 24 de junio el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución que declaró la elección de presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030. *(CNE, Res. E-3181/2026, 24 jun. 2026)*

Desde ese momento, el resultado dejó de ser únicamente preconteo o proyección. Se convirtió en una decisión electoral oficial, susceptible de control judicial.

La crítica política puede continuar, pero la negación de la condición de presidente electo exige una base jurídica y probatoria especialmente fuerte.

18.10. Iván Cepeda: aceptación del resultado y objeción a la investidura

Iván Cepeda esperó el escrutinio, reconoció el resultado, aceptó que Abelardo de la Espriella era el presidente electo y anunció que ejercería la oposición. No sostuvo que hubiera ganado, no alegó fraude y no produjo un vencedor alternativo. Esta conducta constituye una contraprueba electoral importante: demuestra que el proyecto oficialista no reaccionó como un bloque uniforme y que su candidato derrotado aceptó la soberanía expresada en las urnas. [\(El Colombiano, 24 jun. 2026\)](#)

La contraprueba electoral no desapareció con sus pronunciamientos posteriores, pero debe distinguirse del reconocimiento de la investidura y de la autoridad. Entre el 30 de junio y los primeros días de julio, Cepeda exigió que el presidente electo renunciara a su ciudadanía estadounidense y aclarara sus posibles vínculos con organismos de seguridad de ese país. Advirtió que, de no cumplirse esas condiciones, consideraría ilegal e ilegítima la posesión y promovería una desobediencia civil pacífica que incluiría no reconocer la autoridad del nuevo mandatario. ([declaración pública de Iván Cepeda, 30 jun. 2026](#)) · ([explicación posterior, 1 jul. 2026](#)) · ([comunicado original, 4 jul. 2026](#))

La objeción jurídica podía formularse y discutirse por los canales institucionales. Sin embargo, antes de su ratificación pública ya existía una decisión del Consejo Nacional Electoral contraria a la solicitud de revocar la candidatura por la doble nacionalidad y, el 1 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela fundada en el mismo problema. Esto no significa que estuvieran agotadas todas las acciones jurídicas posibles; significa que la tesis de inhabilidad había recibido decisiones institucionales adversas que no podían ser sustituidas por la sola convicción del actor político. ([CNE, 17 jun. 2026](#)) · ([Tribunal Superior de Bogotá, 1 jul. 2026](#))

La diferencia con Petro es constitutiva. Petro cuestionó la soberanía electoral, afirmó la existencia de fraude y proclamó un vencedor alternativo. Cepeda aceptó el resultado, pero condicionó el reconocimiento de la autoridad del vencedor a exigencias jurídicas y políticas propias. Su conducta no equivale al desconocimiento electoral ni elimina su valor como contraprueba en esa dimensión. Introduce, sin embargo, una tensión distinta: aceptar quién ganó y, al mismo tiempo, anticipar el desconocimiento general de su autoridad antes de que el nuevo Gobierno haya ejercido actos concretos susceptibles de resistencia.

La formulación más precisa es aceptación electoral acompañada de objeción a la investidura y desobediencia anticipada. El episodio no demuestra por sí solo una soberanía paralela ni permite atribuir al conjunto del movimiento una conducta uniforme; sí impide presentar a Cepeda como ejemplo de reconocimiento incondicional de la investidura y de la autoridad del vencedor.

18.11. Petro proclama una legitimidad electoral paralela

La contraprueba electoral producida por el reconocimiento de Cepeda no fue anulada, pero quedó contrastada por una conducta presidencial posterior: Petro sostuvo que un fraude algorítmico había alterado la elección y afirmó que el presidente aceptado por la decisión de los colombianos era Iván Cepeda.

[Publicación original de Petro](#)

La afirmación no anuló jurídicamente el resultado ni impidió por sí misma la transición. Sí transformó la disputa: el presidente saliente no se limitó a solicitar verificaciones, sino que produjo una legitimidad paralela en la que el candidato vencido representaba al pueblo verdadero y el vencedor institucional aparecía como producto de una manipulación. Esta conducta confirma la predicción central del expediente —convertir la derrota en fraude y subordinar la regla de alternancia a una verdad histórica definida por el líder—. La transmisión efectiva del mando, observada el 7 de agosto, constituye la contraprueba material que limita el alcance de esa confirmación discursiva.

18.12. Petro y la futura oposición

El 26 de junio Petro afirmó que las reformas sociales aprobadas serían bandera de la oposición y se reunió con Cepeda.

Hablar de oposición presupone que otro gobierno ejercerá el poder. Este lenguaje debilita la tesis de una voluntad inmediata de permanencia y muestra reconocimiento funcional de la alternancia. La posterior objeción de Cepeda a la investidura matiza el reconocimiento de la autoridad, pero no borra su aceptación del resultado electoral.

18.13. El desconocimiento político del vencedor

Después de la declaración oficial, Petro mantuvo la acusación de fraude y llegó a presentar a Cepeda como el presidente verdaderamente elegido.

La conducta tiene una fuerza probatoria alta para la dimensión plebiscitaria: la convicción del presidente saliente se coloca por encima del acto electoral mientras atribuye el resultado a una manipulación sistémica todavía no demostrada con escala decisiva.

La gravedad depende de sus efectos. No es igual una declaración política que una instrucción administrativa destinada a impedir la posesión.

18.14. Ratificación de la entrega del poder

Petro ratificó el 7 de julio que entregaría el poder el 7 de agosto y reconoció que el mandato popular que recibió tenía un final. (Presidencia de la República, 7 jul. 2026)

Ese anuncio constituía la contraprueba prospectiva más importante del expediente. El 7 de agosto dejó de ser una promesa: Petro terminó su mandato y la sucesión constitucional se consumó.

La conducta final debe describirse como aceptación material de la regla terminal del mandato acompañada por desconocimiento discursivo previo de la legitimidad del vencedor. La primera dimensión es una contraprueba democrática de máximo

peso; la segunda conserva valor para caracterizar la dirección plebiscitaria y autocratizante, pero no autoriza a describir una perpetuación consumada.

El 1 de julio el Gobierno nacional había reiterado, mediante comunicación institucional, su compromiso con una transición ordenada, transparente y respetuosa, y el 7 de julio Petro volvió a afirmar que entregaría el poder el 7 de agosto. Esas contrapruebas formales adquirieron dimensión material cuando el sucesor fue investido y asumió la Presidencia. (Presidencia, 1 jul. 2026; Presidencia, 7 jul. 2026; actualización final, §18.28).

18.15. Empalme y tensiones de la transición

La transición ha estado tensionada por acusaciones recíprocas. El presidente electo llegó a suspender o condicionar el empalme al sostener que no existían garantías suficientes para la entrega.

La polarización de ambas partes puede convertir procedimientos administrativos en instrumentos de confrontación.

La evaluación debe separar quién entrega información, quién la recibe y qué obstáculos pueden documentarse. Una transición conflictiva no permite atribuir automáticamente toda falla a una sola parte.

18.16. La acción de nulidad electoral

Un demandante políticamente próximo al petrismo promovió una acción de nulidad y solicitó medidas orientadas a impedir o suspender la posesión.

Acudir al Consejo de Estado es un derecho y no constituye por sí mismo una acción antidemocrática.

El punto decisivo sigue siendo acatar las decisiones judiciales. La posesión se consumó sin que la controversia jurídica sustituyera materialmente el resultado electoral; cualquier litigio pendiente conserva su cauce institucional y debe juzgarse por sus propios méritos.

18.17. Fraude: hipótesis, prueba y escala

Nivel	Ejemplo	Qué demuestra	Qué no demuestra	Respuesta correcta
Irregularidad de mesa	Error o inconsistencia puntual	Problema localizado	Fraude nacional	Recuento/corrección
Patrón regional	Errores repetidos en zona	Falla más amplia	Cambio del resultado	Auditoría y cuantificación
Falla tecnológica	Problema de plataforma	Riesgo de trazabilidad	Alteración de votos	Peritaje independiente

Nivel	Ejemplo	Qué demuestra	Qué no demuestra	Respuesta correcta
Intervención coordinada	Manipulación deliberada	Fraude organizado	Impacto decisivo por sí solo	Prueba de escala
Fraude determinante	Irregularidad superior al margen	Resultado inválido	Se presume por sospecha	Decisión judicial/electoral

18.18. La carga probatoria de Petro

Petro puede denunciar irregularidades y aportar evidencia. Pero, al desconocer al vencedor después de la declaración oficial, asume una carga particularmente alta.

Debe identificar hechos verificables, explicar el mecanismo, cuantificar su impacto y demostrar que pudieron alterar una diferencia de cientos de miles de votos.

La afirmación de un fraude algorítmico o extranjero no puede descansar únicamente en inferencias, anomalías gráficas o desconfianza previa.

18.19. La mejor defensa de Petro

- La elección fue extremadamente estrecha.
- El presidente tenía derecho a exigir máxima transparencia.
- El preconteo no tiene valor jurídico y podía ser cuestionado.
- Las campañas presentaron reclamaciones dentro del sistema.
- La acción de nulidad es un mecanismo constitucional.
- Petro afirmó que entregaría el poder y finalmente lo hizo.
- Cepeda reconoció el resultado y el proyecto inició la organización de la oposición, aunque su posterior objeción a la investidura matizó el reconocimiento de la autoridad.

18.20. La mejor crítica

- Petro anticipó sospechas y continuó acusando fraude después del escrutinio.
- La Registraduría ofreció respuestas técnicas que no han sido refutadas públicamente con prueba equivalente.
- El CNE declaró oficialmente la elección.
- Cepeda reconoció el resultado electoral, mientras Petro mantuvo el desconocimiento y proclamó un vencedor alternativo; la posterior objeción de Cepeda a la investidura no vuelve equivalentes ambas conductas.
- Presentar al candidato derrotado como presidente erosiona la legitimidad del árbitro.
- El 5 de julio Petro convocó una movilización general para el 20 de julio, presentada como defensa de las reformas sociales, despedida presidencial y “grito de independencia”. Al corte sustantivo del 14 de julio la jornada todavía no había ocurrido; la actualización poscierre del §18.27 incorpora únicamente

los elementos posteriores que sometieron a prueba los criterios ya fijados. (Caracol Radio, 5 jul. 2026)

- La entrega material no elimina el daño simbólico causado por desconocer al vencedor.

18.21. Aceptación material anunciada y desconocimiento simbólico

La conducta de Petro contiene una dualidad semejante a la observada frente a las cortes.

En el plano material entregó el poder y permitió que la transición culminara. En el plano simbólico sostuvo antes de la sucesión que el resultado era fraudulento y que el vencedor carecía de legitimidad.

La fórmula final es alternancia material consumada con deslegitimación plebiscitaria previa del resultado.

18.22. ¿Se falsó la tesis autocratizante?

Se falsó la versión más intensa que habría supuesto retención material del poder o pérdida de la alternancia; no se falsó por completo la tesis de una tendencia autocratizante contenida.

La entrega efectiva, la investidura del sucesor, la aceptación electoral de Cepeda y la organización de la oposición debilitan de manera decisiva la hipótesis de perpetuación inmediata. La objeción posterior de Cepeda a la investidura introduce una tensión sobre la autoridad, pero no convierte su aceptación del resultado en desconocimiento del voto.

El desconocimiento continuado, las acusaciones no demostradas y las solicitudes judiciales promovidas desde sectores aliados para impedir la posesión conservan, sin embargo, valor para la tesis de erosión discursiva del árbitro y del vencedor; su peso queda limitado por el hecho material de que la sucesión finalmente ocurrió.

18.23. ¿Se confirmó la tesis?

Se confirmó parcialmente en el plano discursivo y plebiscitario.

Petro reaccionó a una derrota adversa reinterpretándola como fraude sistémico y colocando su lectura por encima de la declaración institucional.

No se confirmó en el plano de la ruptura material: Petro entregó el poder, el sucesor fue investido y las impugnaciones no sustituyeron el resultado electoral. La desobediencia anticipada anunciada por Cepeda merece un juicio separado: tensiona el reconocimiento de la autoridad, pero no transforma por sí sola la alternancia consumada en ruptura material.

18.24. Matriz de evaluación al cierre documental

Dimensión	Evidencia favorable	Evidencia crítica	Fuerza	Estado	Balance
Reconocimiento	Entrega material consumada	Desconoció la legitimidad del vencedor antes de transferir	Muy alta	Mixto	Material sí; simbólico no
Fraude	Derecho a reclamar	Prueba pública insuficiente	Alta	No demostrado	Acusación excesiva
Árbitro	Usa vías institucionales	Deslegitima Registraduría/CNE	Alta	Operativo	Erosión discursiva
Empalme	Proceso permitió la sucesión	Tensiones previas	Media	Suficiente para la transferencia	No impidió alternancia
Judicial	Controversias por vías institucionales	Intentos de impedir la posesión	Media-alta	No bloqueó la investidura	Legalidad institucional prevaleció
Alternancia	Entrega material y sucesor investido	Fraude, “Abelardo el Breve” y resistencia popular previos	Máxima	Consumada	Contraprueba democrática máxima; deslegitimación previa persiste
Legitimidad coercitiva	20 jul.: guardias expresamente desarmadas y pacíficas	4 ago.: guardias territoriales con referencia eventual a armas	Media-alta	Discursivo; no materializado	Aumenta convergencia, pero no demuestra milicia

18.25. Qué hechos del desenlace debilitaron la hipótesis

- Entrega material del poder el 7 de agosto.
- Investidura constitucional del vencedor y continuidad institucional.
- Ausencia de obstrucción extrajurídica documentada de la posesión.
- Funcionamiento de Congreso, autoridades electorales y Fuerza Pública durante la sucesión.
- Persistencia de las controversias por vías jurídicas, sin sustitución material del resultado.
- Capacidad del nuevo Gobierno para ejecutar decisiones propias desde el primer día.
- El traslado de 103 internos desde Itagüí —entre ellos varios vinculados al “tarimazo”— ilustra reversibilidad administrativa; no demuestra por sí mismo ilegalidad de la política anterior ni altera su análisis probatorio específico.

18.26. Qué la fortalecería gravemente

- Obstrucción administrativa del empalme.
- Intento de impedir la posesión por vías extrajurídicas.
- Desconocimiento de una decisión judicial definitiva.
- Uso de Fuerza Pública o funcionarios para favorecer la permanencia.

- Movilización destinada a bloquear físicamente la transmisión del mando.
- Ocultamiento o destrucción de información gubernamental.
- Creación de una autoridad política paralela alrededor del candidato derrotado.

18.27. Actualización excepcional posterior al cierre: Soacha, 4 de agosto de 2026

Regla de actualización. El cierre documental sustantivo de esta edición permanece en el 14 de julio de 2026. Se incorpora esta actualización poscierre porque los hechos posteriores someten de forma directa a prueba predicciones ya formuladas sobre alternancia, soberanía paralela, movilización y eventual dimensión coercitiva; no se utilizan para reconstruir retrospectivamente la hipótesis.

El contraste temporal es relevante. El 20 de julio, una comunicación oficial de la Presidencia presentó las “guardias libertadoras” como redes *“desarmadas, pacíficas, pero en red”* y afirmó que la defensa ciudadana no debía plantearse como armas contra armas. El 4 de agosto, en Soacha, Petro mantuvo la idea de guardias subordinadas a asambleas territoriales y abrió una formulación distinta: sostuvo que, frente a agresiones violentas profundas provenientes del Estado, *“de pronto las armas tendrían que estar al servicio”* de esa ciudadanía territorial. La diferencia entre ambas formulaciones debe conservarse, no borrarse.

El mismo discurso añadió una dimensión electoral. Petro presentó el acto como inicio de una resistencia popular, mantuvo la tesis de fraude, utilizó la expresión “Abelardo el Breve” y sostuvo que el presidente electo podría no completar los cuatro años porque la población lo haría renunciar. La predicción de un mandato abreviado no constituye por sí sola una amenaza material ni demuestra un plan para derrocar al nuevo Gobierno; adquiere valor analítico por aparecer junto con el desconocimiento de legitimidad, la movilización permanente y la propuesta de estructuras populares de defensa.

Alcance probatorio. Estos hechos no demuestran la existencia de una milicia armada, una estructura de mando paralela, dotación de armas, entrenamiento, actos coercitivos ni incitación penalmente establecida al terrorismo. Tampoco autorizan a afirmar que toda “guardia” sea paramilitar. Sí elevan la densidad de la evidencia en tres dimensiones ya definidas: soberanía paralela, movilización plebiscitaria y distribución de legitimidad coercitiva. El hallazgo exacto es una aproximación discursiva a una capacidad popular de defensa potencialmente armada y subordinada a asambleas territoriales, todavía no materializada como organización coercitiva.

Contraprueba y mejor defensa. La versión oficial del 20 de julio fue explícitamente pacífica y desarmada; en Soacha Petro limitó la referencia a armas al supuesto de

agresiones violentas profundas y las subordinó a una autoridad civil territorial. Hasta esta actualización no se documenta una fuerza armada oficialista constituida ni una orden estatal ejecutada para armar civiles. Esa ausencia conserva intacto el límite que impide hablar de partido-milicia o coerción sistemática, aunque la nueva formulación obliga a reducir el peso de la contraprueba que antes descansaba en la ausencia completa de aproximaciones discursivas a coerción popular paralela.

Fuentes poscierre: [Presidencia de la República, 20 jul. 2026](#) · [El País, 6 ago. 2026](#) · [Semana, 5 ago. 2026](#)

18.28. Actualización final: alternancia material consumada, 7 de agosto de 2026

El 7 de agosto de 2026 la principal predicción de falsación pudo observarse materialmente. Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño y dio por terminado su mandato. En sus últimas palabras afirmó que “el mandato popular se respeta” y recordó que el periodo para el cual había sido elegido concluía ese día. No asistió a la ceremonia de investidura de su sucesor, coherente con el desconocimiento político que había expresado, pero tampoco intentó impedirla materialmente.

Horas después, el Congreso tomó el juramento constitucional a Abelardo de la Espriella, le impuso la banda presidencial y la Fuerza Pública rindió los honores correspondientes. La alternancia dejó así de ser una expectativa institucional y se convirtió en un hecho consumado.

Esta escena constituye la contraprueba democrática más fuerte del expediente. Falsa las hipótesis más intensas de permanencia material en el poder, obstrucción extrajurídica de la posesión o pérdida de la alternancia y reduce el alcance de cualquier lectura que convirtiera la tendencia autocratizante en captura consumada del régimen.

No falsifica, sin embargo, los hechos discursivos previos: Petro había denunciado fraude sin demostrar una alteración decisiva, negado la legitimidad del vencedor y construido una soberanía electoral paralela. La clasificación final debe sostener ambos datos a la vez: alternancia material consumada y deslegitimación plebiscitaria del resultado adverso.

18.29. Qué permite afirmar esta versión

- La elección produjo una derrota real del proyecto oficialista.
- El CNE declaró oficialmente a Abelardo de la Espriella presidente electo.
- Cepeda aceptó la derrota y se prepara para la oposición.

- Petro terminó materialmente su mandato y abandonó la Casa de Nariño el 7 de agosto.
- Abelardo de la Espriella fue investido constitucionalmente por el Congreso y asumió la Presidencia.
- Petro no asistió a la investidura y había sostenido que hubo fraude y que el vencedor carecía de legitimidad.
- Las impugnaciones permanecieron en rutas jurídicas y no impidieron la investidura ni la transferencia material del poder.

18.30. Qué no permite afirmar

- Que el fraude esté demostrado.
- Que toda reclamación sea antidemocrática.
- Que la ausencia de Petro en la ceremonia equivalga a impedir la transferencia del poder.
- Que la acción judicial sea por sí misma un golpe.
- Que la posesión borre retrospectivamente el desconocimiento discursivo del resultado.
- Que la transferencia material demuestre, por sí sola, que no existió una tendencia autocratizante durante el mandato.
- Que Colombia haya perdido la alternancia.

18.31. Conclusión del expediente electoral

La elección de 2026 obliga a abandonar una predicción binaria. Impugnar, reconocer y entregar son conductas distintas que pueden coexistir de manera contradictoria.

Petro actuó en planos distintos: negó la legitimidad democrática del vencedor y atribuyó el resultado a un fraude que no demostró públicamente con la escala necesaria, pero reconoció el final constitucional de su propio mandato y, llegado el día, dejó materialmente el poder.

La dualidad reproduce una pauta observada en otros capítulos: cumplimiento material de la regla acompañado por deslegitimación del árbitro y de la decisión adversa. El dato democrático no debe minimizarse; el dato plebiscitario tampoco debe borrarse.

La posesión ocurrió y no hubo ruptura material de la alternancia. Esto reduce de forma sustancial la intensidad de cualquier diagnóstico que supusiera retención personal del poder o sustitución efectiva del régimen. El comportamiento discursivo previo, sin embargo, conserva valor para identificar una tendencia

plebiscitaria a colocar la convicción del líder por encima del resultado institucional adverso.

El expediente electoral queda cerrado: la alternancia constitucional se consumó, el sucesor asumió y las instituciones ejecutaron la transferencia del mando. Esta es una contraprueba democrática de máximo peso y confirma que Colombia conservó capacidad efectiva de alternancia. A la vez, la negación previa de la legitimidad del vencedor permanece documentada como evidencia plebiscitaria y autocratizante. La fórmula que mejor contiene ambas realidades es democracia efectiva bajo tensión.

CAPÍTULO 19. VEREDICTO: QUÉ ES PETRO, QUÉ NO ES Y POR QUÉ IMPORTA

Veredicto sustantivo con cierre final al 7 de agosto de 2026

Balance final. El corte sustantivo del 14 de julio conserva la base probatoria del libro; las actualizaciones excepcionales posteriores solo someten a prueba criterios fijados previamente. El 7 de agosto la entrega dejó de ser anunciada: Petro terminó su mandato, el sucesor fue investido y la alternancia se consumó. Esta contraprueba material limita de manera decisiva cualquier lectura de captura o permanencia, sin borrar retrospectivamente la deslegitimación plebiscitaria documentada antes de la sucesión.

Esta conclusión no busca una fórmula equidistante entre acusación y defensa. Busca decir, con la mayor precisión compatible con la evidencia, qué fenómeno aparece cuando los ocho capítulos probatorios, las contrapruebas, la comparación conceptual y la falsación se observan juntos.

19.1. Respuesta directa a la pregunta del título

Gustavo Petro no puede ser clasificado rigurosamente como un fascista histórico en el sentido pleno del término, y su gobierno no convirtió a Colombia en un régimen fascista ni en una dictadura consolidada. Faltaron elementos esenciales de esas formas de dominación: partido-milicia, violencia oficialista organizada como método permanente, supresión sistemática de la oposición, cierre general de medios, subordinación total de las cortes, partido-Estado y eliminación material de la alternancia.

Pero esa primera respuesta sería engañosa si redujera todo lo observado a retórica áspera, polarización ordinaria o simple populismo democrático. La investigación documenta una presencia extensa, recurrente y funcionalmente conectada de mecanismos fascistizantes. No son dos o tres semejanzas retóricas ni una colección de exabruptos: forman un patrón que atraviesa el discurso, los contrapesos, la movilización, la administración, la producción de realidad, la asignación de culpa, la excepcionalidad, la política exterior y la respuesta frente a la derrota electoral.

La respuesta más honesta al título es anidada: Petro es, como clasificación principal, un populista plebiscitario de izquierda; ejerce un liderazgo cesarista y muestra una dirección autocratizante. Dentro de ese fenómeno aparece una presencia extensa —no marginal— de mecanismos fascistizantes. El calificador es fuerte, pero restringido: no equivale a identidad fascista histórica ni a régimen fascista consolidado.

19.2. Qué significa afirmar que existen muchas cosas de fascismo

Fascistizante no se utiliza como insulto, sinónimo de autoritarismo genérico ni equivalencia con Hitler o Mussolini. Designa un calificador funcional y comparativo. Su fuerza no depende de encontrar un rasgo aislado que también aparezca en otras democracias, sino de comprobar la convergencia de misión refundacional, exclusión moral, fusión plebiscitaria entre líder y pueblo, excepcionalidad institucional y ordenamiento político de la realidad y de las afinidades geopolíticas.

Cada componente admite explicaciones democráticas parciales. Lo que vuelve relevante el diagnóstico es su repetición en ámbitos independientes, su convergencia funcional y su dirección común. La investigación no demostró un plan secreto; demostró una concepción del poder capaz de producir respuestas semejantes frente a límites diferentes.

19.3. Los catorce componentes fascistizantes identificados

19.3.1. *La crisis convertida en agotamiento total de un régimen*

Petro no presenta únicamente problemas graves que requieren reformas. Con frecuencia integra desigualdad, corrupción, violencia, exclusión y crisis ambiental en el diagnóstico de un orden histórico esencialmente agotado y moralmente capturado. Esa operación tiene una base real —Colombia padece injusticias profundas—, pero su función política es refundacional: si el sistema entero está podrido, la corrección ordinaria parece insuficiente y la ruptura adquiere superioridad moral.

19.3.2. *La división de la sociedad entre pueblo auténtico y campos moralmente degradados*

La pluralidad ciudadana tiende a reorganizarse como confrontación entre el pueblo, portador de vida, derechos y cambio, y actores asociados con privilegio, oligarquía, corrupción, fascismo o muerte. No toda crítica a las élites es totalizante. El componente fascistizante aparece cuando grupos heterogéneos pierden sus diferencias y son reunidos dentro de una identidad colectiva de ilegitimidad.

19.3.3. *La transformación del adversario en enemigo*

El Expediente 1 mostró que fascista, nazi, golpista, vendido, mercader o traficante de la muerte pueden desplazar la discusión desde el argumento hacia la calidad moral del contradictor. El opositor deja de ser alguien que puede estar equivocado, defender intereses o incluso cometer abusos concretos; se aproxima a una amenaza contra el pueblo, la vida o la historia. Esa transformación reduce la obligación de persuadirlo y facilita su exclusión simbólica.

19.3.4. La identificación entre líder, pueblo y sentido de la historia

Petro no se presenta solo como administrador temporal de una mayoría, sino como intérprete privilegiado de un mandato de transformación. Su biografía política, la elección de 2022, el programa del cambio y la voluntad popular tienden a fusionarse. En esa estructura, investigar al líder puede narrarse como perseguir al pueblo, limitarlo como bloquear el mandato y derrotar su proyecto como interrumpir la historia.

19.3.5. La legitimidad plebiscitaria por encima de la mediación

La elección, la calle, la consulta y el poder constituyente reciben una densidad moral superior cuando las instituciones representativas o jurídicas producen resultados adversos. Congreso, cortes y órganos de control conservan competencia formal, pero pueden perder legitimidad política frente a una voluntad popular que el presidente afirma interpretar directamente. Esta duplicación de soberanía es uno de los hallazgos más consistentes del manuscrito.

19.3.6. La deslegitimación selectiva de los contrapesos

El problema no es que Petro critique al Congreso, al CNE, a la Fiscalía, al Banco de la República, a las cortes o a la prensa. El problema es la gramática repetida mediante la cual el límite desfavorable puede convertirse en bloqueo, golpe, conspiración, sectarismo o defensa de privilegios. La prueba de simetría mostró que la legitimidad discursiva de varias instituciones aumenta cuando facilitan la agenda y disminuye cuando la contienen.

19.3.7. La movilización oficialista presentada como voz de todo el pueblo

Las marchas y la protesta son democráticas. El componente plebiscitario aparece cuando una multitud favorable deja de ser una parte de la ciudadanía y pasa a hablar por el conjunto, mientras la movilización adversa es tolerada materialmente pero degradada como expresión de élites, manipulación o amenaza. La calle funciona entonces como plebiscito informal y como fuente correctiva frente a intermediarios.

19.3.8. La búsqueda de vías extraordinarias para superar el límite ordinario

El Decreto 0639, el uso expansivo de estados de excepción, la consulta promovida después de una negativa legislativa y la apelación al poder constituyente muestran una inclinación a buscar instrumentos superiores cuando el procedimiento ordinario no realiza el fin político. Ninguno de esos mecanismos es autoritario por definición. Su valor probatorio surge de la secuencia: derrota, deslegitimación del límite, urgencia moral y búsqueda de una vía alternativa.

19.3.9. La politización selectiva de la autonomía técnica y administrativa

La investigación no demostró una sustitución general de expertos por incompetentes. Encontró algo más plausible: patronazgo en casos concretos, requisitos desconocidos o flexibilizados, intervenciones con responsabilidad difusa y preferencia por perfiles cuya capacidad técnica convive con mayor alineación política. La colonización contemporánea no necesita destruir toda la burocracia; puede limitar la posibilidad de que el conocimiento produzca un “no” independiente.

19.3.10. La producción política de una realidad moralmente ordenada

Petro no necesita inventar sistemáticamente cifras para producir una realidad funcional al proyecto. Puede partir de datos verdaderos, elegir periodos o escalas favorables, ampliar lo que prueban y distribuir causalidad de forma asimétrica. Los avances tienen autor; los fracasos tienen herencia, bloqueo, sanciones o sabotaje. La fuente técnica conserva autoridad cuando confirma y puede volverse ideológica cuando contradice.

19.3.11. La administración asimétrica de la culpa

Los expedientes de corrupción muestran una elasticidad semejante. Para el adversario aparecen responsabilidad personal, intención y condena moral rápida; para el cercano existen contexto, estructura, presunción, traición individual y distancia respecto del proyecto. No se demostró que Petro dirigiera redes criminales. Sí se demostró que el estándar político y moral aplicado al círculo propio es menos inmediato y más complejo que el utilizado contra el contrario.

19.3.12. La indulgencia selectiva frente a autoritarismos ideológicamente próximos

La normalización diplomática con Venezuela era defendible y necesaria. La asimetría aparece en la intensidad moral: frente a Maduro predominan soberanía, sanciones, diálogo, contexto y prudencia; frente a adversarios internos o gobiernos de derecha surgen con rapidez fascismo, Hitler, golpe y responsabilidad personal. Esa diferencia no prueba complicidad, pero confirma que la distribución de condena también sigue la geografía política.

19.3.13. La convergencia funcional con trayectorias tempranas de autocratización

Mandato refundacional, enemigo moral, instituciones bloqueadoras, movilización directa, excepcionalidad y poder constituyente son mecanismos observables en procesos que posteriormente redujeron la alternancia. Colombia no recorrió la trayectoria venezolana completa y no se probó transferencia consciente de un modelo. La comparación relevante es funcional y secuencial: algunos instrumentos iniciales coinciden, aunque el resultado institucional colombiano haya sido distinto.

19.3.14. La sustitución de la soberanía electoral por una voluntad popular interpretada por el líder

El episodio de mayor intensidad plebiscitaria ocurrió cuando, después de la segunda vuelta de 2026, Petro sostuvo que había existido fraude y afirmó que el presidente que Colombia había elegido era Iván Cepeda. La afirmación se produjo frente a un resultado institucional que declaró vencedor a Abelardo de la Espriella, una elección que el Centro Carter describió como bien organizada y pacífica, y el reconocimiento de la derrota por el propio candidato oficialista. [Resultado oficial de la Registraduría](#) · [Declaración preliminar del Centro Carter, 23 jun. 2026](#) · [Publicación directa de Gustavo Petro](#)

La relevancia fascistizante no reside en la mera formulación de una denuncia electoral, conducta que también puede aparecer en otras familias autoritarias. Reside en la operación política completa: el voto deja de ser soberano cuando contradice la misión histórica; el vencedor jurídico es degradado a usurpador; y el líder se reserva la autoridad de revelar una voluntad popular más auténtica que la expresada por el escrutinio. Así surge una doble legitimidad: un presidente reconocido por las reglas y otro proclamado como verdadero por quien afirma encarnar al pueblo. La entrega física del cargo puede evitar una ruptura consumada, pero no borra la lesión democrática producida por negar que el adversario obtuvo legítimamente el mandato.

19.4. Cómo deben leerse los catorce componentes: cinco dimensiones y no catorce pruebas independientes

La enumeración de catorce componentes facilita la trazabilidad, pero puede crear una ilusión de independencia. Para evitarla, se agrupan en cinco dimensiones: (1) refundacional y redentora: crisis total, misión histórica y promesa de ruptura; (2) moral y excluyente: pueblo auténtico, enemigo, culpa asimétrica e inversión acusatoria; (3) plebiscitaria y personalista: identificación líder-pueblo, calle como totalidad y soberanía electoral reinterpretada; (4) institucional y excepcional: degradación de contrapesos, atajos extraordinarios y politización de autonomías; y (5) epistemológica y geopolítica: selección de datos, causalidades asimétricas e indulgencia frente a autoritarismos aliados.

El calificador fascistizante no procede de que cada dimensión sea exclusiva del fascismo. Procede de su convergencia con una misión de redención, una comunidad moral homogénea, un liderazgo que pretende interpretar al pueblo y una dirección que reduce el pluralismo cuando este frustra el proyecto. Un episodio aislado puede ser populismo, polarización o mal gobierno; el argumento solo aparece en la arquitectura conjunta.

Resultado de la auditoría: el número catorce describe manifestaciones observables, no una escala cuantitativa de fascismo. La conclusión no afirma que Petro sea “más fascista” porque acumule casillas; sostiene que la convergencia entre cinco dimensiones vuelve pertinente —con límites explícitos— el calificador fascistizante.

19.5. Por qué la categoría de simple populismo democrático no basta

El populismo explica la división pueblo-élite, la centralidad del líder, la moralización y la apelación directa. La autocratización explica la erosión gradual de límites. Pero ambas categorías, tomadas aisladamente, describen peor la convergencia entre misión redentora, enemigo moral, fusión líder-pueblo, excepcionalidad, cierre epistemológico e indulgencia selectiva frente a autoritarismos aliados.

Llamar a Petro únicamente populista democrático produciría una pérdida analítica: describiría la base de su legitimidad y omitiría la dirección de varios actos.

Autocratización resulta necesaria para observar erosiones, intentos y desplazamientos aunque no hayan culminado. Fascistizante solo añade valor cuando explica la convergencia de las cinco dimensiones mejor que esas categorías rivales; si deja de hacerlo, debe retirarse.

19.6. La inversión acusatoria: el fascismo siempre está en el otro

Existe una paradoja que esta conclusión no puede suavizar. Petro convirtió la palabra fascismo en una categoría de exclusión moral aplicada a adversarios de derecha, sectores conservadores y, durante la campaña de 2026, a Abelardo de la Espriella. Llegó a afirmar que solo la utilizaba contra quienes “realmente son fascistas” y posteriormente describió a De la Espriella como “fascista defensor del paramilitarismo”. ([Petro, 20 nov. 2024](#); [Petro, 1 jun. 2026](#))

Sin embargo, esa certeza acusatoria no estuvo acompañada por una demostración comparable a la exigida en este libro: criterios definidos de antemano, corpus suficiente, contraste de contextos, búsqueda de contrapruebas, gradación del hallazgo y condiciones explícitas de falsación. La etiqueta fue pronunciada como veredicto antes de que existiera un expediente capaz de sostenerla. La ubicación a la derecha, el conservadurismo moral, la defensa de políticas severas de seguridad, la retórica punitiva o incluso la presencia de impulsos iliberales pueden ser asuntos graves; no constituyen por sí solos una demostración de fascismo.

Cuando se aplica la matriz al acusador, en Petro aparecen documentados de manera reiterada y convergente catorce mecanismos: crisis totalizante, pueblo auténtico, enemigo moral, líder intérprete de la historia, legitimidad plebiscitaria, degradación selectiva de contrapesos, movilización presentada como totalidad, excepcionalidad, politización de la autonomía técnica, administración de la realidad, distribución asimétrica de la culpa, indulgencia frente al autoritarismo aliado,

convergencia con trayectorias de autocratización y sustitución de la soberanía electoral por una voluntad popular revelada por el líder. El manuscrito no ha construido expedientes equivalentes sobre todos los acusados por Petro y, por tanto, no puede afirmar comparativamente que ellos posean menos rasgos; sí puede constatar que las acusaciones presidenciales no fueron presentadas con una demostración pública comparable.

Esta asimetría no permite afirmar que De la Espriella ni todos los adversarios de Petro sean liberales democráticos impecables, ni descarta que alguno pueda exhibir rasgos autoritarios, iliberales o fascistizantes. Para establecerlo sería necesario construir expedientes independientes con el mismo estándar. Permite concluir algo distinto y más sólido: Petro empleó la acusación de fascismo sin demostrarla con criterios consistentes, mientras su propio comportamiento sí soporta una acumulación probatoria que la vuelve analíticamente pertinente.

En el caso de Abelardo de la Espriella, la secuencia revela además la función completa de la etiqueta. Primero fue convertido en amenaza fascista; después de su victoria, esa caracterización facilitó afirmar que no podía representar auténticamente al pueblo y que el presidente verdadero era el candidato derrotado. La palabra dejó de ser una descripción discutible y se volvió una herramienta de excomunión democrática: si el adversario es fascista, su triunfo puede narrarse no como alternancia, sino como usurpación; y si su triunfo es usurpación, el líder queda moralmente autorizado para proclamar una soberanía paralela.

La acusación contribuyó, por tanto, a una dinámica fascistizante: expulsó al contradictor del campo de la legitimidad, transformó una competencia electoral en lucha existencial y preparó el desconocimiento del mandato cuando el “enemigo” ganó. Llamar fascista a alguien no es en sí mismo fascismo; adquiere relevancia en este caso por su función dentro de una secuencia de exclusión moral, negación electoral y proclamación de una soberanía paralela.

El hallazgo más incómodo del libro es este: Petro utilizó el antifascismo como veredicto contra adversarios a quienes no sometió a criterios explícitos, mientras su propio liderazgo sí puede ser examinado mediante un corpus, contrapruebas y condiciones de falsación que revelan una concentración densa y funcional de mecanismos fascistizantes. El contraste probado es entre estándares de demostración y entre usos políticos de la categoría; no es todavía un ranking comparativo de fascismo entre Petro y todos sus contradictores.

19.7. Lo que no se demostró y limita el diagnóstico

La conclusión debe ser enfática sin afirmar más de lo probado. La investigación no demostró los siguientes elementos:

- Un ultranacionalismo palingenético como doctrina dominante, una comunidad nacional-racial orgánica o un proyecto imperial y militarista comparable al núcleo histórico del fascismo europeo.
- Un partido-milicia o una estructura civil armada ya constituida y dirigida por el Gobierno para eliminar adversarios.
- Violencia oficialista organizada como método estable de conquista o conservación del poder.
- Encarcelamiento sistemático de opositores por su condición política.
- Cierre general de medios, censura total o monopolio estatal de la información.
- Subordinación completa del Congreso, de las cortes, del Banco de la República o de los órganos electorales.
- Partido-Estado consolidado, totalización administrativa o desaparición del pluralismo social.
- Captura acreditada del conteo electoral o capacidad del Ejecutivo para imponer unilateralmente un resultado.
- Reección, prolongación formal del mandato o reforma destinada a mantener personalmente a Petro en la Presidencia.
- Eliminación consumada de la alternancia o transformación de Colombia en régimen fascista consolidado.

La actualización poscierre de Soacha obliga a precisar este límite. Ya no puede afirmarse simplemente que no existieron aproximaciones discursivas a una coerción popular paralela: el presidente propuso guardias sometidas a asambleas territoriales y admitió, bajo un supuesto defensivo extremo, una eventual relación con armas. Lo que sigue sin demostrarse es el salto decisivo entre discurso y estructura: no hay evidencia de partido-milicia, fuerza civil armada constituida, cadena de mando operativa, dotación, entrenamiento ni violencia organizada como método de conservación del poder.

Estas ausencias impiden utilizar fascismo como identidad del dirigente o clasificación total del régimen. No vuelven irrelevantes los mecanismos documentados: delimitan la naturaleza y el alcance del fenómeno y obligan a distinguir entre repertorio funcional, dirección autocratizante y consolidación.

19.8. El desenlace material no borra la trayectoria

Una de las defensas más fuertes de Petro sostiene que, como las cortes decidieron, el Congreso resistió, la prensa investigó, la oposición ganó la elección y el sucesor

finalmente asumió, no existió una dirección autocratizante. La posesión del 7 de agosto fortalece de manera decisiva esa defensa frente a cualquier hipótesis de ruptura consumada. No vuelve democráticamente neutras las conductas previas del poder, pero la obediencia material al límite y la alternancia efectiva son contrapruebas que deben disminuir la intensidad del diagnóstico.

La diferencia frente al fascismo consolidado no es solo de grado. Faltan elementos constitutivos del fascismo histórico, entre ellos ultranacionalismo palingenético dominante, partido-milicia y violencia política como método central. Lo demostrado es una convergencia funcional de mecanismos dentro de un populismo autocratizante; las ausencias constitutivas impiden atribuir identidad fascista plena y la alternancia efectivamente consumada confirma que no existió un régimen consolidado.

19.9. El papel decisivo de los contrapesos colombianos

La investigación no describe solamente a Petro. También describe a una democracia que fue capaz de limitarlo. El Consejo de Estado suspendió actos; la Corte Constitucional restringió emergencias; el Congreso negó, modificó y aprobó reformas; el Banco de la República mantuvo autonomía; el CNE continuó actuaciones; los medios publicaron investigaciones; la oposición conservó gobiernos territoriales y capacidad electoral; y el 7 de agosto de 2026 el candidato opositor declarado vencedor asumió efectivamente la Presidencia.

Estos hechos son contrapruebas reales y no simples obstáculos que deban descontarse para proteger la tesis. La transferencia final no fue un detalle ceremonial: demuestra que el sistema conservó la capacidad material de producir alternancia contra el partido de gobierno. Explica por qué la clasificación correcta es tendencia autocratizante contenida y no autoritarismo consolidado. La advertencia de que la misma concepción del poder podría producir resultados más graves en un sistema con defensas débiles es un contrafactual informado por la comparación, no una prueba sobre lo que Petro habría hecho necesariamente.

19.10. La alternancia de 2026: la contraprueba material decisiva

Las elecciones de 2026 produjeron la prueba más exigente y el 7 de agosto aportó su desenlace material. Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño y dio por terminado su mandato; horas después, Abelardo de la Espriella prestó juramento ante el Congreso y asumió la Presidencia. Petro no asistió a la ceremonia, pero no bloqueó materialmente la sucesión. La alternancia quedó consumada.

El reconocimiento de Cepeda debe conservarse en su dimensión exacta: aceptó quién ganó y no proclamó fraude ni vencedor alternativo. Sus pronunciamientos posteriores condicionaron la legitimidad de la investidura y el reconocimiento de la autoridad, por lo que impiden presentarlo como aceptación incondicional del futuro Gobierno; no lo vuelven equivalente al desconocimiento de la soberanía electoral realizado por Petro.

Al mismo tiempo, la persistencia de acusaciones de fraude después del escrutinio, la afirmación de que Iván Cepeda era el presidente verdaderamente elegido, la deslegitimación de Abelardo de la Espriella y la proclamación de una soberanía electoral paralela fortalecen la dimensión plebiscitaria, moral-excluyente y autocratizante. Esos hechos ya están cerrados y no dependen de la ceremonia posterior.

La actualización posterior al cierre refuerza esa tensión. En Soacha, Petro combinó resistencia popular, persistencia de la ilegitimidad electoral, la expectativa de un mandato abreviado del vencedor y guardias territoriales cuya formulación llegó a admitir una eventual dimensión armada bajo un supuesto defensivo. Ninguno de esos elementos produjo una ruptura material de la alternancia; juntos sí aumentan la convergencia entre soberanía paralela, movilización y legitimidad coercitiva en el momento inmediatamente anterior a la transferencia del poder.

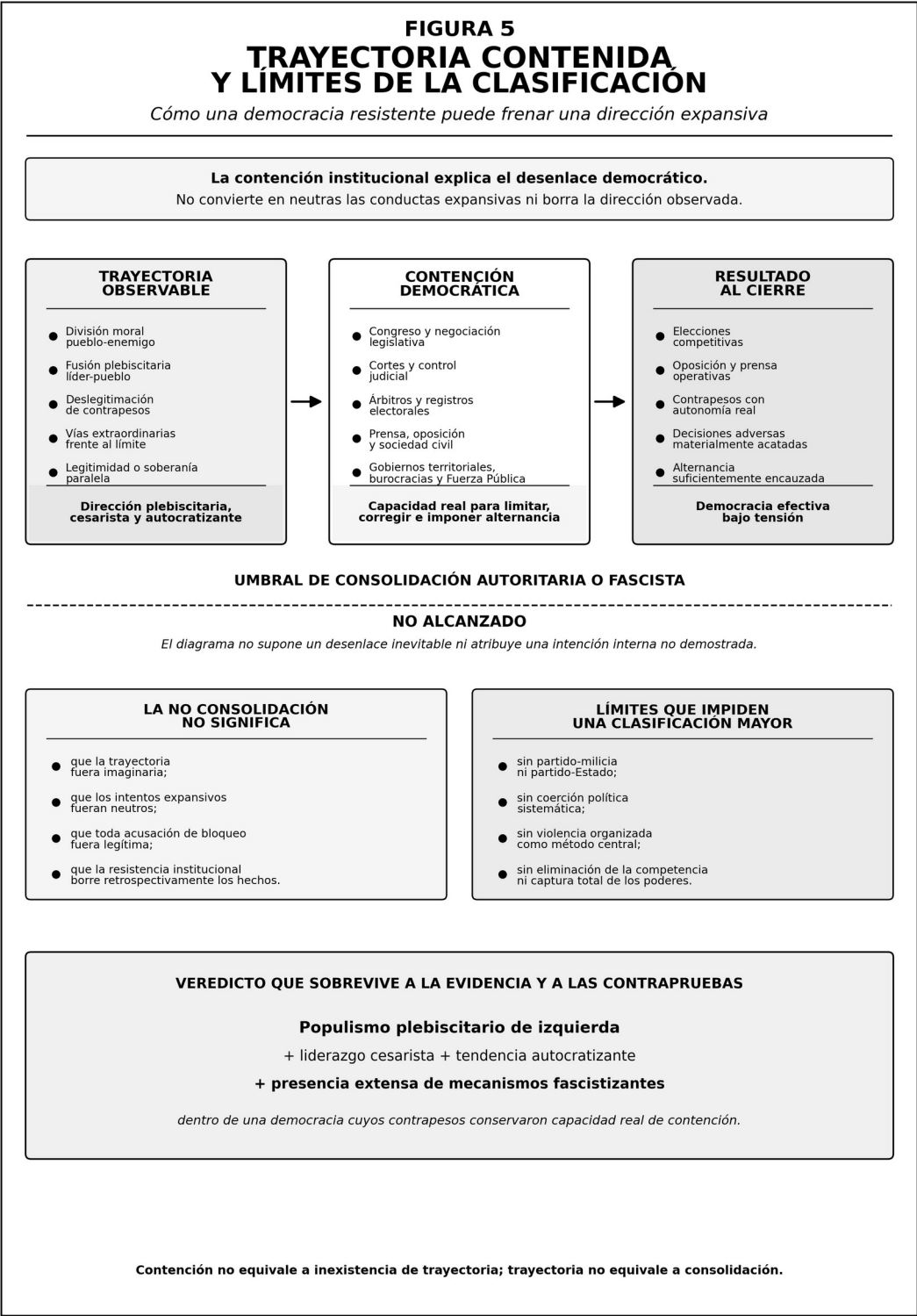
El balance final es deliberadamente asimétrico. La transferencia pacífica falsifica cualquier lectura que suponga permanencia material, golpe continuista o pérdida de la alternancia y fortalece de forma máxima la contraprueba democrática. No borra retrospectivamente el desconocimiento discursivo ya ocurrido. El libro puede cerrar precisamente porque distingue entre trayectoria, resultado y capacidad de contención institucional.

19.11. Clasificación final por capas

Capa	Diagnóstico	Evidencia principal	Límite
Base	Populismo plebiscitario de izquierda	División pueblo/élite, mandato moral y apelación directa	Coexistió con elecciones competitivas y alternancia consumada
Forma de liderazgo	Cesarismo plebiscitario	Líder como intérprete privilegiado del pueblo y de la historia	No produjo subordinación total de poderes
Dirección institucional	Tendencia autocratizante	Erosión de límites, excepcionalidad y búsqueda de vías superiores	Intentos contenidos y acatamiento material relevante
Calificador restringido	Presencia extensa de mecanismos fascistizantes	Crisis, enemigo, redención, movilización y degradación del pluralismo	Sin partido-milicia ni coerción sistemática; propuesta poscierre de guardias no materializada
Estado del régimen	Democracia efectiva bajo tensión	Contrapesos, oposición, prensa, competencia electoral y sucesión constitucional reales	Alternancia constitucional consumada; los contrapesos conservaron capacidad efectiva

La fórmula más parsimoniosa que sobrevive a la evidencia, la defensa, la crítica y la falsación es anidada: populismo plebiscitario de izquierda como base explicativa; liderazgo cesarista como forma; tendencia autocratizante como dirección; y presencia extensa —no marginal— de mecanismos fascistizantes como calificador secundario restringido. Colombia siguió siendo una democracia efectiva porque sus instituciones conservaron capacidad real de contención.

La expresión presencia extensa no significa identidad total. Los mecanismos aparecen ampliamente, pero no constituyen la ideología ni la arquitectura institucional completa del fascismo y tampoco son exclusivos de él. Contenida no significa inocua: indica que la dirección encontró límites efectivos y que esos límites modificaron el resultado.



19.12. Veredicto final: más que simple populismo, menos que fascismo consolidado

Petro no es un fascista histórico y Colombia no fue transformada en una dictadura. Pero negar por ello la relevancia del fascismo sería tan impreciso como equiparlo sin matices con los regímenes del siglo XX. La evidencia muestra que tomó y reprodujo numerosos mecanismos estructurales de esa familia política: la crisis como justificación de ruptura, el pueblo como unidad moral, el adversario como enemigo, el líder como intérprete histórico, la calle como soberanía superior, el límite como conspiración, la excepcionalidad como atajo, la autonomía técnica subordinada selectivamente, la realidad y la culpa ordenadas por utilidad política, la indulgencia frente al autoritarismo aliado y, en el punto de mayor intensidad, la sustitución del resultado electoral por una voluntad popular que el propio líder se atribuyó el derecho de interpretar.

La conclusión no debe esconderse detrás de una cautela vacía: Petro tiene muchas cosas de fascismo en el sentido funcional definido por este libro. Aparecen en su lenguaje, en la arquitectura moral del proyecto y en varias respuestas frente a los límites. No se afirma que posea la ideología fascista completa ni que esos mecanismos sean exclusivos de ella. Faltan elementos constitutivos necesarios para convertir el calificador en identidad fascista plena, y faltó la consolidación institucional necesaria para hablar de régimen fascista.

La paradoja final es difícil de eludir: varios adversarios recibieron de Petro la condena de fascistas sin una demostración acumulativa equivalente, mientras el propio presidente reunió —en lenguaje, método de legitimación y respuesta frente a los límites— un patrón más amplio de los mecanismos que decía combatir. Esto no vuelve democráticos a todos sus contradictores; vuelve insostenible que el antifascismo presidencial sea aceptado como prueba de inocencia conceptual.

Petro no solo llamó fascista al adversario. En el momento decisivo utilizó esa descalificación para negar que el adversario pudiera haber sido elegido legítimamente. Allí la acusación y la práctica se tocaron: el fascismo fue siempre el nombre del otro, pero la exclusión del otro de la comunidad democrática fue ejercida desde el propio poder.

La lección más importante excede a una persona. El fascismo del siglo XXI no tendría que regresar con uniformes, saludos, nacionalismo racial o copia literal de

entreguerras. Puede presentarse como inclusión, justicia, vida, participación y reparación, mientras divide moralmente a la sociedad, fusiona al líder con el pueblo y enseña que las reglas pierden legitimidad cuando impiden realizar la misión histórica. Reconocer esa posibilidad no degrada las causas progresistas; protege la democracia de cualquier proyecto que pretenda monopolizarlas.

La pregunta del título no se resuelve escogiendo una de dos etiquetas excluyentes. Gustavo Petro es, como clasificación principal, un populista plebiscitario de izquierda con liderazgo cesarista y tendencia autocratizante; al mismo tiempo, su ejercicio del poder exhibe una presencia extensa, adaptada y contenida de mecanismos fascistizantes del siglo XXI. La democracia colombiana sobrevivió porque faltaron elementos constitutivos del fascismo histórico y los contrapesos impidieron su consolidación.

NOTA FINAL. LA ESCENA FINAL: LO QUE CONFIRMÓ Y LO QUE NO BORRÓ

Actualización final y cierre de contenido: 7 de agosto de 2026

El último movimiento ocurrió. El 7 de agosto de 2026 Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño, cerró públicamente su mandato y afirmó que “el mandato popular se respeta”. Horas después, Abelardo de la Espriella prestó juramento ante el Congreso, recibió la banda presidencial y asumió como jefe de Estado. La sucesión constitucional se consumó.

Esta es la contraprueba democrática más fuerte de toda la investigación. Falsa la hipótesis de que Petro hubiera decidido conservar materialmente la Presidencia, descarta una ruptura efectiva de la alternancia y confirma que los contrapesos colombianos conservaron capacidad suficiente para hacer prevalecer el relevo constitucional. La ausencia de Petro en la ceremonia no equivale a impedirla.

La escena final tampoco reescribe retrospectivamente los meses anteriores. Petro denunció fraude sin demostrar una alteración decisiva, negó la legitimidad del vencedor, atribuyó la soberanía electoral verdadera a su propio candidato y, en sus últimas semanas, articuló resistencia, mandato abreviado y guardias territoriales en los términos examinados. Esos hechos conservan su valor discursivo y funcional; la transferencia efectiva impide convertirlos en prueba de captura consumada del Estado.

El mismo 7 de agosto apareció una comprobación menor, pero ilustrativa, de reversibilidad institucional: 103 internos de Itagüí clasificados como de alto perfil o máxima peligrosidad fueron trasladados a otros centros penitenciarios y entre ellos se encontraban varios vinculados al “tarimazo”. El hecho no convierte retrospectivamente la política de paz de Petro en ilícita ni prueba una intención fascista. Sí muestra que, en el tránsito inmediato entre los dos gobiernos, una disposición penitenciaria asociada a esa política pudo ser alterada, reforzando la conclusión de que no existía una captura material del aparato estatal que impidiera la alternancia y la reversión de decisiones.

Aquí termina el contenido de esta primera edición. La última escena confirma las dos mitades de la tesis sin obligarlas a confundirse: Petro dejó el poder y Colombia preservó la alternancia; al mismo tiempo, la trayectoria examinada conserva una presencia extensa de mecanismos fascistizantes dentro de un populismo plebiscitario de izquierda, con liderazgo cesarista y tendencia autocratizante. La democracia efectiva bajo tensión no fue una fórmula de cautela: fue el resultado que los hechos del 7 de agosto terminaron por demostrar.

APÉNDICES DE VERIFICACIÓN

Estos apéndices conservan los elementos indispensables para auditar la clasificación sin interrumpir el recorrido principal con el aparato documental exhaustivo, que se publica como suplemento digital.

APÉNDICE I. AUDITORÍA ADVERSARIAL INTEGRAL

1. Propósito y regla de la auditoría

La auditoría no preguntó cómo defender la conclusión, sino cómo refutarla. El manuscrito fue leído desde tres posiciones críticas: historia comparada del fascismo, ciencia política de la autocratización y derecho constitucional colombiano. Cada perspectiva debía formular la objeción más fuerte, identificar afirmaciones que excedieran la prueba y exigir una corrección visible.

Regla aplicada: una objeción no se responde aumentando el tono, sino reduciendo la ambigüedad. Cuando la crítica mostró un defecto real, el manuscrito modificó la formulación. La conservación del trabajo acumulado no convierte errores o exageraciones en piezas intocables.

2. Lectura del historiador del fascismo

La objeción principal es el estiramiento conceptual. El fascismo histórico no se agota en polarización, liderazgo o enemistad: incluye, según escuelas distintas, renacimiento nacional, ultranacionalismo, movilización de masas, violencia política organizada, partido-movimiento y destrucción efectiva del pluralismo. Petro no reúne varios de esos elementos y su genealogía, programa y coalición pertenecen a otra familia ideológica.

Corrección aplicada: el libro abandona cualquier insinuación de que la distancia sea solamente temporal o cuantitativa. Algunas diferencias son constitutivas.

“Fascistizante” queda restringido a mecanismos funcionales y a una trayectoria parcial; no equivale a fascismo histórico, neofascismo ni identidad taxonómica plena.

3. Lectura del politólogo de la autocratización

La objeción principal es la competencia entre categorías. Pueblo puro contra élite corrupta, representación exclusiva del pueblo, ataque a árbitros y erosión gradual bajo formas legales están ampliamente descritos por la literatura sobre populismo antipluralista y autocratización. Si esas categorías explican el caso, introducir fascismo puede añadir dramatismo sin añadir capacidad explicativa.

Corrección aplicada: la clasificación se vuelve anidada. Populismo plebiscitario es la base; tendencia autocratizante describe la dirección institucional; liderazgo cesarista describe la relación personal con el mandato; fascistizante solo califica la convergencia entre misión refundacional, enemigo moral, fusión líder-pueblo, movilización-excepcionalidad y subordinación antipluralista de límites. Si esa convergencia no aporta diferencia, el término debe retirarse.

Segunda objeción: los catorce componentes podían duplicar una misma premisa y crear una falsa impresión cuantitativa. Corrección aplicada: se agrupan en cinco dimensiones y se declara que no son catorce pruebas independientes.

4. Lectura del constitucionalista colombiano

La objeción principal es confundir el uso de instrumentos constitucionales con autocratización. La movilización, la crítica a las cortes, la propuesta de una asamblea constituyente, las reclamaciones electorales y los estados de excepción pueden ser legítimos. La Constitución prevé reforma por Congreso, referendo o asamblea constituyente y somete las emergencias a control judicial automático.

Corrección aplicada: ningún instrumento cuenta por sí mismo. La relevancia aparece en la secuencia y la función: insistencia después del rechazo procedimental, imputación de ilegitimidad al árbitro, búsqueda de sustitución del procedimiento, negativa a aceptar el resultado o presentación de una voluntad política como superior a las condiciones constitucionales. La Corte que controla una emergencia no prueba autoritarismo del Gobierno; la reacción frente al control puede aportar evidencia si forma parte de un patrón.

5. Hallazgos metodológicos transversales

La auditoría identificó cinco riesgos adicionales: circularidad; doble conteo; confusión entre autenticidad de la fuente y verdad de la interpretación; contrafactuales presentados como prueba; y comparación asimétrica con adversarios no estudiados mediante expedientes equivalentes.

Correcciones aplicadas: se reconocen efectos falsadores reales; se distinguen cinco dimensiones; se recuerda que una fuente oficial acredita la existencia de un acto o declaración, no necesariamente su interpretación; los escenarios sobre instituciones débiles se califican como contrafactuales; y la inversión acusatoria se limita a comparar estándares de demostración, no a declarar que todos los acusados por Petro poseen menos rasgos fascistizantes.

6. Matriz de objeciones y resultado

Objeción adversarial	Riesgo	Corrección aplicada	Estado residual
El concepto de fascismo está estirado	Convertir fascismo en sinónimo de autoritarismo	Mínimo discriminante y reconocimiento de ausencias constitutivas	Controlado, no eliminado
Populismo y autocratización explican mejor el caso	Redundancia conceptual	Clasificación anidada; fascistizante como calificador secundario	Controlado
Catorce componentes duplican una misma	Inflación cuantitativa	Agrupación en cinco dimensiones	Controlado

Objeción adversarial	Riesgo	Corrección aplicada	Estado residual
premisa			
Facultades constitucionales son tratadas como síntomas	Sesgo contra la acción política legítima	Umbral funcional y secuencial	Controlado
La supervivencia institucional confirma siempre la tesis	Circularidad	Reconocimiento explícito del efecto falsador de obediencia, rectificación y alternancia	Controlado; la alternancia observada opera como contraprueba
Se compara a Petro con adversarios no auditados	Comparación asimétrica	Contraste limitado a cargas de demostración	Controlado
Una fuente oficial se trata como verdad completa	Confusión epistemológica	Separación entre autenticidad, hecho e interpretación	Controlado
El escenario de instituciones débiles se usa como prueba	Contrafactual no verificable	Reclasificación como advertencia comparativa	Controlado
La negación electoral se presenta como exclusivamente fascista	Error de especificidad	Se trata como evidencia antipluralista fuerte cuyo valor fascistizante depende del conjunto	Controlado

7. Correcciones sustantivas aplicadas durante la auditoría

- Se incorporó un mínimo discriminante en la introducción.
- Se declaró que las ausencias frente al fascismo histórico son también constitutivas.
- Se adoptó una clasificación principal y un calificador secundario.
- Los catorce componentes se reagruparon en cinco dimensiones.
- Se reforzó la legitimidad prima facie de movilización, reforma constitucional, crítica institucional y emergencia.
- Se limitó la comparación con quienes Petro llamó fascistas.
- Se preservó la fuerza del desconocimiento electoral, pero se negó que este sea exclusivamente fascista.
- Se calificaron expresamente los contrafactuales y se ampliaron los riesgos de sesgo.

8. Veredicto adversarial

La auditoría no refuta la conclusión principal, pero sí obliga a formularla con mayor precisión. La evidencia sostiene con alta confianza el populismo plebiscitario, el liderazgo cesarista y la

tendencia autocratizante. Sostiene con confianza moderada-alta la presencia extensa de mecanismos funcionalmente fascistizantes, siempre que el término permanezca subordinado a un mínimo discriminante, no se confunda con identidad histórica plena y no se utilice para contar dos veces la misma evidencia.

El punto más fuerte de la tesis es la convergencia entre enemistad moral, representación exclusiva del pueblo, degradación de límites heterogéneos y desconocimiento de la legitimidad del vencedor electoral. El punto más vulnerable sigue siendo la especificidad del adjetivo fascistizante frente a explicaciones rivales. La auditoría no oculta esa vulnerabilidad: la convierte en condición explícita de validez.

Control electoral adicional: la aceptación del resultado por Iván Cepeda se conserva como contraprueba plena en la dimensión del voto. Su posterior objeción a la investidura se registra separadamente como condicionamiento de la autoridad. Esta separación evita tanto ocultar una tensión democrática como equipararla indebidamente con la proclamación presidencial de un vencedor alternativo.

Estado editorial: el corte sustantivo base permanece en el 14 de julio de 2026. La primera edición incorporó únicamente las actualizaciones excepcionales del 20 de julio, 4 de agosto y 7 de agosto porque sometían directamente a prueba criterios fijados antes del desenlace. La transmisión material del poder ya fue observada y funciona como contraprueba democrática de máximo peso. El contenido de esta edición queda definitivamente cerrado el 7 de agosto de 2026; hechos posteriores no reabren retrospectivamente la hipótesis y solo podrán tratarse en una edición futura o en notas históricas externas.

APÉNDICE II. MAPA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS ETAPAS Y LOS CASOS COLOMBIANOS

Etapas	Casos y líneas de investigación
Crisis y frustración	Desigualdad, corrupción, falsos positivos, exclusión, abusos, desempleo y desconfianza institucional.
División moral	Pueblo consciente frente a élites, ricos, fascistas, medios, técnicos e instituciones del orden anterior.
Enemigo colectivo	Fuerza Pública, empresarios, banca, oposición, prensa y órganos de control presentados como bloques.
Líder redentor	Petro como sintetizador del cambio, intérprete de la historia y vehículo de una misión colectiva.
Movilización emocional	Marchas, Primera Línea, calle, poder popular, consulta y discurso constituyente.
Deslegitimación	Fascista, golpista, ignorante, corrupto, enemigo del cambio y categorías equivalentes.
Legalidad más presión	Elecciones, decretos, consulta popular y movilización para superar decisiones institucionales.
Ataque a contrapesos	Congreso, CNE, cortes, Fiscalía, Procuraduría, Banco de la República y prensa.
Colonización	Cambios de requisitos, nombramientos, debilitamiento de carreras y lealtades personales.
Alternancia	Continuidad del proyecto, posible fraude, legitimidad de sucesores y aceptación de derrota.
Coerción	No consolidada; examinar límites, resistencias y episodios de presión o estigmatización.

Este mapa no convierte cada caso en prueba concluyente. Su función es orientar la búsqueda y evitar que los episodios se estudien como anécdotas aisladas. El peso de la hipótesis dependerá de la convergencia, repetición y dirección del conjunto.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL Y FUENTES PRINCIPALES

La bibliografía de esta edición reúne las fuentes de mayor carga probatoria y la literatura conceptual transversal. Las referencias conservan vínculos activos en la versión electrónica. El suplemento documental digital contiene las fichas de verificación, los inventarios completos y los enlaces de control.

Formato de esta edición: autor o institución, fecha, título o identificación completa del acto y procedencia. Cuando existe una versión digital estable, el vínculo permanece activo en la edición electrónica y se incorpora al suplemento documental. Las providencias incluyen corporación, sección o sala, radicación y tipo de decisión cuando la fuente lo permite; las series estadísticas conservan periodo y documento de origen.

CAPÍTULO 5. Etiquetamiento moral y construcción del enemigo

- Presidencia de la República de Colombia. (13 abril 2026). Consejo de ministros sobre relaciones Colombia–Ecuador: palabras del presidente Gustavo Petro. [Fuente oficial](#)
- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. (31 enero 2025). Sentencia de tutela, rad. 11001-03-15-000-2025-00009-00, Hannah Escobar Correa contra Presidente de la República. [Registro oficial de sala](#); copia de consulta conservada en el archivo documental.
- Corte Constitucional. (2025). Sentencia SU-432 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Petro Urrego, Gustavo. (17 marzo 2025). Publicación sobre expertos, ciencia y “traficar con la muerte”. [Publicación original en X](#).
- Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. (19 marzo 2025). Carta de solicitud de rectificación, copia conservada en el expediente documental. [Cuenta institucional de la ACSC](#).
- Petro Urrego, Gustavo. (29 agosto 2023). Respuesta “Esto decía Hitler” a declaraciones de Javier Milei. [Publicación original en X](#).
- La Pizarra / Diario Red. (22 marzo 2025). Entrevista a Gustavo Petro: “Milei es un nostálgico de Mussolini”. [Transcripción de la entrevista original](#).
- Petro Urrego, Gustavo. (7 junio 2026). Respuesta “Heil Hitler” a una columna de Felipe Zuleta. [Publicación original en X](#).
- Presidencia de la República. (10 junio 2026). Debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU: explicación presidencial sobre la publicación “Heil Hitler”. [Transcripción oficial](#).
- Petro Urrego, Gustavo. (6 julio 2026). Publicación “alcalde del fascio” durante la controversia por el mural de Medellín. [Publicación original en X](#).
- Petro Urrego, Gustavo. (20 noviembre 2024). Publicación que afirma aplicar la palabra fascismo únicamente a quienes considera “realmente fascistas”. [Publicación original en X](#).

- Petro Urrego, Gustavo. (1 junio 2026). Publicación que presenta a Abelardo de la Espriella como “fascista defensor del paramilitarismo”. [Publicación original en X](#).

CAPÍTULO 6. Contrapesos, bloqueo y conspiración

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. (18 junio 2025). Auto de medida cautelar, rad. 11001-03-28-000-2025-00086-00, Decreto 0639 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-383 de 2023. [Fuente oficial](#)
- Corte Constitucional. (2025). Sentencia SU-432 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (11 marzo 2025). Declaración sobre consulta popular y “bloqueo institucional” contra el voto de 2022. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (26 junio 2025). “La Reforma Laboral debe aplicarse ya”: aprobación presentada como triunfo del pueblo y de la movilización. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (25 junio 2025). Derogatoria del Decreto 0639 mediante Decreto 0703 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (8 octubre 2024). Alocución sobre la investigación del CNE como “primer paso de un golpe de Estado”. [Fuente oficial](#)
- Consejo de Estado. (23 agosto 2024). Competencia del CNE para investigar y sancionar administrativamente la campaña presidencial, con reserva del juicio político sobre pérdida del cargo. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (13 abril 2026). Discurso que reúne Banco de la República, Congreso y Corte Constitucional dentro de la controversia fiscal. [Fuente oficial](#)
- Petro Urrego, Gustavo. (3 febrero 2024). Publicación que atribuyó al fiscal Francisco Barbosa un “golpe de Estado bajo manto institucional”. [Publicación original en X](#).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (8 julio 2020). Caso Petro Urrego vs. Colombia: destitución e inhabilitación disciplinaria y derechos políticos. [Fuente oficial](#)

CAPÍTULO 7. Movilización, Primera Línea y Fuerza Pública

- Congreso de Colombia. (2022). Ley 2272 de 2022. [Fuente oficial](#)
- Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-525 de 2023. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (14 marzo 2025). Anuncio del día cívico y campaña por el sí. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (1 mayo 2025). Palabras durante la movilización en respaldo a la consulta popular. [Fuente oficial](#)
- [Presidencia de la República. \(21 junio 2025\). Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá: convocatoria y balance oficial. Fuente oficial](#)

- [Presidencia de la República. \(24 junio 2025\). Respuesta presidencial a las críticas por la participación pública de personas privadas de la libertad en el proceso de paz urbana. Fuente oficial](#)
- [El País. \(25 junio 2025\). “Tarimazo”: análisis de la controversia por la presencia de cabecillas criminales en La Alpujarra. Fuente de corroboración](#)
- [Noticias Caracol, Unidad Investigativa. \(24 junio 2026\). Audios de los acercamientos iniciales del Gobierno con el Clan del Golfo. Fuente periodística primaria de las grabaciones divulgadas](#)
- [Caracol Radio. \(24 junio 2026\). Respuesta de Danilo Rueda: fase exploratoria, continuidad de operaciones y explicación sobre la depuración de la Fuerza Pública. Fuente de contradicción](#)
- [Caracol Radio. \(25 junio 2026\). Indagación disciplinaria abierta tras los audios relacionados con el Clan del Golfo. Estado procesal: indagación, no sanción](#)

CAPÍTULO 8. Mérito, confianza y autonomía técnica

- Consejo de Estado, Sección Quinta. (4 julio 2024). Sentencia sobre nulidad del nombramiento de Omar Fredy Prías. [Fuente oficial](#)
- Comisión de Regulación de Energía y Gas. (9 julio 2024). Comunicado sobre el fallo relacionado con Omar Prías. [Fuente oficial](#)
- Corte Constitucional. (2025). Sentencia SU-277 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Policía Nacional de Colombia. (s. f.). Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO): primacía del diálogo y nuevo modelo de intervención. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (3 octubre 2025). “Tenemos que ponernos en modo constituyente”: intervención presidencial sobre comités, firmas y convocatoria. [Fuente oficial](#)
- Consejo de Estado, Sección Quinta. (9 agosto 2024). Confirmación de la nulidad del nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México. [Fuente oficial](#)
- Consejo de Estado, Sección Quinta. (14 marzo 2024). Sentencia de segunda instancia, rad. 25000-23-41-000-2023-00375-02, Andrés Camilo Hernández Ramírez. [Fuente oficial](#)
- Superintendencia Nacional de Salud. (2025). Informe de gestión 2024: medidas especiales e intervenciones administrativas. [Fuente oficial](#)
- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (1 marzo 2023). Decreto 0274 de 2023: nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como ministra de Educación Nacional. [Fuente oficial](#)
- Vicepresidencia de la República. (2023). Perfil institucional de Jhénifer Mojica Flórez como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. [Fuente institucional](#).

- Departamento Nacional de Planeación. (2024). Informe al Congreso 2023–2024: identificación de la dirección general y continuidad institucional. [Fuente oficial](#)

CAPÍTULO 9. Producción política de la realidad

- DANE. (2026). Gran Encuesta Integrada de Hogares: mercado laboral, diciembre de 2025. [Fuente oficial](#)
- DANE. (2026). Empleo informal y seguridad social, trimestre octubre-diciembre de 2025. [Fuente oficial](#)
- Banco de la República. (30 septiembre 2025). Cancelación del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible con el FMI. [Fuente oficial](#)
- Agencia Nacional de Tierras. (30 enero 2026). Informe de Gestión 2025. [Fuente oficial](#)
- Fondo Monetario Internacional. (3 diciembre 2020). Colombia Draws on IMF Flexible Credit Line to Address the COVID-19 Pandemic. Fuente oficial
- Fondo Monetario Internacional. (26 abril 2024). IMF Executive Board Approves New Two-Year Flexible Credit Line Arrangement for Colombia. Fuente oficial
- Corte Constitucional de Colombia. (3 septiembre 2025). Seguimiento a fallas en la entrega completa y oportuna de medicamentos. Fuente oficial
- Defensoría del Pueblo. (6 mayo 2025). El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia. Fuente oficial

CAPÍTULO 10. Corrupción y administración de la culpa

- Fiscalía General de la Nación. (18 marzo 2025). Nueva imputación de cargos contra exdirectivos de la UNGRD. [Fuente oficial](#)
- Fiscalía General de la Nación. (1 agosto 2023). Fiscalía imputa a Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez Castro. [Fuente oficial](#)
- Fiscalía General de la Nación. (2 octubre 2023). Comunicado de prensa 351. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (20 julio 2024). “Asumo la responsabilidad política y pido perdón” por lo ocurrido en la UNGRD. Fuente oficial
- Fiscalía General de la Nación. (1 septiembre 2025). Acusación contra Sandra Ortiz por presunto traslado de dádivas relacionadas con la UNGRD. Fuente oficial
- Fiscalía General de la Nación. (29 enero 2026). Acusación contra Carlos Ramón González por presunto direccionamiento de dádivas con recursos de la UNGRD. Fuente oficial
- Corte Suprema de Justicia. (10 octubre 2025). Confirmación del llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle por hechos relacionados con contratos de la UNGRD. Fuente oficial

- Consejo Nacional Electoral. (8 octubre 2024). Comunicado sobre apertura de investigación y formulación de cargos a la campaña presidencial de 2022. Fuente oficial
- Ecopetrol S. A. (18 abril 2023). Junta Directiva designa a Ricardo Roa Barragán como presidente de Ecopetrol. Fuente oficial
- Ecopetrol S. A. (9 octubre 2024). Comunicado sobre la decisión del CNE relacionada con Ricardo Roa y el seguimiento de la Junta Directiva. Fuente oficial
- Ecopetrol S. A. (6 abril 2026). Decisiones de Junta Directiva: licencia no remunerada solicitada por Ricardo Roa Barragán y designación de Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado. [Fuente oficial](#)

CAPÍTULO 11. Mandato, excepción y poder constituyente

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. (18 junio 2025). Auto de medida cautelar, rad. 11001-03-28-000-2025-00086-00, Decreto 0639 de 2025. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (24 octubre 2025). Comité social, firmas y proyecto de ley para convocar Asamblea Constituyente. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (27 diciembre 2025). Bloqueo institucional y comité promotor de Asamblea Constituyente. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (19 marzo 2024). Palabras del presidente: “el pueblo sin permiso se puede constituir en poder constituyente”. Fuente oficial
- Corte Constitucional. (2 octubre 2023). Sentencia C-383 de 2023, control de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Fuente oficial
- Corte Constitucional. (2025). Sentencia C-207 de 2025, control de la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo. Fuente oficial
- Corte Constitucional. (2025). Sentencia C-467 de 2025, control de medidas adoptadas durante la conmoción interior en el Catatumbo. Fuente oficial
- Corte Constitucional. (9 abril 2026). Sentencia C-075 de 2026, inexecutable del Decreto 1390 de 2025 sobre emergencia económica nacional. Fuente oficial
- Presidencia de la República. (30 enero 2026). “Estamos ante una ruptura del orden constitucional”, declaración frente a la suspensión de la emergencia económica. Fuente oficial

CAPÍTULO 12. Venezuela y comparación de trayectoria

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (28 agosto 2022). Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (24 agosto 2024). Declaración conjunta de Brasil y Colombia sobre la elección venezolana. [Fuente oficial](#)

- Naciones Unidas, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. (6 octubre 2025). Informe A/HRC/60/1/Rev.1. [Fuente oficial](#)
- Centro Carter. (30 julio 2024). Declaración sobre la elección presidencial de Venezuela de 2024. Fuente oficial
- Centro Carter. (17 febrero 2025). Informe final de observación de la elección presidencial de Venezuela de 2024. Fuente oficial
- Presidencia de la República de Colombia. (10 enero 2025). Postura oficial de Colombia frente a la posesión presidencial en Venezuela. Fuente oficial

CAPÍTULO 18. Alternancia y elecciones de 2026

- Registraduría Nacional del Estado Civil. (21 junio 2026). [Comunicado a la opinión pública sobre estampilla de tiempo, hash, consecutivos y acceso a formularios E-14](#).
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos / CAPEL. (18 junio 2026). [Informe de análisis de datos post-electorales: elección presidencial, primera vuelta](#).
- Consejo Nacional Electoral. (24 junio 2026). Resolución Sala Plena No. E-3181 de 2026. [Fuente oficial](#)
- Presidencia de la República. (7 julio 2026). Presidente Petro dijo que entregará el poder el 7 de agosto y que el empalme será ante el pueblo. [Fuente oficial](#)
- Registraduría Nacional del Estado Civil. (21 junio 2026). Resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial de 2026. [Fuente oficial](#)
- Centro Carter. (23 junio 2026). Declaración preliminar de la Misión de Expertos Electorales sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. [Fuente oficial](#)
- Petro Urrego, Gustavo. (6 julio 2026). Publicación sobre supuesto fraude algorítmico y afirmación de que Iván Cepeda era el presidente elegido por los colombianos. [Publicación original en X](#)
- Cepeda Castro, Iván. (24 junio 2026). Reconocimiento del resultado electoral y anuncio de oposición. [Fuente de consulta](#)
- Cepeda Castro, Iván. (30 junio-4 julio 2026). Declaraciones sobre doble nacionalidad, investidura y desobediencia civil pacífica. [Transmisión original; explicación reproducida por Infobae Colombia; comunicado original en X](#)
- Consejo Nacional Electoral. (17 junio 2026). Decisión que negó la solicitud de revocatoria de la candidatura por doble nacionalidad. [Reseña de la decisión](#)
- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. (1 julio 2026). Decisión que negó la tutela sobre la doble nacionalidad del presidente electo. [Reseña judicial de El Espectador](#)
- Petro Urrego, Gustavo. (5 julio 2026). Convocatoria a movilización general para el 20 de julio en defensa de las reformas sociales. [Fuente de consulta](#)

- Presidencia de la República. (20 julio 2026). “Colombia pierde su soberanía nacional, a partir del 7 de agosto, vuelve al virreinato”: guardias libertadoras desarmadas, pacíficas y en red. [Fuente oficial](#)
- El País. (6 agosto 2026). “El día después para Petro”: reconstrucción del discurso de Soacha del 4 de agosto, resistencia popular y referencia a “Abelardo el Breve”. [Fuente de corroboración](#)
- Semana. (5 agosto 2026). “Guardias libertadoras”: transcripción de fragmentos del discurso de Soacha sobre asambleas territoriales y eventual referencia a armas. [Fuente de corroboración](#)
- Infobae Colombia. (7 agosto 2026). “Gustavo Petro oficialmente dejó de ser el presidente de Colombia”: salida de la Casa de Nariño y últimas palabras sobre el final del mandato. [Fuente de corroboración](#)
- NTN24. (7 agosto 2026). “Colombia tiene un nuevo presidente”: juramento constitucional e investidura de Abelardo de la Espriella ante el Congreso. [Fuente de corroboración](#)
- El Espectador. (7 agosto 2026). “Trasladan a jefes criminales recluidos en cárcel de Itagüí a otras cárceles del país”: traslado de 103 internos y reporte de participantes del “tarimazo”. [Fuente de actualización final](#)

BIBLIOGRAFÍA CONCEPTUAL TRANSVERSAL INCORPORADA EN LA AUDITORÍA ADVERSARIAL

- Bermeo, Nancy. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 27, n.º 1 (2016): 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.
- Griffin, Roger. *The Nature of Fascism*. Londres: Pinter, 1991.
- Lührmann, Anna, y Staffan I. Lindberg. “A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?” *Democratization* 26, n.º 7 (2019): 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>.
- Mudde, Cas. “The Populist Zeitgeist.” *Government and Opposition* 39, n.º 4 (2004): 541–563. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>.
- Müller, Jan-Werner. *What Is Populism?* Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Paxton, Robert O. “The Five Stages of Fascism.” *The Journal of Modern History* 70, n.º 1 (1998): 1–23. <https://doi.org/10.1086/235001>.
- Constitución Política de Colombia, arts. 213–215 y 374–379.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-551 de 2003 y C-145 de 2020: poder de reforma, sustitución constitucional y control material de los estados de excepción.

¿ES FASCISTA GUSTAVO PETRO?

Muchos responderían que sí con la misma rapidez con que otros muchos responderían que no.

Este libro se niega a responder rápido.

Aplica al poder un método tomado de la medicina ante un cuadro difícil: el diagnóstico diferencial. Examina primero las explicaciones más simples, enfrenta entre sí populismo, cesarismo, autocratización y fascistización, construye deliberadamente la mejor defensa posible de Petro y define qué hechos podrían refutar la hipótesis antes de conocer el desenlace.

Solo entonces formula un veredicto.

El recorrido va desde el uso presidencial de expresiones como “Heil Hitler” y la construcción moral del adversario hasta la prueba definitiva de las elecciones de 2026: un presidente que negó la legitimidad política del vencedor y sostuvo que el verdadero presidente elegido por el pueblo era otro, pero que finalmente abandonó el poder y permitió la alternancia constitucional.

Esa aparente contradicción —la deslegitimación y la entrega del poder coexistiendo— es precisamente el fenómeno que este libro intenta explicar.

Luis Arturo Lizcano Gil es médico genetista. Durante más de tres décadas ha utilizado el diagnóstico diferencial para abordar algunos de los problemas más complejos de la medicina. Este libro es el resultado de aplicar ese mismo método al poder político.



LIZCANO GIL

AUTOR • EDITOR